

casa y ciudad

**LA RECONSTRUCCION:
del discurso épico al discurso político**



**boletín
informativo no. 4**

Prólogo de Rafael López Rangel

Fotografía:
Nicolás Orozco
Archivo Casa y Ciudad, A.C.

Registro en trámite
D.G.D.A. No. de control: 5029/88
ISBN 968-6224-03-3

Agradecemos a Oxfam A.C.,
Pan para el Mundo y Grupo Imagen
el apoyo prestado para la edición de este libro.

casa y ciudad, a.c. es un organismo sin fines de lucro cuyas funciones son:
proporcionar asesoría y capacitación a las organizaciones populares y realizar
investigación sobre problemas urbanos.

casa y ciudad, a.c. centro de asesoría, capacitación e investigación urbana. apar-
tado postal 113-129. México, 03301, D.F.

INDICE

**casa y
ciudad**

centro de asesoría,
capacitación e
investigación urbana

PROLOGO

INTRODUCCION

PARTE I. EL ESTADO EN LA RECONSTRUCCION

La política de vivienda antes de los sismos
Guadalupe Reyes 15

Los días posteriores a los sismos:
ausencia de respuesta e iniciativa estatal
Antonio Jiménez 29

La estrategia gubernamental frente al
movimiento de damnificados
Guillermo Martín 39

Aspectos financieros de la Reconstrucción
Antonio Jiménez 49

Tlatelolco: la historia de una infamia
Edna Elena Vega Rangel 63

PARTE II. OTROS ASPECTOS DE LA RECONSTRUCCION

Los grados de intervención técnica de
la Dirección de Monumentos históricos
después de los sismos de 1985
Sara Mildred Vázquez 113

La salud en la reconstrucción
Emiliano Acosta 121

PARTE III. LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y POLITICAS

Testimonios sobre la experiencia de las organizaciones
de damnificados 133

Los partidos políticos en el proceso de reconstrucción 165
David Cervantes

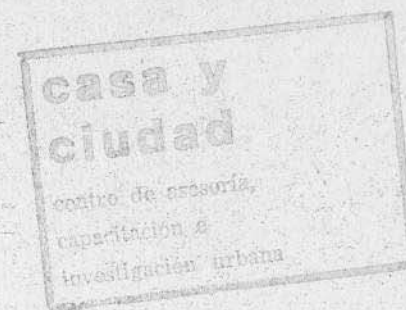
PARTE IV . LA CIUDAD DEL GOBIERNO

Organismos oficiales de vivienda 1986-1987 189
Georgina R. Sandoval

Abasolo 2: Crónica de una agresión anunciada 213
Guillermo Martin

ANEXO

Efectos de los sismos en Ciudad Guzmán, Jalisco 223



***A los vecinos que hoy,
desde los barrios,
defienden la dignidad del pueblo
luchando por una Patria Nueva.***

PROLOGO

TRANSFORMAR LA CIUDAD

centro de acción,
capacitación y
investigación urbana
Rafael López Rangel

Los textos que aquí se presentan, contribuyen de manera harto significativa a la evolución crítica de la llamada reconstrucción de la ciudad de México, echada a andar a raíz de los sismos de septiembre de 1985. Dos hechos determinan en buena medida su importancia: a) la urgencia de plantearnos nuevas maneras de enfrentar la crisis urbana y de la vivienda, dirigidas en función de las necesidades populares; b) quienes elaboraron estos escritos han sido —y son— participantes directos de la reconstrucción de vivienda popular en el centro de la capital de la República; profesionales comprometidos precisamente con los intereses de los damnificados y en general con la población trabajadora.

Ahora bien, no es nuestro propósito glosar aquí las contribuciones de cada uno de los autores —tal cosa se hace en la introducción de este libro— sino de tomar los elementos que nos ofrecen para intentar integrarlos en una visión global en la que tenga cabida también nuestra opinión. Se trataría de una complementación, sólo posible porque nos unen básicas coincidencias con los que escribieron estos documentos. Una de ellas —contundente, aunque lo digamos de manera distinta— es el propósito firme de construir un proyecto contrahegemónico de ciudad que enfrente y revierta las actuales formas de crecimiento de ésta. Una aseveración que ha ido ganando consenso es que esas formas (que también son contenidos), han dado como resultado la descomunal aglomeración de nuestra capital, cada vez más hondamente segregada, deficitaria, depredada y depredadora. Y por si fuera poco, vulnerable en grado tal que no sería exagerado afirmar que su desarrollo contemporáneo le ha conferido aptitudes para la tragedia colectiva. Por eso hemos dicho en varias ocasiones que los sismos de septiembre de 1985 pusieron al descubierto, súbitamente, aberraciones e injusticias de un preceso urbano basado en la ganancia privada, la concentración del poder y el consenso político.

También se evidenció con los sismos, por un lado, la incapacidad de las instituciones gubernamentales para enfrentar *de inmediato* un estado de emergencia y por el otro, las *posibilidades* de la población para hacerlo, a pesar

del espontaneísmo de los primeros días. Con esas características iniciaron sus acciones las dos fuerzas sociales que han sido el eje de la reconstrucción de la ciudad de México, y si alguna cosa queda clara para nosotros, es que entre ambas existen abismales diferencias. Yesto es así aún dentro de la estrategia de "concertación" orquestada por el gobierno precisamente para paliar las contradicciones y frenar el movimiento de los damnificados, que ya se perfilaba peligroso para el régimen.

En esos trágicos días, no pocos pensamos que tanto para el gobierno como para la población, se presentaba la oportunidad de llevar a cabo prácticas inéditas que tendieran a revertir aquellas líneas de crecimiento y transformación de la ciudad. O que al menos se intentara, permitanos la frase, *una reconstrucción que ya no tuviera las características negativas de la construcción*, para que la "vuelta a la normalidad" no consistiera en una peligrosa e injusta continuidad sino en una necesaria ruptura. Desafortunadamente, sobre todo en el caso del gobierno esto no fue así, ya que una vez que inicia el control de la situación, aplica criterios tradicionales, tales como el contratismo —que no se desprendió de sus manejos corruptos y voraces— y la venta de la vivienda a "sujetos de crédito" (sólo que ahora estos serían damnificados). Y así, dentro de paliativos y facilidades, el ámbito de los damnificados fue visto y tratado como un campo de inversiones redituables. La rentabilidad privó nuevamente, sobre la justicia y los valores humanos. Las víctimas vivas de los terremotos lo serían ahora del capital financiero e inmobiliario. Y recordemos de paso ya que se presenta la ocasión, que no hubo castigo a responsables —ni siquiera búsqueda seria de estos— y por lo tanto indemnizaciones, etc: los sismos fueron vistos por las esferas oficiales como un inesperado golpe de la naturaleza, de cuyas consecuencias no había que pedir cuentas a nadie.

Volvamos a la reconstrucción de la vivienda. Cuando uno pregunta por qué no se abrieron los cauces a la autoconstrucción y a los procesos autogestivos, se nos responde invariablemente, que con esas formas de organización no se hubieran podido garantizar costos y tiempos de realización de las obras. Por eso, según tal criterio, nada más seguro que el *sistema de contratos con empresas privadas*. Y por otra parte, cuando se cuestiona el uso de mecanismos rentables, se nos trata de demostrar que no había dinero para satisfacer la demanda de vivienda producida por los sismos, y que por lo tanto no hubo más remedio que recurrir a un empréstito del Banco Mundial, bajo la aceptación de las condiciones de éste.

Al respecto de la primera cuestión, para nosotros es evidente que el gobierno quería tener un control absoluto de la situación, a través de la centralización de decisiones. Impulsar la autogestión y la autoconstrucción hubiera sido darle juego a la población y a sus organizaciones lo cual era peligroso e indudablemente *indeseable*. Por lo demás, la urgente necesidad de vivienda —agravada por la situación de los campamentos de damnificados— parecían validar los argumentos oficiales. La ausencia de una alternativa inmediata por parte de las organizaciones de la población —salvo algunas excepciones— y de los partidos políticos de la izquierda, coadyuvó a la imposición de la línea gubernamental. El control estatal se consumó cuando se aplicó a las excepciones mencionadas la estrategia de la concertación, ya que metió en el mismo saco, prácticamente a todas las acciones de construcción de vivienda. Resulta significativo que en el proceso de edificación y cuando se orquestaba la concertación, el gobierno logró un consenso que ya había despuntado cuando se llevó a cabo la expropiación de los predios. Naturalmente ese consenso fue efímero, pero le permitió al régimen un ventajoso espacio de maniobra.

Dentro de ese espacio se impuso la operación financiera a los adquirientes de la vivienda a través de sistemas crediticios, la operación con los damnificados parecería *normal* e incluso *benevolente* por la blandura de los créditos y la previa "ayuda de renta", etc. Sin embargo, apenas a un año de recibidas las casas del Programa de Renovación Habitacional Popular, la mensualidad dejaba de ser asequible para un buen número de familias. Este problema, seguirá creciendo, con las consecuencias que acarrea el incumplimiento de los contratos respectivos, que en este caso seguramente rebasará los límites jurídicos.

Un acto de verdadera justicia hubiera sido que el costo de la vivienda para los damnificados del centro recayera en los auténticos beneficiarios del desarrollo urbano: fraccionadoras, inmobiliarias, el comercio monopólico. Tal proceder hubiera correspondido en las circunstancias del momento, a un estado de excepción, de angustiosa emergencia, como lo fue el del sismo. Ni soñar que el gobierno pudiera haber procedido así pero hay que decirlo. Con "imaginación" —término grato a nuestros gobernantes— se podían haber encontrado alternativas para no cargar a las víctimas el peso mayor de la reconstrucción de su vivienda, pero los funcionarios y los intelectuales orgánicos al sistema *no quisieron abrir opciones que no fueran las que apoyan a la privatización y el encarecimiento de la urbe*: "quien quiera tener vivienda, servicios y disfrutar la ciudad, que pague lo que todo ello cuesta", parece ser el lema de las autoridades del D.F., y del país. Les obsesiona en esta época de

crisis la autofinanciabilidad de la ciudad. El derecho a la ciudad, se ha convertido en las posibilidades de pagar su uso y esas posibilidades se ven ahora considerablemente restringidas. Por último, que el gobierno no tuviera dinero *inmediato*, listo para invertirse en vivienda popular para los damnificados —a pesar de los recursos de los donativos para la reconstrucción— suena lógico, ya que es una de las consecuencias de décadas de política económica decitaria, inflacionaria y recesiva. El empecinamiento en pagar la impagable deuda, ata de las manos al régimen para invertir en obras sociales. Por eso, la “normalidad” es el endeudamiento creciente, el deterioro de las condiciones materiales de vida, el encarecimiento de todos los productos, incluyendo alimentación y vivienda, etc., etc. La “normalidad” es también la falta de democracia, el autoritarismo en la toma de decisiones en aquellas cuestiones que atañen directamente a la vida ciudadana de la Capital de la República. La “normalidad” es pues, todo lo que se ha derivado de una política y una estrategia de desarrollo que lleva aceleradamente a la inmensa mayoría de los habitantes de esta ciudad —y no sólo de ésta— al habitat de la pobreza.

Los sismos se encontraron con *ese tipo* de normalidad. Y a juzgar por las acciones gubernamentales, a esa normalidad nos siguen llevando los conductores de nuestro rumbo citadino y nacional.

Los sismos se encontraron también con una ciudad construida *contra natura* alimentada, desalojada y erigida con sistemas que han atentado contra el ecosistema del Valle de México. Y tal caso en parte reconocido por los grupos dirigentes no ha sido enfrentado con seriedad por las instancias a quienes correspondería. Si no fuera porque ya estamos acostumbrados a la paradoja y al absurdo, nos llenaría mínimamente de estupor saber que meses antes del sismo la Secretaría de Asentamientos Humanos, y Obras Públicas (hoy SEDUE) canceló su Dirección de Emergencias Urbanas, seguramente pensando que no se justificaba, su presupuesto. Asimismo, seríamos presos de indignación cuando el más alto funcionario del Sector Salud declaró que ante el peligro de la contaminación atmosférica de la Ciudad de México, ese sector estaba presto para actuar responsablemente: están listas las ambulancias para recoger a las víctimas.

Seguramente los damnificados, y la población entera, no queremos esa “normalidad”. Y cuando se nos habla de descentralización, y se nos presenta como la estrategia *clave* para frenar los efectos negativos del desarrollo urbano de la capital, lo que exigimos es cambiar el contenido de todo el desarrollo. Naturalmente “debemos desconcentrar” la ciudad de México, pero tal

cosa sólo será posible mediante cambios en todo el ámbito nacional. Se requeriría aplicar una estrategia de *dos líneas fundamentales*: *Reforma Agraria total, antiespeculativa, nacionalista, democrática, generadora de empleos, e impulso a los asentamientos medios y pequeños, pero impidiendo cualquier tendencia de crecimiento que priorice el negocio privado.*

Pero aun así, la capital seguirá siendo de gran tamaño, y debemos actuar en consecuencia, para que pueda alojar en mejores condiciones y con menos riesgo que ahora y más de treinta millones de habitantes que tendrá en menos de 15 años, de los cuales cuando menos veinte millones serán todavía pobres. Naturalmente, y por fortuna, ya casi todo el mundo lo sabe, las decisiones acerca del destino de nuestra capital —por hablar sólo de ella— deben estar en manos de sus habitantes. De no ser así, ni el propio Angel podrá defendernos, aunque resista los próximos sismos.

Rafael López Rangel.
10 de junio de 1988.

INTRODUCCION

Desde todos los ámbitos, posiciones ideológicas y relaciones de poder, se reconoce que la Ciudad de México se encuentra en crisis. Crecientemente vulnerable después de décadas de crecimiento desenfrenado y alentado por el gobierno dentro de la crisis, más allá de su gigantismo, la Ciudad de México constituye un caso ejemplar de la crisis urbana del tercer mundo.

El influjo por una parte, de una política económica recesiva, antipopular y antinacional aplicada por el PRI-Gobierno durante los últimos años, aunado a la tragedia de septiembre de 1985 pusieron en primer plano, en el plano de la movilización social, una madeja de conflictos estructurales que venían gestándose de décadas atrás:

Una economía especulativa apoyada en la pauperización incessante de las mayorías (hasta el límite de la exasperación) y una privatización creciente de la propiedad en la ciudad, que obstaculiza cada vez más la socialización de la vida cotidiana.

Un uso del suelo como soporte de procesos de valorización-especulación, destruye la posible utilidad social de la tierra e impide su uso y disfrute por la colectividad. Una orientación creciente del gasto público hasta el apuntalamiento de un capitalismo parasitario adelgaza cada vez más la franja destinada a amortiguar las expresiones más gruesas de la crisis social. Un gobierno vertical, autoritario, antidemocrático que intenta taponar los poros vitales de la sociedad.

Una política urbana anquilosada, territorialmente desarticulada, de intervención coyuntural. Anarquía y dispendio desde la perspectiva de la utilidad social de la ciudad; racionalización, privatización, beneficios gigantes desde la óptica del neoliberalismo empresarial en boga.

La crisis de la ciudad de México a partir de septiembre de 1985 no fue sólo la crisis de los damnificados y los daños provocados por los sismos, fue la crisis de un proceso de urbanización que se expresó en una lucha ciudadana ejemplar, sin precedentes contra una agudización del problema de la vivienda, los servicios, el transporte, contra la antidemocracia y el autoritarismo del PRI- Gobierno, contra un empeoramiento sistemático de las condiciones de vida y convivencia en la ciudad.

La intervención Estatal en esta coyuntura, demostró ante todo, que sus mecanismo de control corporativo se desgastan pero aún operan con efectividad. Indudablemente, el Estado cuenta con capacidad política, jurídica y técnica para implementar soluciones en gran escala al problema de la vivienda, como lo demostró con la expropiación y el programa de Renovación Habitacional Popular (RHP). Pero demostró también, que este tipo de medidas fueron inscritas en una coyuntura excepcional, con el objetivo primordial de volver a la normalidad; es decir, de reconstruir el dominio sobre un movimiento social del pueblo, autónomo, amplio y profundo.

Pese a la tragedia y a que la reconstrucción ya es historia, el saldo desde la perspectiva del movimiento urbano popular es muy positivo. Las organizaciones vecinales y las formas amplias y pluralistas de coordinación han dado un salto de calidad. La experiencia de amplios sectores de la población, de haber sido gobierno de facto frente a la tragedia y al inmovilismo inicial del PRI- Gobierno, no se borrará jamás de la memoria colectiva. La intervención de las masas en la coyuntura de la reconstrucción demostró contundentemente el profundo sentimiento de solidaridad, la gran capacidad de iniciativa, las aspiraciones de un cambio democrático y una vida mejor que crecen en la cotidianeidad de la vida y la conciencia del pueblo.

Frente a las alegres cuentas superficiales y el futuro cada vez más gris que se vislumbra, hay un antes y un después de septiembre de 1985 en la vida de las masas, que hoy se proyectan hacia nuevas y más amplias experiencias de lucha.

Estamos seguros de que la antología de textos sobre la reconstrucción que en esta ocasión presenta CASA Y CIUDAD contribuirá a la difusión y reflexión en torno a esta singular experiencia, cumpliendo ampliamente con su cometido original.

El presente estudio sobre la reconstrucción surge de una doble necesidad. Por una parte, en la línea de publicaciones de Casa y Ciudad se busca examinar desde diferentes ángulos y bajo una mística de trabajo de equipo, un fenómeno que marca un antes y un después en la vida de las masas ciudadanas. Por la otra, las vivencias desde las organizaciones vecinales y las áreas de investigación y asesoría técnica durante el proceso de reconstrucción fueron conduciendo a la inquietud de registrar por lo menos algunos aspectos de una singular experiencia.

Ajena a cualquier pretensión academicista, con huecos y temáticas sin duda ausentes, esta investigación tiene como virtud el estilo empírico y pragmático característico de las publicaciones de Casa y Ciudad.

Los autores son miembros y colaboradores del centro que tuvieron diferentes niveles de participación durante el proceso de la reconstrucción, en aspectos de investigación, capacitación y asesoría técnica.

Los artículos que conforman esta antología abordan los siguientes temas:

1. En el ensayo sobre la política de vivienda * antes de los sismos, se desarrolla un análisis del entonces calificado como programa de vivienda más ambicioso en la historia de México. Con abundantes datos se ponen en relieve los rasgos característicos de la política de vivienda, tales como: no afectación de la propiedad privada del suelo; preminencia de los intereses de la industria de la construcción en su diseño; priorización de la demanda solvente sobre la necesidad social; rezago de ejecuciones frente a metas, demanda anual de unidades y, déficit acumulado.

Dada la magnitud del problema de la vivienda generada por el propio desarrollo del capitalismo, la política estatal no marcha hacia la solución de la demanda social, sino como una contratendencia que, por una parte apuntala a un sector empresarial, y por la otra, se inscribe como un aspecto de la dominación de los sectores populares.

2. Los días posteriores a los sismos: ausencia de respuesta e iniciativa estatal. La irrupción de una nueva y poderosa fuerza civil durante las primeras semanas después de los sismos pone en evidencia, ante todo, la potencialidad de la participación democrática de las masas ciudadanas, experiencia que queda grabada indeleblemente en la conciencia colectiva.

Desde la óptica estatal, el hilo conductor de su política se centró en dislocar una situación de emergencia, buscando el retorno a la normalidad. Retomar la iniciativa frente al movimiento popular con medidas como la expropiación de predios dañados por los sismos, fraccionar y dispersar mediante una compleja red burocrático administrativa, canalizar la enorme convulsión social llevando adelante una respuesta reivindicativa muy parcial.

3. En el análisis sobre la estrategia gubernamental frente al movimiento de damnificados, se buscó destacar el carácter preponderantemente político de la respuesta oficial frente a un movimiento que demostró inicialmente mayor decisión y capacidad organizativa que el gobierno. Menguado en sus rasgos populistas de antaño, el Estado demuestra su capacidad de desarrollar medidas extraordinarias puntuales aún contra la voluntad de la burguesía en aras de retomar el control sobre un amplio y legítimo movimiento social. Por otra parte, se evidencia como los triunfos reivindicativos son progresivamente refuncionalizados como mecanismos de control social.

Se reseñan también actitudes ilustrativas de diversas fuerzas sociales frente a las medidas de emergencia tomadas por el gobierno, particularmente en torno al derecho de propiedad por una parte, y frente a las necesidades sociales de la población por la otra.

4. Aspectos financieros de la reconstrucción. Llama la atención el clima de desconfianza del grueso de la población frente a las autoridades, desconfianza que parte de su exclusión por principio en la toma de decisiones sustentada en la política gubernamental.

La captación de recursos extraordinarios es manejada sin duda con habilidad, permitiendo una moratoria provisional en el pago de la deuda, la inyección de divisas vía créditos especiales para la reconstrucción, el respaldo patente al régimen de múltiples fracciones de la burguesía a través del Fondo Nacional para la Reconstrucción (FNP), e incluso la utilización de recursos del gasto corriente.

Sobre el funcionamiento de RHP, se reseñan las características principales de la etapa en que Parceró López estuvo al frente de este organismo, el éxito gubernamental en torno al Convenio de Concertación Democrática -mecanismo desde entonces en hodega- y, finalmente, la etapa de iniciativa y ejecución del programa emergente bajo la dirección de Manuel Aguilera (homogenización de condiciones crediticias y normas de construcción, estatuto de proyectos no gubernamentales).

5. En el trabajo sobre Tlatelolco: la historia de una infamia, los protagonistas, los habitantes de la unidad habitacional, toman la palabra, a través de una rica compilación de testimonios, apoyado en información documental y ensahado cronológicamente en etapas claramente diferenciadas; el trabajo lleva con amenidad a hacerse una visión de conjunto tanto del proceso de sus organizaciones vecinales como de los acontecimientos posteriores a septiembre de 1985, que se han encargado de colocar en su justo sitio a las doctrinas urbanas de la cirugía y el racionalismo corbuseriano, como a las ideologizaciones oficiales sobre la "majestuosidad ciudadana autónoma" ejecutada al amparo de la Alianza para el Progreso.

De ahí se sigue a relatar en los testimonios la historia de las principales organizaciones vecinales de la unidad, en especial del Comité Coordinador de Asociaciones de Residentes de Ciudad Tlatelolco, A.C. y de la Coordinadora de Cuartos de Azotea (CCAT).

Del período que se abre con los sismos, se examina el conflicto originado por la irregularidad de FONHAPO en el mantenimiento estructural de los inmuebles, la emergencia del movimiento de damnificados, las negociaciones y conflictos frente a la prepotencia de las autoridades y priistas. La respuesta inicial del Estado se centra en una solución insatisfactoria a las indemnizaciones, dotación dispersa de vivienda en la periferia de la ciudad y búsqueda de fisura mediante mecanismos de dispersión las organizaciones vecinales. Se destaca, en especial, la combatividad y solución favorable a la lucha emprendida por la CCAT.

El Programa de Reconstrucción de Tlatelolco que logra finalmente negociarse con SPDF, se describe ampliamente incluyendo negociaciones, alcances del programa, mecanismos de recuperación, y sobre todo valoraciones que de ello hacen representantes de las organizaciones vecinales.

Por último se analizan las perspectivas de las organizaciones vecinales, destacando la siempre combativa CCAT con su visión social y territorial que rebasa ampliamente los marcos de la problemática de unidad.

6. En el ensayo desarrollado por una compañera del Departamento de Estudios de Antropología Social del Instituto de Antropología e Historia (INAH) sobre los grados de intervención técnica de la Dirección de Monumentos Históricos en el Centro Histórico después de los sismos, cuyos trabajadores tuvieron un acercamiento al proceso de reconstrucción, se analizan algunas de las tendencias de la urbanización capitalista que atentan simultáneamente contra las condiciones de vida de la población y las ricas experiencias de la cultura arquitectónica en el trabajo del centro urbano.

Se desarrolla una apreciación crítica, más allá de las limitaciones presupuestales del organismo, de su incidencia en la conservación de monumentos históricos durante la reconstrucción, de las iniciativas truncadas de los trabajadores de base, en síntesis, del papel muy secundario que ocupa la conservación de monumentos históricos en la óptica oficial.

7. La Salud en la Reconstrucción. Los sismos de septiembre no sólo pusieron en relieve la grave problemática estructural de la vivienda, sino que también pusieron en primer plano otros aspectos vinculados a la vida cotidiana de la población, tales como el abasto, la educación, la salud, la participación social. En este ensayo se hace una caracterización del sistema de salud pública en México. El crecimiento cuantitativo de la cobertura aunado al decrecimiento de la calidad del servicio, se vincula a los recortes del gasto público propios de la política económica fondomonetaristas del gobierno. Se destaca el enfoque curativo sobre lo preventivo, la preeminencia de la reconstrucción hospitalaria sobre una verdadera reestructuración orgánica del sistema de salud, frente a un cuadro de padecimientos de raíz primordialmente socioeconómica.

Se analiza brevemente la problemática de los trabajadores de la salud a partir de un nuevo repunte de su movilización que busca condiciones laborales menos desfavorables a la par de un mejoramiento en la orientación y calidad de los servicios.

Se analizan también, las experiencias y potencialidades de las demandas sociales articuladas en torno a la problemática de la salud pública a partir de iniciativas de diversas organizaciones vecinales y de una visión crítica de la profesión médica.

8. Testimonios sobre algunas experiencias de organizaciones de damnificados, compuesto por tres documentos: reseña de la experiencia de un miembro de la CUP y de la Unión Popular de Inquilinos de la Colonia Morelos-Peña Morelos (UPICM-PM); el testimonio de una compañera dirigente de la misma Unión y la experiencia de los vecinos de la colonia Guerrero.

Los testimonios revisten un especial interés, ya que aportan una visión interior del proceso, desde una organización social sólida y de amplio prestigio en el Movimiento Urbano Popular.

El primer documento de esta serie se inicia con una breve cronología que contextualiza los testimonios en los momentos de expropiación, constitución de la CUP y negociaciones posteriores con las autoridades.

Se describe la experiencia días después de los sismos, el crecimiento orgánico y actividad para el rescate, la constitución de campamentos y centros de acopio, y el inicio de los labores de asesoría técnica. Resalta la tónica inicial de las negociaciones donde las autoridades pretenden minimizar o de plano ignorar tanto la gravedad de los problemas, como la potencia del proceso organizativo en marcha.

Se analiza detalladamente el surgimiento y desarrollo de la CUD como producto del sentimiento unitario entre la población, y la ausencia de estructuras de participación que respondieran a la dinámica del momento. Se hace un balance de los errores, obstáculos y aciertos durante los mejores momentos de la CUD. Entre los aciertos tenemos su pluralismo y autonomía como organización social, su capacidad de aglutinación e impulso a gran número de organizaciones vecinales, su constitución como interlocutor permanente y su papel como contrapeso a la táctica gubernamental de fraccionar al movimiento de damnificados por zonas, programas y categorías.

Se analizan los alcances y condiciones, desde la óptica de los beneficiarios de los diversos programas gubernamentales de reconstrucción, algunos de cuyos rasgos fueron calcarlos por el gobierno a partir de las experiencias independientes de reconstrucción impulsadas por organizaciones como la UPICOM-PM.

En el segundo documento se hace una reseña de la experiencia de la UPICOM-PM, resaltando en especial su crecimiento y maduración a partir de 1985. De una manera crítica se analiza el proyecto de vivienda independiente, impulsado por la Unión, destacando sus límites y perspectivas desde la óptica de su vida orgánica.

Finalmente, el tercer documento se desarrolla en el ámbito territorial de la colonia Guerrero, se describen las dos experiencias de reconstrucción no gubernamentales de la zona, destacando sus diferencias en cuanto a forma de asesoría, financiamiento, recuperación, participación vecinal, alcance cuantitativo y prototipos de vivienda. Se hace una evaluación final, ponderando las ventajas y dificultades de la autoconstrucción, autoadministración e intervención de las constructoras controladas por las organizaciones sociales.

9. Los partidos políticos en el proceso de reconstrucción. Resulta de gran interés el análisis de la participación del espectro de fuerzas políticas involucradas en el portentoso movimiento de masas desarrollado a partir de septiembre de 1985. Por una parte, prácticamente todo el espectro político nacional se vio involucrado en el proceso de reconstrucción. Por la otra, es en los momentos de crisis, donde diversas fuerzas políticas muestran su verdadera naturaleza.

Pese a su actual beligerancia, en el extremo derecho del abanico, destaca la defensa de la propiedad por parte del PAN ante el decreto expropiatorio y su ausencia conspicua en un amplio, legítimo y popular movimiento de masas.

Por su parte, el partido oficial evidenció inicialmente su incapacidad, su prepotencia, su ausencia de compromiso y superficial vinculación con el movimiento social. Durante la implementación de los programas oficiales, juega un papel secundario, como ministerio de promoción clientelar del gobierno y de debilitamiento de los procesos organizativos independientes. Reviviendo mecanismos populistas ya desgastados, logra fortalecerse a partir de una articulada coordinación y división de tareas tanto con las autoridades del PDP, como con los organismos reestructuradores que privilegian su papel de gestor.

Desde la izquierda, la participación es muy amplia. Abarca tareas de conducción, iniciativas de movilización, definición de perspectivas, iniciativas parlamentarias, trabajo de organización y gestión. Tal vez, los logros más importantes de la izquierda y del movimiento popular hayan sido la consolidación de organizaciones vecinales permanentes; el salto de la problemática de la vivienda al de la defensa de los derechos individuales, sociales y políticos de las mayorías; el constituir en el ámbito de la ciudad al MUP en principal interlocutor independiente del pueblo con el gobierno; y, la experiencia unitaria a la que en muchos momentos obligó el propio empuje de las masas.

10. Organismos Oficiales de Vivienda 1986-1987. En este ensayo se busca caracterizar la evolución de la política de vivienda del Estado Mexicano, las líneas generales de los diversos organismos de vivienda, los alcances de la política habitacional 1986 y las perspectivas de los proyectos independientes de reconstrucción.

Resalta entre otros rasgos permanentes, la traba que representa la propiedad privada del suelo para la ejecución de programas oficiales, su estratificación según categorías de beneficiarios, el rol fundamental de impulso al sector de la construcción en el diseño de la política de vivienda, así como, el mínimo presupuesto frente a la importancia política de programas dirigidos a sectores no asalariados. Se destaca lo nuevo que aporta el programa de Renovación Habitacional Popular desde la óptica oficial, en especial la efectividad técnica, de control social y de reconstrucción de la clientela política oficial, barrido el obstáculo de la propiedad privada del suelo a partir de la expropiación.

11. Ahasolo 2: Crónica de una agresión anunciada. La lucha por la defensa de la vivienda, como movimiento inquilinario ha sido desde hace décadas el eje fundamental de construcción de las uniones vecinales en la zona central de la ciudad. Pese al interludio que significó el proceso de expropiación-reconstrucción, los conflictos inquilinarios han vuelto a ocupar un lugar preponderante en la vida vecinal. En este breve ensayo se analiza en primer término el acicate que representa la actual política económica para la agudización de los conflictos inquilinarios por vía de los aumentos de rentas, presiones de caseros para la especulación con predios y retraimiento en la producción de vivienda de interés social. Además de las reformas de 1936 al Código Civil que vuelven aún más expeditos los juicios de deshaucio y lanzamientos, se evidencia en este estudio de caso de la intención gubernamental de imponer autoritariamente una medida absolutamente antipopular, golpeando a una de las organizaciones sociales con mayor tradición de defensa inquilinaria en la ciudad.

12. Ciudad Guzmán. Los sismos de septiembre de 85 afectaron también amplias zonas de Guerrero, Michoacán y Jalisco. Del ensayo sobre la experiencia de reconstrucción en Ciudad Guzmán destaca ante todo el centralismo exacerbado del sistema político. Protagonizaron la movilización de más de 20 mil damnificados, los Comités Eclesiales de Base e instituciones no gubernamentales. La reconstrucción de Ciudad Guzmán desata una tardía intervención estatal que busca contrapesar una indisputada presencia de la comunidad católica en el proceso.

El material aquí reunido, pese a las ausencias -experiencias microsociológicas, aspectos físico-espaciales a nivel urbano, crítica arquitectónica, temáticas sectoriales- se centra ante todo en la reconstrucción pensada como un proceso social. Seguramente, aporta elementos a la reflexión y al debate -siempre rico y vivo- en torno al creciente movimiento urbano popular. Para los autores y para el centro, ha sido una experiencia enriquecedora el confrontar puntos de vista, sistematizar y elaborar este material, aunque como siempre, la vida le lleve la delantera a lo vivido.

EL ESTADO EN LA RECONSTRUCCION

POLITICA DE VIVIENDA ANTES DE LOS SISMOS

GUADALUPE REYES

1. Programa Nacional para el Desarrollo de la Vivienda

El Programa Nacional Para el Desarrollo de la Vivienda (PRONADEVI) formulado para orientar la política habitacional del sexenio 1983-1988, se apoya en un diagnóstico parcial de la problemática de vivienda. En este programa, el problema habitacional del país parece reducirse a una cuestión de déficit de vivienda y malas condiciones de éstas, dejando de lado aspectos centrales de la problemática que intenta abordar, por ejemplo, apenas se contempla de manera superficial la situación de la vivienda en renta.

Como resultado del limitado diagnóstico que hace el PRONADEVI, todo su contenido se orienta fundamentalmente a la vivienda en propiedad (programas para construirla o mejorarla, financiamiento para impulsarla, criterios para distribuirla en el territorio nacional, etc).

A pesar de partir de un diagnóstico estrecho, el PRONADEVI 1984-1988 se presenta como un programa sin precedentes, "el más ambicioso en la historia de la nación" (1), y de hecho sus objetivos generales y metas estructurales son muy ambiciosos.

Dichos objetivos podrían sintetizarse de la siguiente manera:

- Establecer las condiciones necesarias para que todos los mexicanos cuenten con una vivienda digna y decorosa.
- Estructurar acciones de vivienda como factor de desarrollo económico y social, de ordenamiento territorial y de estructuración urbana.
- Garantizar la atención a la demanda de vivienda, con la participación de los sectores público, privado y social.

En cuanto a las "metas estructurales" del PRONADEVI destacan:

- Construir reservas territoriales y establecer oferta pública de suelo para vivienda de interés social.
- Lograr la producción y distribución de materiales para la construcción de vivienda bajo criterios de equidad social y productividad, atendiendo prioritariamente a sociedades cooperativas, personas de escasos recursos que realicen autoconstrucción y a población rural.
- Desarrollar sistemas y tecnologías constructivas social y regionalmente adecuadas.
- Establecer las bases que permitan la descentralización de la vivienda.
- Mejorar la coordinación administrativa entre los organismos que intervienen en la política habitacional.

Para responder a los objetivos generales y metas estructurales, el PRONADEVI trazó objetivos específicos, metas de corto y mediano plazo y criterios generales de estrategia, todos ellos ligados con el programa económico formulado inicialmente por el gobierno de Miguel de la Madrid.

El Programa Inmediato de Reordenación Económica (PIRE) planteaba la división del sexenio en dos etapas: la de Reordenación Económica (de 1983 a 1984), que contemplaba ajustes a la economía sacrificando el gasto social y la de Cambio Estructural (1985-1988).

Con respecto a la reordenación económica el programa de vivienda se proponía como objetivo atender prioritariamente la construcción de vivienda progresiva, el mejoramiento de la vivienda y la constitución de oferta de tierra pública para vivienda, apoyando la autogestión constructora habitacional. Este objetivo parecería responder a lo que el propio PRONADEVI señalaba como causas "coyunturales" de la problemática de vivienda, a saber: a) disminución de la actividad económica; b) tradicional orientación de la inversión habitacional hacia la vivienda terminada; y c) irregularidad en la tenencia de la tierra.

A pesar de que la inversión pública en materia habitacional forma parte del gasto social, que de acuerdo con el PIPE debía reducirse durante la etapa de reordenación económica, se anunciaron recursos destinados a la construcción de viviendas para este lapso, como una inversión espectacular.

Se aseguraba que el PRONADEVI implicaba una inversión pública sin precedentes, ya que para 1984 significaría: a) la atención del 50% de la demanda habitacional generada en el año (demanda estimada en más de 500 mil unidades); b) la utilización de 148 mil trabajadores más que en 1983; c) beneficiar a un millón y medio de personas; d) invertir en vivienda 1.7% del Producto Interno Bruto (PIB), rebasando por primera vez en la historia del país el 1% del PIB para aproximarse al 2% recomendado por organismos internacionales.

Así pues, lejos de pensarse en reducirse la inversión pública en vivienda, como se sacrificaban otros rubros del gasto social se contempla la ampliación de los recursos destinados a la política habitacional. La razón de esto probablemente la encontramos en los "criterios base de la estrategia" expuestos en el PRONADEVI. Ahí se hablaba de instrumentar programas que contribuyeran a la reactivación económica y la protección del empleo.

Mediante el impulso a la producción de vivienda se buscaba reactivar a la industria de la construcción. Esta rama industrial se consideraba fundamental para los objetivos de reordenación económica ya que: contribuye en forma importante a la generación de empleos para mano de obra no calificada; activa otras ramas de la industria, como las del acero y el cemento; los productos que construye tienen un mercado seguro, pues trabaja sobre pedido; y finalmente, ante el marcado déficit de vivienda, existe una demanda latente, que hace previsible un campo potencial de actividad.

En esta línea de incentivar a la industria de la construcción, el PRONADEVI se fijó como meta para 1984 la realización de 270 mil 624 acciones de vivienda, además de la terminación de 160 mil 356 acciones que estaban en proceso desde años anteriores.

Aunque el objetivo específico para la etapa de reordenación económica era dar prioridad a programas de vivienda progresiva y mejoramientos de vivienda, apoyando la autogestión constructora, en la práctica se siguió privilegiando la inversión en vivienda terminada, a más de dejar un lugar marginal al financiamiento de la vivienda en renta. Lo anterior se puede apreciar en el siguiente cuadro:

METAS DE RESULTADOS 1984

| | VIVIENDA TERMINADA | | VIVIENDA PROGRESIVA | | MEJORAMIENTO | | TOTAL | |
|--------------------------------|--------------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|-----------|-----|
| | absoluto | % | absoluto | % | absoluto | % | absoluto | % |
| ACCIONES A INICIAR | 144,801 (1) | 53.50 | 82,488 | 30.50 | 43,335 | 16.00 | 270,624 | 100 |
| VIVIENDAS EN PROCESO | 83,869 (2) | 52.30 | 62,375 | 38.80 | 14,092 | 8.70 | 160,356 | 100 |
| INVERSION millones de pesos | 250,280 | 69.47 | 66,390.5 | 18.42 | 43,566 | 12.09 | 360,236.5 | 100 |

(1) 137,756 correspondía a vivienda propia; y sólo 7,045 (4.84%) a vivienda renta.

(2) 81,154 eran viviendas propias y apenas 2,735 (3.26%) viviendas en alquiler.

FUENTE: Elaborado con datos del Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Vivienda 1984-1988, pag. 114.

Si en el Programa de Vivienda de 1983, elaborado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) se señalaba que durante 1984 se destinaría únicamente 28% de los recursos a programas de vivienda terminada, en el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Vivienda 1984-1988, se dio un giro decidiéndose que en 1984 el 69.5% de la inversión en materia habitacional se dirigiera a los programas de vivienda terminada, precisamente la que produce la industria de la construcción, dejando sólo el 30.5% de los recursos para programas de vivienda progresiva y mejoramiento de vivienda, programas en los que hay más posibilidades de impulsar lo que el PRONADEVI llama autogestión constructora (participación de la población a quien se pretende beneficiar).

Al optarse por privilegiar la inversión en vivienda terminada, se hacía a un lado uno de los lineamientos básicos del Programa de Vivienda diseñado para el sexenio, según el cual había de adecuarse el financiamiento para construcción en favor de sectores sociales de escasos recursos y particularmente de trabajadores no asalariados, marginados de zonas urbanas y campesinos. Este tipo de población prácticamente no tiene acceso a los programas de vivienda terminada debido a que no cubren el mínimo de ingresos exigidos en éstos.

En síntesis, para el período de reordenación económica, el papel fundamentalmente asignado -aunque no explícitamente- a la política de vivienda fue el estímulo a la industria de la construcción.

Para la etapa de Cambio Estructural (1985-1988) marcada en el programa económico de Miguel de la Madrid, (en la que se suponía que, contando con bases firmes sentadas en el bienio 1983-84, se realizarían cambios económicos profundos y se atendería a las necesidades sociales), el PRONADEVI fijaba nuevas metas y objetivos tendientes a modificar lo que se consideraban causas estructurales de la problemática de vivienda. Entre estas causas el Programa de Desarrollo Urbano y Vivienda señalaba:

- Limitados recursos a la producción de vivienda para sectores de menores ingresos.
- Especulación comercial con la tierra

- Alzas inmoderadas de los insumos para vivienda
- Elevado crecimiento demográfico
- Escasa participación social organizada en la producción de vivienda.

Desde luego, no se mencionaba como causa central de la problemática habitacional el que la vivienda, en nuestra sociedad, sea vista ante todo como una mercancía y no como un satisfactor social.

Con este marco de causas estructurales del problema de la vivienda, el PRONADEVI precisó los siguientes "objetivos específicos en relación con el cambio estructural":

- Orientar la construcción de vivienda para apoyar la reactivación de la economía y, la creación y mantenimiento de las fuentes de empleo.
- Promover de manera preferente la producción de vivienda para sectores de la población de escasos recursos.
- Apoyar la operación del Sistema Nacional de Suelo y Reservas Territoriales.
- Contribuir en el impulso a la descentralización.
- Garantizar la mejora sustancial de la condición y calidad de la vida en el hábitat social.
- Mejorar la coordinación administrativa.

Como metas de mediano plazo, el PRONADEVI señaló:

- Garantizar por lo menos el empleo creado en 1984 en producción de insumos y construcción de vivienda y mantener la capacidad instalada de la industria de la construcción en cuanto a vivienda se refiere.
- Mantener por lo menos los niveles de acción e inversión alcanzados en 1984 (recuérdese que en cuanto a inversión en 1984 se proyectaba alcanzar el 1.7% del PIB)

- Impulsar 59 ciudades medias y 164 centros de apoyo estatal, procurando controlar el crecimiento de la zona metropolitana de la ciudad de México.

Sin embargo, en 1985, cuando debía iniciarse -de acuerdo con el PIRE- una etapa de crecimiento económico firme y de atención a las necesidades sociales, se hizo evidente que la política económica seguida no sólo resultaba inoperable para enfrentar la situación de crisis, sino que en muchos sentidos contribuía a agravarla. Al profundizarse la crisis, el Estado optó, entre otras medidas, por contraer el gasto público, lo cual contribuyó a que las metas y objetivos específicos del PRONADEVI para la etapa de cambio estructural permanecieran muy lejos de alcanzarse.

Por lo que se refiere a la construcción de viviendas como medio para la reactivación de la economía, la creación de empleos y el mantenimiento de la capacidad instalada de la industria de la construcción, la política habitacional en 1985 brindó diversos estímulos a las empresas constructoras:

- Nuevamente privilegió la inversión en viviendas construidas por compañías privadas, destinando 81.9% de los recursos del PRONADEVI-1985 a viviendas terminadas.

INVERSION POR TIPO DE PROGRAMA

| Tipo de Programa | Total de inversión a ejercer millones de pesos | % de inversión total |
|---------------------|---|----------------------|
| Vivienda Terminada | 515,801.1 | 81.9 |
| Vivienda Progresiva | 53,408.9 | 8.5 |
| Lotes con Servicios | 7,962.1 | 1.3 |
| Mejoramiento | 9,602.6 | 7.3 |
| Otros Créditos | 42,759.5 | 6.8 |
| T O T A L | 629,534.1 | 100 |

- Se eliminaron gravámenes, se suprimieron trámites que hacían tardados los procesos de contratación de obra pública y se establecieron procedimientos más sencillos para la adjudicación de obras.

c) En julio de 1985, cuando se determinó disminuir la cartera libre de la banca (el dinero disponible para otorgar créditos) se consideró prioritario el financiamiento de vivienda.

No obstante, la Asociación Nacional de Industriales de la Construcción consideró que la disminución del financiamiento para proyectos habitacionales ocasionaría la pérdida de 300 mil empleos y haría que permaneciera ociosa la inversión ya realizada en la urbanización de 70 mil lotes en el país. La Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, por su parte enfatizó que se había dado una dramática caída en el financiamiento para vivienda, y esto ocasionaría pérdida de empleos y desperdicio de la capacidad instalada.

El PRONADEVI se había fijado como meta mantener al menos los niveles de inversión de 1984; aunque los recursos aumentaron 75.75% al pasar de 360 mil 236.5 millones de pesos en 1984, a 629 mil 534.2 millones de pesos en 1985. El Índice Nacional del Costo de Edificación de la Vivienda de Interés Social se incrementó en ese lapso 60.6% por lo que en términos reales, la inversión en 1985 fue sólo 14.5% superior que en 1984 (2).

Por otra parte, ni en 1984, ni en 1985 se alcanzó una inversión del 1.7% del PIB como se había programado: en 1984 los recursos destinados a viviendas fueron el 1.25% del PIB, y en 1985 apenas llegaron al 1.38% de éste (3).

En cuanto al objetivo de promover preferentemente la producción de vivienda para sectores de la población de escasos recursos, resulta evidente que el "impulso" a la autoconstrucción de vivienda, la vivienda progresiva y los programas de lotes con servicios fue más propagandístico que real. Este tipo de programas a cargo de FONHAPO Y FIVIDESU -principalmente- apenas tuvieron el 9.8% de los recursos, a pesar de ser los que están más al alcance de los sectores populares.

La elevación de los precios del suelo y de los materiales de construcción, la caída de los salarios reales, el aumento del desempleo, el incremento de las tasas de interés del crédito hipotecario y la elevación del monto de impuestos que causa la adquisición de vivienda, hacía cada vez más di-

ficil para los sectores de menor ingreso adquirir una casa terminada. Sin embargo, el PRONADEVI 1985 otorgó privilegios a los grandes organismos -principalmente INFONAVIT y FOVIS-SSTE- en los cuales los programas prioritarios se orientan a la construcción de vivienda terminada, compra de vivienda a terceros y construcción en terrenos propios.

INVERSION HABITACIONAL POR ORGANISMOS 1985

| | |
|-------------------------|--------|
| INFONAVIT | 36.70% |
| FOVISSSTE | 5.53% |
| FOVI | 7.59% |
| BANCA | 35.37% |
| PEMEX | 2.94% |
| FONHAPO | 4.04% |
| C.F.E. | 0.91% |
| D.D.F. | 1.75% |
| ISSFAM | 0.64% |
| FIDEICOMISOS DEL SECTOR | 1.41% |
| ORGANISMOS ESTATALES | 3.12% |

FUENTE: PRONADEVI-1985

A pesar de que los programas de FONHAPO, los principales destinados a la población de menores recursos (no asalariados y con ingresos menores a 2.5 veces el salario mínimo) representaron casi el 20% de las acciones de vivienda del PRONADEVI 85, apenas recibieron el 4% de los recursos. Esto deja ver con claridad que en la práctica no se dio la tan propagandizada prioridad a los programas habitacionales dirigidos a dicha población.

En cuanto al objetivo de crear oferta pública de tierra para vivienda como medio de ordenamiento territorial, se dio a conocer muy poca información. Sabemos sin embargo, por lo expresado en el IV Informe de Gobierno de Miguel de la Madrid, que este proyecto enfrentaba dificultades debido a la escasez y alto costo del suelo; los limitados avances en la adecuación de las legislaciones locales con el marco jurídico federal; y la descoordinación entre los diferentes niveles de gobierno.

Al parecer, los objetivos de apoyar el desarrollo de ciudades medias y descentralizar la vivienda recibieron más atención, pues gran parte de las inversiones se dirigieron a provincia. No obstante, la inversión realizada en las distintas entidades de la República no fue suficiente para cubrir siquiera el déficit de vivienda existente ahí.

Por lo dicho hasta aquí, puede afirmarse con certeza, que el PRONADEVI, durante los primeros años del sexenio, se mantuvo muy lejos de alcanzar los objetivos que persiguió, y hasta donde la crisis financiera del Estado lo permitió, su tarea fundamental consistió en estimular a la industria de la construcción mediante la priorización de programas de vivienda terminada, pero aún en esta tarea las metas trazadas no fueron conseguidas. Por otra parte -como se ha expuesto- el privilegio a la construcción de unidades terminadas significó la marginación de los programas dirigidos a la población de escasos recursos, dejando -como por décadas se ha hecho- la solución del problema habitacional de los sectores populares a ellos mismos.

Además, al privilegiar los programas de vivienda terminada prácticamente se cerró la posibilidad de utilizar tecnología social y regionalmente adecuadas, como supuestamente se pretendía, ya que las viviendas de interés social edificadas por la industria de la construcción para los programas de vivienda terminada, tradicionalmente se han caracterizado por la estandarización.

Hacer una reflexión sobre la política habitacional previa a los sismos de 1985, apoyándose exclusivamente en lo que el programa de vivienda del sexenio planteaba sería una labor incompleta, por lo que es necesario hacer referencia ahora a aquellos aspectos que, sin estar contemplados o relacionados con el PRONADEVI, sobresalieron en la política de vivienda.

II. Política Habitacional al margen del PRONADEVI

La problemática inquilinaria ocupó un sitio marginal en las acciones estatales. Por una parte, a lo largo del sexenio se ha intentado presentar a las cooperativas de vivienda como una alternativa de solución para la problemática del sector inquilinario, particularmente para los habitantes del centro del Distrito Federal. Mediante la opción de compra y mejoramiento de vecindades se intenta, en lo inmediato, eliminar el conflicto casatenientes-inquilinos desapareciendo a las partes y, a más largo plazo, crear condiciones para incorporar al mercado del suelo predios céntricos que han estado fuera de éste desde los decretos de congelación de rentas en los años cuarentas.

Por otra parte, los programas de cooperativas de vivienda se utilizaron con fines políticos: se concedió al PRI la gestión de la mayor parte de estos programas con el propósito de aumentar sus fuentes de control político y allegarle votos durante las elecciones de diputados en julio de 1985. Así, impulsada por el partido oficial se creó la Federación de Cooperativas de Vivienda que a mediados de 1985 aglutinaba a 38 mil familias en más de 400 cooperativas.

Una segunda vía que la política de vivienda anterior a los sismos presentó como respuesta a la problemática inquilinaria, fueron los programas de apoyo para vivienda en renta, ofrecidos por FOVI y FONHAPO. Estos programas tuvieron una cobertura insignificante, por ejemplo, el programa de FONHAPO en 1985 contemplaba tan sólo 5 edificios con un total de 75 departamentos; y del total de acciones de vivienda del PRONADEVI-1984 únicamente el 4.86% correspondía a créditos para alquiler de vivienda.

Los datos anteriores contrastan con la demanda nacional de habitaciones en renta: según el Censo General de Población de 1980, alrededor del 40% del total de viviendas del país eran de alquiler y estaban ocupadas por cerca de 25 millones de habitantes.

Cabe enfatizar que el poco financiamiento estatal para vivienda de alquiler se canalizó a provincia, cuando se estima que el 65% de la población de la zona metropolitana de la Ciudad de México sólo tiene acceso a la vivienda arrendándola.

Los programas crediticios para vivienda en renta se concibieron como apoyo para la "descentralización habitacional" y por ello el D.F. no recibió recurso estatal alguno para este tipo de programa. Así, a pesar de que las autoridades habían hablado de la necesidad de estimular la producción de vivienda de alquiler en el D.F. -como había ocurrido desde 1979- ni el Estado, ni el sector inmobiliario han construido en la capital vivienda en renta durante este sexenio.

Además, no ha habido ninguna acción estatal para detener la tendencia a convertir en condominios, viviendas que antes se arrendaban. En los últimos años los casatenientes han convertido en condominios más de 20 mil edificios con alrededor de 500 mil departamentos (4). Más aún, en unidades habitacionales del IMSS y el ISSSTE que fueron construidas para ofrecer vivienda en renta a los trabajadores, se ha impulsado el paso al régimen en condominio. Con esta medida, el Estado busca ahorrar recursos, trasladando la responsabilidad de la administración y mantenimiento de los inmuebles a los habitantes de ellos.

Finalmente, en febrero de 1985 se realizaron una serie de reformas al Código Civil del D.F. en materia de arrendamiento, presentándolas ante la opinión pública como un paso significativo en la protección legal a los inquilinos. Dichas reformas, según se ha podido comprobar por el desarrollo posterior de los acontecimientos, favorecieron los desalojos rápidos y no han podido detener los aumentos arbitrarios de los alquileres; en síntesis, se han convertido en una figura jurídica decorativa.

Las reflexiones hechas hasta aquí sobre la política diseñada al inicio del sexenio y seguida hasta mediados de 1985 no se proponía ni solucionar el déficit de vivienda, ni frenar las arbitrariedades de los arrendadores, ni detener el deterioro de las habitaciones construidas en sexenios anteriores para

los trabajadores. Se buscaba, ante todo, estimular una rama importante de la producción y utilizar con fines propagandísticos y de control político los programas de vivienda dirigidos a sectores populares.

NOTAS

- (1) Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Vivienda, México, 1984, pag. 94.
- (2) Banco de México. Informe Anual 1985, pag. 95
- (3) Calculando con base en PRONADEVI e INEGI, SPP. Sistema Nacional de Cuentas Nacionales.
- (4) Munguía Huato, Román. "La cuestión Inquilinaria en la Crisis" (fotocopiado), pág. 16.

LOS DIAS POSTERIORES A LOS SISMOS: AUSENCIA DE RESPUESTA E INICIATIVA ESTATAL

ANTONIO JIMENEZ

Introducción.

Desde la primera semana posterior a los sismos quedó evidenciada la incapacidad del Estado ante una situación de emergencia. Sus primeras acciones se dieron en un marco de prepotencia, desorden y engaño, pretendiendo aparentar un control y dirección en los trabajos de rescate que no tenía, el gobierno más bien entorpecía las labores mientras que, eran los pobladores quienes reaccionaban espontáneamente tomando el control de la situación, improvisando mecanismos de abasto, rescate de sobrevivientes, información y remoción de escombros.

La tergiversación de la información con el fin de minimizar los daños; la implementación del plan DN-3 para restringir la participación civil; la negativa inicial de la ayuda internacional para evitar la difusión de la magnitud de los daños hacia el exterior del país; el discurso estatal que pretendía desviar la atención y hacer de la participación espontánea de la sociedad civil un espectáculo, valiéndose del chantaje sentimental y psicológico, etc., fueron las medidas empleadas por el Estado ante su incapacidad de dar alternativas claras y concretas. Esta situación sólo propició el descontento de la población que, de manera cada vez más organizada, exigía solución a sus legítimas demandas.

Hoy, a más de dos años de los sismos, no existen rastros de aquella fuerza civil que se presentaba en nuestra ciudad durante septiembre de 1985. La articulación de organizaciones sociales -después de que el Estado está por terminar las acciones que a consecuencia de la movilización civil implementó- está poco sustentada y carece de perspectivas que permitan dar continuidad a su existencia.

Esto es, en síntesis, lo que nos mueve a analizar las acciones y la política que el Estado implementó para lograr mediatizar la organización espontánea y controlar la situación.

La experiencia del Estado en situaciones de emergencia a causa de fenómenos naturales o sociales es poca; en la historia moderna de nuestro país (después de la revolución de 1910) no se han presentado situaciones reales de emergencia que le demanden una respuesta rápida y eficaz, y que, además, atañe a un amplio sector de la población. Esto se evidenció con los sismos de septiembre de 1985.

El Estado no pudo responder en el corto plazo a las demandas que surgieron a partir de los sismos, sino hasta que tuvo lineamientos externos y tiempo para armar una política más definida y propia que le permitiera controlar la situación y reivindicarse popularmente.

Durante el tiempo en que el Estado no dio alternativas, la población actuaba creando organizaciones y reforzando las ya existentes. La demanda más fuerte, en torno a la cual se aglutinó la mayoría de la gente fue la de la vivienda, aunque otros sectores importantes, como el de la salud, el de la educación, el de los trabajadores, conjuntamente, presionaron al Estado exigiendo no sólo solución a sus legítimas demandas, sino proponiendo proyectos autogestivos, llegando a cuestionar la política del gobierno hasta el grado de demandar la suspensión del pago de la deuda externa y la canalización de tales recursos para la reconstrucción de la ciudad. Por ello, el Estado reconoció que esta situación representaba un grave conflicto social que podría alcanzar amplias dimensiones y rebasar el control oficial, a menos que lo desarticulara desde su surgimiento.

La creciente inconformidad civil en la mayoría de los ámbitos ponía en dificultades al Estado, que a gritos pedía el retorno a la normalidad; a esa normalidad oficial que impone la nula participación ciudadana y el centralismo del poder.

Lo cierto es que durante las dos semanas posteriores al sismo la sociedad civil del Valle de México vivió un "vacío político" y, ejerció el poder al darse cuenta que era capaz de

resolver la etapa emergente de manera correcta, aún, teniendo en contra al propio Estado. En otras palabras, el Movimiento Urbano Popular manifestó una mayor capacidad de organización y decisión que el gobierno, dejando como saldo positivo la experiencia indeleble de SER GOBIERNO entre amplios sectores de la población.

Periodo de las Comisiones

Las constantes durante el periodo, en que la respuesta estatal se canalizó principalmente mediante "comisiones especiales", fueron: un trato altamente burocratizado frente a las demandas de los damnificados, un estilo de negociación individualizado por cada una de las organizaciones, edificios o vecindades.

Fueron muchas las comisiones y coordinadoras que el Estado implementó, varias de las cuales en la actualidad no se sabe si en realidad funcionaron o si siguen funcionando, ni cual ha sido o fue el resultado de su trabajo.

Una de las primeras comisiones formadas fue la COMISION EVALUADORA DEL SISMO, creada por mandato presidencial el 30 de septiembre de 1985 y cuyas funciones eran investigar las causas de los sismos, evaluar sus efectos, cuantificar los daños materiales y determinar las características del suelo y subsuelo entre otras. Esta comisión formaba parte de otra, la COMISION METROPOLITANA DE EMERGENCIA que junto con la COMISION NACIONAL DE EMERGENCIA habían sido creadas desde el día del sismo.

La COMISION NACIONAL DE EMERGENCIA, encabezada por el titular de la Secretaría de Gobernación y con participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Programación y Presupuesto, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte y, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, se encargaría de evaluar los daños a nivel nacional.

Por su parte la COMISION METROPOLITANA DE EMERGENCIA fue encomendada al regente capitalino. En ella participaron la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Programación y Presupuesto, la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, la Secretaría de Salubridad y Asistencia, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte y la Secretaría de Educación Pública. Esta comisión se encargaría de evaluar los daños y coordinar las acciones de auxilio en la ciudad de México con el apoyo de tres comités: el de Evaluación de los Sismos, el de Revisión de Inmuebles Construidos y el de Revisión en Material de Normas de Construcción en el D.F. El secretario técnico de las dos comisiones era Jorge Carrillo Olea, Subsecretario de Gobernación.

Posteriormente, se formó la COMISION NACIONAL DE RECONSTRUCCION que tendría los siguientes propósitos: auxiliar a los damnificados, coordinar la acción pública y social para la reconstrucción de lo dañado, fomentar la descentralización, tanto del sector público como del sector privado y social, promoviendo la obtención y el uso adecuado y oportuno del auxilio internacional, formular programas preventivos y supervisar el uso honesto y eficaz de los recursos.

La Comisión se integró con seis comités de apoyo: el Comité de reconstrucción del Area Metropolitana de la ciudad de México; el Comité de Descentralización; el Comité de Asuntos Financieros; el Comité de Auxilio Social, con cuatro coordinadores: Salud, Educación, Empleo y Vivienda; el Comité de Auxilio Internacional, y el Comité de Prevención de Seguridad Civil.

EL COMITE DE RECONSTRUCCION DEL AREA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MEXICO sería coordinado por el DDF y su tarea consistiría en establecer las prioridades en los programas de construcción, remodelación y reparación de vivienda; modificar las normas y procedimientos de construcción para prevenir riesgos; promover nuevos horarios de trabajo, rutas y sistemas de transporte y simplificar trámites para fomentar nuevas inversiones que recuperarían empleos y construcciones.

EL COMITE DE DESCENTRALIZACION estaría coordinado por la Secretaría de Programación y Presupuesto. Tendría como objetivos: fomentar la descentralización de la vida nacional y promover la reorganización de la Administración Pública Federal en la que se mantendrían las sedes de las Secretarías de Estado en la capital, pero en la que se descentralizarían recursos, oficinas y facultades como parte de un proceso más amplio que incluyera la educación superior, la actividad económica industrial, los servicios, el comercio y las finanzas.

EL COMITE DE ASUNTOS FINANCIEROS estaría coordinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y su función básica consistiría en adecuar los mecanismos para la canalización de recursos hacia las tareas de reconstrucción. También buscaría promover, captar y movilizar los recursos internos y externos que requiriera la reconstrucción, estimular mecanismos para el financiamiento de vivienda; crear estímulos de ahorro, y diseñar estímulos fiscales que coadyuvaran a la descentralización de la actividad económica y de la población.

EL COMITE DE AUXILIO SOCIAL Y DE LA VIVIENDA, estaría integrado por cuatro comisiones: Salud, Educación, Empleo y Vivienda. La Secretaría de Salud tendría la función de reorganizar el sistema hospitalario de la zona metropolitana y del conjunto del país, ampliando la cobertura de los servicios y mejorando la calidad, asimismo debería descentralizarse sin desmembrar el aparato hospitalario.

La Secretaría de Educación Pública se dedicaría a restablecer el acceso a las escuelas, prever las necesidades de reorganización de servicios y el uso óptimo de infraestructura básica. La Secretaría del Trabajo debería ocuparse de quienes perdieron su empleo a causa de los sismos, conviniendo con los empresarios, bancos y compañías de seguros las fórmulas que beneficiarían a la industria y a sus trabajadores. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología actuaría para atender a los damnificados, apoyando las acciones de autoconstrucción de viviendas, con prioridad en la atención de las clases populares.

EL COMITE DE AUXILIO INTERNACIONAL, coordinado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, tomaría las medidas necesarias para obtener ayuda externa y canalizarla según conviniere. (Las funciones de este Comité cesaron el 6 de diciembre de 1985 al término del reparto de auxilio internacional en especie a los campamentos de damnificados).

EL COMITE DE PREVENCIÓN DE SEGURIDAD CIVIL, coordinado por la Secretaría de Gobernación, se encargaría de diagnosticar los posibles riesgos así como de los planes y programas específicos de seguridad civil.

Este es, en síntesis, el aparato implementado por el Estado para llevar a cabo la reconstrucción, aprovechando la situación para dar marcha a antiguos planes que, por oposición de pobladores del DF no habían podido realizarse, tales como el retorno de los predios del centro de la Ciudad de México al mercado de especulación y el cambio de uso del suelo para objetivos más rentables, además de considerar la posibilidad de terminar con las rentas congeladas, -problema que sustenta las principales demandas del movimiento inquilinario en el centro de la capital-.

Este tipo de acciones únicamente respondía a la falta de claridad en la evaluación de los efectos del sismo, mismo que evidenciaba una ausencia de respuesta articulada del gobierno frente a una situación de emergencia que se vivía y que exigía respuestas concretas y planteamientos claros.

La descentralización era (y es) una de las formas ya tradicionales utilizadas por el gobierno para desarticular movimientos sociales (sobre todo en cuestiones laborales), los sismos daban marco para seguir utilizando esta política, incluso se ampliaba al creciente movimiento de damnificados.

Para el sector educación el problema se podía diluir llevando a cabo la descentralización; es decir, orientando la solución de la demanda educativa hacia los gobiernos estatales. Este hecho explica porque el presupuesto para la reconstrucción de este sector fue el menor.

Para el sector salud, si bien es cierto que la descentralización de los servicios médicos especializados es una demanda social para tener un mayor acercamiento a las necesidades en provincia, y en el aspecto técnico y económico esto produce mejores beneficios a menor costo, también es cierto que a corto plazo este tipo de acciones sólo beneficiarían a un pequeño sector de la población de los estados receptores y no se cubre de ninguna manera el déficit en el D.F.

La reubicación de personal y oficinas públicas fuera de la Ciudad de México, se inició con la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Salubridad y Asistencia y la Secretaría de Programación y Presupuesto.

Su distribución geográfica mostró una tendencia a priorizar la ubicación de estas dependencias en la zona centro del país, en las capitales de los estados y en las ciudades medias. El programa de traslado de personal a provincia constó de tres etapas: voluntario, inductivo y obligatorio. Los planes estatales aseguraban el traslado de 70 mil burócratas para fines de julio de 1986, cifra que representaba el 15% del personal federal del sector central ubicado en la Ciudad de México y el 75% del sector paraestatal.

Después de algunos meses comenzaron a retornar a la ciudad algunos trabajadores descentralizados, a causa del incumplimiento de derechos laborales, vivienda y acceso a los servicios públicos.

En cambio, en la descentralización industrial que planteaba como objetivo sacar de la ciudad a industrias altamente contaminantes o con exagerado consumo de agua potable, los alcances fueron mínimos y las pocas industrias que se lograron descentralizar lo hicieron trasladando estas calamidades a los lugares receptores.

Antes de los sismos la zona metropolitana de la Ciudad de México concentraba al 45% de la industria nacional, generaba el 44% del ingreso nacional bruto (INB), ocupaba el 25% de la Población Económicamente Activa (PEA), el 20% del presu-

puesto y el 33% de la actividad pública, además, concentraba parte de la más importante y estratégica infraestructura hospitalaria.

Los daños ocasionados por los sismos en vivienda, edificios públicos, infraestructura médica y educativa, reflejan la vulnerabilidad de un modelo de desarrollo basado en la concentración del poder político y económico. He aquí por que una de las metas planteadas por el actual régimen fue la descentralización; el gobierno de Miguel de la Madrid, tratando de aprovechar la coyuntura de los sismos, hizo lo posible para dar marcha a sus planteamientos tomando la descentralización como parte de la reconstrucción.

Sin embargo, esto tenía implicaciones financieras que rebasarían los costos de reposición de lo perdido, puesto que la descentralización suponía realizar cuantiosas inversiones complementarias, tanto en infraestructura como en actividades productivas conexas, además de que se requería de tiempo para preparar las condiciones adecuadas en las ciudades receptoras y para negociar la colaboración del sector industrial. Dos cosas con las que no se contaba, tiempo y dinero, por lo que la descentralización no pasó de ser la transferencia de los problemas de la ciudad a provincia y, como consecuencia, el aumento del déficit de vivienda y servicios públicos, mientras que, en el D.F. la política urbana estaba enfocada a aumentar la reserva ecológica, a cambiar la función de la zona centro hacia una que tuviera mayor prioridad comercial, turística y administrativa, además del probable aumento de desempleo en provincia a consecuencia de la reubicación. En el plano urbano regional surge una tendencia a fortalecer los estados limítrofes con el D.F., desconcentrar hacia la zona centro del país y fortalecer la industrialización en los corredores industriales ubicados en zonas estratégicas.

Con esto y con la renegociación de la deuda externa, la creación del Fondo Nacional de Reconstrucción (FNR) y la contratación de créditos con el Banco Mundial, el gobierno después de tener los embates más fuertes del movimiento social, logró plantear un programa de reconstrucción que le permitiría retomar el control. En el caso de la vivienda, demanda que aglutina a la mayor parte de la gente de este movimiento (como lo demuestra el surgimiento de la

Coordinadora Unica de Damnificados -CUD-), el problema se trató con especial cuidado. Después de que el Estado se dio cuenta de la real magnitud de los sismos y de sus posibles consecuencias en caso de continuar con su posición de no intervenir más allá de lo que la política de vivienda anterior a septiembre de 1985 le permitía (es decir, ofrecer viviendas sólo a quienes la pudieran pagar y fuera del centro de la ciudad) y, después de una serie de movilizaciones de los damnificados se logró el decreto expropiatorio.

Sin embargo, la política estatal ha sido siempre ceder en la mínima medida posible. Así, resulta que en contraste con las casi 33 mil viviendas perdidas totalmente, más las 65 mil con daños mayores (según datos de la CFPAL) en el decreto expropiatorio, después de ser corregido, sólo se incluyeron poco más de 4 mil predios, cifra que a final de cuentas se vio reducida -por amparos y revocaciones-.

Lo anterior se hacía con el fin de que la atención a los damnificados se redujera únicamente a 40 mil familias -incluidas en el decreto expropiatorio- dejando sin solución al resto (los habitantes de las colonias clasemedieras y de los sectores de bajos recursos económicos menos combativos).

ESTRATEGIA GUBERNAMENTAL FRENTE AL MOVIMIENTO DE DAMNIFICADOS: LA EXPROPIACION DE PREDIOS

GUILLERMO MARTIN

Introducción

Se parte de que tanto la expropiación, como el Programa de Renovación Habitacional Popular (RHP) y el resto de los subprogramas de vivienda en la reconstrucción fueron ante todo una respuesta política del gobierno a un portentoso y legítimo movimiento social en ascenso que podría haber rebasado el control gubernamental.

Ante la incapacidad gubernamental de articular una respuesta inicial coherente frente al movimiento popular, la vocación democrática, la capacidad organizativa y el espíritu solidario de la población quedó ampliamente demostrado. Así la expropiación de predios buscó ante todo, quitar banderas al movimiento de damnificados, impedir estallidos de violencia a raíz del recrudecimiento de los conflictos inquilinarios, definir un universo de damnificados oficialmente reconocidos y dar una base de credibilidad a la política gubernamental frente a las demandas de la población que, con esta medida se iniciaban.

En este sentido, es indudable que la expropiación fue un triunfo del movimiento popular, que como todo triunfo reivindicativo, sería posteriormente refuncionalizado por la política oficial en la perspectiva de controlar el movimiento popular independiente.

I. Objetivos explícitos y alcances de la expropiación

Desde la óptica gubernamental, el decreto expropiatorio del 11 de octubre de 1985 se fundamentó en la Ley de Expropiación de carácter local para el Distrito Federal. Mientras que la publicidad oficial hablaba de siete mil predios expropiados, el primer decreto sólo afectó 5 mil 563 predios a favor del Departamento del Distrito Federal, facultándolo para elaborar y ejecutar programas de habitación, fomentar la construcción y autoconstrucción de vivienda y dictar políticas generales de remodelación urbana en las zonas afectadas. En el artículo quinto del decreto, se incluyó la disposición de indemnización a los expropietarios, en un plazo no mayor de 10 años con cargo al erario del Distrito Federal.

Entre los considerandos del primer decreto destacan: el pretender impedir mayores calamidades públicas desatadas desde los sismos, sustituir viviendas dañadas por otras que garantizaran la seguridad de sus habitantes, solucionar problemas sociales ocasionados por las malas condiciones de los alojamientos previos y restablecer rápidamente el equilibrio de los centros de población afectados por los sismos.

El decreto modificatorio del 21 de octubre de 1985 reduce el número de predios afectados a 4 mil 323, circunscribiendo su perímetro a las delegaciones Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. De manera ostentosa quedaron fuera del decreto colonias donde se gestaba también un proceso autoorganizativo de damnificados, vecinos e inquilinos como la Roma, San Rafael, Hipódromo Condesa y Revolución. En los considerandos del nuevo decreto, se expresaba que la supresión de mil 240 predios partía de una revisión detallada de las zonas incluidas, de la reconsideración del carácter del proyecto de reconstrucción y de "la necesidad de adoptar medidas para evitar los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la colectividad".(SIC)

Si bien es cierto que con la modificación del decreto fueron desincorporados muchos predios de vivienda unifamiliar ocupados por sus propietarios, también lo es que dejó a salvo

lo fundamental del campo de operaciones de los grandes monopolios inquilinarios a los que se refería la CUD el 20 de octubre del mismo año.

Hacia septiembre de 1986, en el marco del primer aniversario de la catástrofe e inicio del movimiento encabezado por la CUD, se seguía manteniendo como demanda central la ampliación de la expropiación. Así, el 18 de septiembre de 1986 se logra ampliar en la Cámara de Diputados, a 698 predios el alcance de la expropiación.

Sin embargo, el uso del derecho de amparo, la presión política, la apelación a la revocación y la frecuente corrupción del poder judicial permitieron que el alcance de la expropiación fuera limitándose progresivamente a favor de los antiguos casatenientes. Mientras que el gobierno del P.D.F. ponía punto final a la posibilidad de ampliar la expropiación, argumentando falta de recursos para las indemnizaciones, el 24 de octubre de 86 Renovación Habitacional Popular informaba oficialmente que de los 7 mil predios originalmente incluidos en la expropiación del 11 de octubre de 85, sólo quedaban 3 mil 530 en el programa.

II. Amparos y revocaciones

A partir del primer decreto expropiatorio y contando con el apoyo ideológico del conjunto de la burguesía en defensa del derecho de propiedad, la contraofensiva de los casatenientes pequeños y medios no se hizo esperar, siendo las principales acciones las siguientes:

19 octubre 85. El Departamento del Distrito Federal informó que había recibido cerca de 2 mil solicitudes de orientación sobre el recurso de revocación del decreto expropiatorio. Informó también sobre 691 predios del total de mil 240 que se desincorporarían en el decreto del 21 de octubre de 85 donde era improcedente la expropiación por ser viviendas unifamiliares. Así como los casatenientes serían beneficiados con la desincorporación de aproximadamente 650 predios de vivienda en alquiler.

23 octubre 85. El D.D.F. a través de su contraloría general había recibido a esa fecha 896 solicitudes de revocación al decreto expropiatorio.

20 noviembre 85. Las autoridades conceden 125 revocaciones.

24 noviembre 85. Las autoridades conceden 46 revocaciones adicionales.

6 febrero 86. El poder judicial otorga los primeros 60 amparos definitivos a casatenientes contra la expropiación.

14 marzo 86. Renovación Habitacional Popular (RHP) informó que a esa fecha habían 190 amparos concedidos contra la expropiación.

12 junio 86. RHP informó de un total de mil 300 solicitudes de revocación y 300 amparos contra el decreto expropiatorio "en riesgo de resolverse contra damnificados", pero en el fondo dificultando la consecución del programa del organismo y retrasando o difiriendo la ejecución de obra por constructoras ya contratadas.

Mientras que las condiciones de indemnización a expropietarios habían sido ya definidas entre octubre y noviembre de 85, la presión vía amparos y revocaciones continuó ejerciéndose, llegando a afectar cerca de 2 mil predios y limitando notablemente el alcance de la expropiación.

El trato oficial a estas medidas fue desigual. Mientras que en Renovación Habitacional se constituyó un fondo especial para negociar con expropietarios de predios donde se desarrollaba el programa, fue evidente la ausencia de intervención oficial a favor de los damnificados en predios amparados o revocados donde se desarrollaban proyectos de vivienda no gubernamentales. Así, la obstrucción a las uniones independientes vía amparos y revocaciones fue resuelta, en gran número de casos, mediante la ocupación de facto y la movilización social.

III. Indemnizaciones

Frente a los propietarios afectados por la expropiación, el gobierno aplicó una línea de modernización de sectores rentistas cuya forma de acumulación era fuente de graves conflictos sociales, y que impedía arremeter hacia la modificación de usos del suelo en el centro urbano.

El 16 de octubre de 85 el D.D.F. determinó públicamente que el pago de indemnizaciones a expropietarios de inmuebles expropiados se realizaría en parte con donativos del Fondo Nacional para la Reconstrucción.

El 23 octubre 85 el tesorero del D.D.F., Fernando Hernández, informó que se estaban llevando a cabo estudios socioeconómicos entre los dueños de inmuebles que fueron expropiados, para determinar quiénes serían los primeros en recibir su indemnización. En reunión entre el Regente, Delegados Políticos y el Director de Renovación, se determinó que se comprarían vecindades de colonias populares que no estaban dentro del decreto expropiatorio, con el fin de reconstruirlas y venderlas a los propios inquilinos. Se inició así lo que posteriormente sería el Programa Fase II, dinamizando el mercado del suelo en el centro, y realizando la reconversión de antiguos casatenientes sin déficit para el erario público.

28 noviembre 85. En comunicado oficial, el D.D.F. fijó las condiciones de indemnización. Mediante bonos que emitirla la Secretaría de Hacienda y Crédito Público daría inicio la formalización del pago a los propietarios de los predios expropiados, los que se denominarían Bonos de Renovación Urbana del D.F. El valor nominal sería de 100 pesos. Se empearían a amortizar después de tres años de gracia por anualidades vencidas y generarían intereses similares al promedio de las tasas para depósito bancario a noventa días que hubieran estado vigentes durante las cuatro semanas completas anteriores al pago de los propios intereses. Estarían inscritos en la Bolsa Mexicana de Valores.

Del 3 noviembre de 1985 al 29 de enero de 1986 se formalizaron y publicaron oficialmente las disposiciones de la indemnización y comenzaron a pagarse los intereses correspondientes a los expropietarios.

Si bien es cierto que, a excepción del sector de la construcción -principal beneficiario de la reconstrucción-, todos los sectores de la burguesía hicieron sentir su descontento por la limitación del derecho de uso (y abuso) de la propiedad privada, los antiguos casatenientes y propietarios de inmuebles del centro no salieron tan mal librados.

La demanda de expropiación sin indemnización en inmuebles que ya habían amortizado muchas veces su valor, promovida por la CUD, jamás fue considerada por el gobierno. Mientras que la expropiación impedía la reventa especulativa de predios, una vez desalojados los inquilinos por daños físicos en los inmuebles o por presiones promovidas por casatenientes, los rentistas -tanto bajo el régimen de renta congelada como libres- aumentaron notablemente sus ingresos vía la indemnización.

Por otra parte, la expropiación vendría a favorecer con el tiempo a propietarios de predios no expropiados y promotores inmobiliarios por varias razones, entre otras, porque permitían el control oficial de la situación política en el centro, el debilitamiento de la base social del movimiento inquilinario y de la arremetida contra el régimen de rentas congeladas, la incorporación al mercado de suelo de los predios expropiados vía el régimen de condominio vecinal, así como la valorización del suelo en el centro mediante la construcción y recatracación posterior.

IV. Posición de diversas fuerzas sociales ante la expropiación

La expropiación fue ilustrativa en cuanto a actitudes sustantivas de diversas fuerzas sociales; por una parte, frente al derecho de uso y abuso de la propiedad privada basada en el trabajo ajeno y, por la otra, frente a las necesidades

de la población derivadas de la política económica antinacional del régimen y las necesidades extraordinarias derivadas de los sismos.

Para los sectores populares agrupados en la CUD, verdadera fuerza motriz del proceso de reconstrucción, la expropiación fue una medida derivada de su lucha, pero de alcance parcial e insuficiente. La reconstrucción debería pasar por la ampliación de la expropiación sin indemnización, la suspensión del pago de la deuda externa y la mejor utilización de los recursos implicados en la reconstrucción y demás programas de apoyo social.

El PRI, en tanto partido político, se desacreditó entre la población capitalina por su ausencia física y su falta de iniciativa frente a la emergencia. Confirmó, una vez más, su sumisión a las directrices del gobierno y la búsqueda de una nueva base social a través de mecanismos clientelistas de gestión, dada su ventaja frente a otras fuerzas.

Lo anterior se demuestra por el hecho de que el Presidente del PRI capitalino, Salazar Toledano, no aparece en público para referirse al problema de los damnificados sino hasta después de la publicación oficial de las condiciones de indemnización a expropietarios, la entrega de los primeros 3 mil certificados de derechos de damnificados y la primer gira presidencial a las zonas afectadas después de la expropiación. Fue entonces cuando se anunció públicamente la iniciativa de constitución de Comités de Reconstrucción del PRI que se constituirían en interlocutores privilegiados del posterior programa de vivienda de RHP.

La descalificación, salvo notorias excepciones de algunos militantes aislados, fue la constante en la conducta del PRI frente a las organizaciones sociales independientes, con lo cual se buscaba generar la división, capitalizar la disidencia a su favor y construir un consenso pasivo entre crecientes sectores de damnificados. Se da por supuesto que los principales cargos de decisión en SEDUE, DDF y RHP eran ya, o serían asignados a priistas con experiencia frente al movimiento popular para fortalecer el consenso pasivo a favor del partido oficial.

Desde el punto de vista de las organizaciones empresariales, la Cámara de Propietarios de Inmuebles (CPI), sostuvo la posición más beligerante en contra de la expropiación; planteó en múltiples ocasiones que la expropiación representó una violación a las garantías individuales y derechos de propiedad, una fuente de desconfianza en el gobierno lo que, en consecuencia, desalentaría la inversión en la construcción de vivienda de alquiler -inversión ausente en la Ciudad de México-. El conjunto de cúpulas empresariales, más que nada por una cuestión de principio clasista, se declaró contra la expropiación en diversos momentos. La Cámara de la Industria de la Construcción (CIC), esquivó definirse en torno a la expropiación, debido a que en ese momento resolvía una de las dificultades tradicionales del sector en cuanto a la producción de vivienda: la disposición de suelo barato como materia prima indispensable para la valorización de sus capitales.

V. Algunos efectos de la expropiación

La expropiación constituyó el primer paso en la respuesta gubernamental frente al movimiento emergente de damnificados e inquilinos. La expropiación, por su forma parcial y limitada, es claro que no pretendía incidir en la problemática más general de la vivienda en la capital. La intención política de la expropiación quedó evidenciada por su alcance territorial a las zonas de mayor movilización de damnificados e inquilinos. En las colonias populares de las delegaciones Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, la expropiación abarcó del 5 al 80% de los predios dañados, respectivamente; introdujo una fractura entre expropiados, no expropiados y damnificados sin respuesta oficial fuera de las 2 delegaciones centrales; permitió recuperar al gobierno cierta credibilidad entre los sectores populares de la ciudad y, a la vez, estabilizar el vertiginoso ascenso del movimiento de damnificados e inquilinos.

Se ha dicho que la expropiación se hizo sin criterios definidos y en medio de una gran desorganización administrativa; independientemente de la voluntad subjetiva de las autoridades, la expropiación se tradujo en una progresiva desarticulación del movimiento popular. La expropiación incluyó y excluyó predios de muy diferentes categorías de manera casi aleatoria como viviendas en propiedad e inmuebles en alquiler dañados por falta de mantenimiento o por los sismos, inmuebles en mal y buen estado, inmuebles bajo régimen de renta congelada y libres, edificios catalogados y no catalogados como monumentos históricos por Instituto Nacional de Bellas Artes y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, etc.

Para los propietarios restantes, la expropiación implicó un destrabamiento del régimen de renta congelada, un debilitamiento de la base social del movimiento inquilinario y una eventual dinamización del mercado de suelo en el centro, en la perspectiva de una modificación hacia usos más rentables. Los monopolios rentistas, orientados al mercado de clase media, permanecieron intactos con las modificaciones de los decretos expropiatorios de octubre de 85.

Para el sector de la construcción, la expropiación permitió de facto liberar gran cantidad de suelo y generar una demanda instantánea para inversiones en vivienda, vía promoción estatal.

Para el gobierno, implicó entre otras posibilidades, retomar la iniciativa frente al movimiento popular, desactivar situaciones altamente conflictivas en el centro, reimpulsar con el tiempo el viejo Programa de Reordenación Urbana y Protección Ecológica (PRUPE) bajo nuevo ropaje, golpear el régimen de renta congelada, recatastrar y aumentar sus ingresos vía impuesto predial al implantar el régimen de propiedad en condominio vecinal.

Fruto de la lucha popular, la expropiación constituyó la base sobre la cual se desarrollaría progresivamente una política de desmovilización, segregación y desgaste del movimiento popular, encuadrando progresivamente a los damnificados, inquilinos y vecinos en un creciente número de subprogramas, aparatos y dinámicas diferenciadas.

La expropiación muestra cómo el Estado aún es capaz, en situaciones de crisis, de sacrificar los intereses inmediatos de fracciones marginales de la burguesía mexicana en la perspectiva de retomar el control político de movimientos de masas emergentes.

ASPECTOS FINANCIEROS DE LA RECONSTRUCCION

ANTONIO JIMEN

Introducción

Los sismos de septiembre se dan en un momento coyuntural en que existe un reordenamiento político-económico generado por la crisis que vive el país, por lo que el Estado no puede abordar aisladamente la problemática que de ellos se deriva. Se hacía indispensable la captación de recursos extraordinarios que permitieran al gobierno solventar los problemas derivados de los sismos sin modificar su política económica, que ya de tiempo atrás se sostenía con medidas de austeridad y encarecimiento, con base en recortes presupuestales y con elevadas ganancias fiscales que día con día deterioraban aún más el nivel de vida de los mexicanos.

Como una primera medida el Estado apeló a los sectores financieramente más poderosos del país y, en general, a la población civil para que, en forma de donaciones, allegara recursos que se canalizarían a la reconstrucción; por lo cual, pocos días después de los sismos crea el Fondo Nacional de Reconstrucción (FNR) en donde todo donativo sería deducible de impuestos; además se señalaba que los donantes decidirían la aplicación de sus aportaciones, no obstante la intención real del Estado era destinar estos recursos a los sectores de educación y salud.

Las principales aportaciones al FNR provinieron de diferentes fracciones del capital: transnacionales, sector turístico, industria de la construcción e indirectamente empleados privados, así como empleados de dependencias federales y estatales.

Mientras tanto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público declaraba que el costo de la reconstrucción en los 3 primeros meses sería de 15 mil millones de pesos para: telecomunicaciones (300 millones de pesos para equipo telefónico), sector salud e industrial. En lo que restaba de 1985, el país dejaría de recibir divisas por 100 millones de dólares por la reducción de exportaciones de industrias afectadas y 300 millones de dólares por la disminución de ingresos del turismo (4 de octubre de 1985). En esta misma fecha, el senador Hugo B. Margain, miembro del Comité Técnico del FNR, informaba que los recursos captados ascendían a 4 mil 500 millones de pesos y 25 millones de dólares. Este Comité Técnico estaba vigilado por un Consejo Consultivo que aseguraba que los recursos se manejaran honesta y transparentemente.

En la ceremonia de instalación del Consejo Consultivo, el escritor Fernando Benítez expresó: "este consejo ha sido creado ante la desconfianza de la población frente a las autoridades", además, "resulta penoso andar mendigando 400 millones de dólares para reconstruir, cuando se tiene que pagar anualmente de 10 a 12 mil millones de dólares por intereses de la deuda".

Los primeros gastos de reconstrucción se destinaron a la reparación y reposición de infraestructura y servicios, puesto que éstos son permanentes fuentes de ingresos al Estado que no deberían verse interrumpidos, además de que sus daños afectan a la generalidad de la población civil.

Desde su constitución, el Consejo Consultivo del FNR dejaba bien claro que de los fondos obtenidos no saldría un solo peso para la reconstrucción de vivienda. A su vez, los organismos oficiales de vivienda no daban alternativas claras para la solución de este problema, a pesar de ser la principal demanda que agrupaba a más de 40 mil familias damnificadas, así como de otros muchos ciudadanos que eran víctimas de abusos por parte de los caseros.

El decreto expropiatorio del 11 de octubre por sí solo no era suficiente para contener a las organizaciones de damnificados; se requería de un programa de reconstrucción de vivienda a corto plazo que permitiera desarticular el movimiento cada vez más organizado y combativo, como lo demuestra la marcha del 23 de octubre, en que gran número de dam-

nificados se manifestaba en favor de la suspensión de la deuda externa, pidiendo que esos recursos fueran canalizados al programa de reconstrucción de vivienda

A la par de la expropiación se creó el aparato de Renovación Habitacional Popular, teniendo como director a Parcero López (octubre 1985-marzo 1986) con un presupuesto inicial de 10 mil millones de pesos, lo que demuestra que no se contaba con recursos para atender la demanda emergente de vivienda.

Este período estuvo caracterizado desde el principio por una división de tareas entre el Departamento del Distrito Federal, el Partido Revolucionario Institucional y Renovación Habitacional Popular, este último creó un aparato burocrático que permitió individualizar las demandas y atender cada caso por separado, con el fin de disgregar al movimiento y con el tiempo ir reduciendo lo más posible los alcances fijados inicialmente por el programa: 44 mil construcciones nuevas, con un costo total de 129 mil millones de pesos obtenidos mediante créditos de la Banca Mundial y métodos fiscales y, 8 mil 587 reparaciones menores, con créditos por 245 mil pesos a cada una de ellas.

Sin embargo, al poco tiempo los datos cambiaron: se hablaba de un total de 14 a 15 mil rehabilitaciones, para las cuales se otorgarían créditos de 2 millones 200 mil pesos a cada familia damnificada, dichas acciones deberían terminarse en el mes de septiembre de 1986; asimismo, construcción de 21 mil 265 viviendas nuevas que estarían listas en el mes de diciembre siguiente y para las cuales el financiamiento sería de hasta 2 millones 700 mil pesos por familia; se hablaba de que no se daría enganche y que el pago anual no sería mayor al 10% del salario mínimo en el D.F.; las mensualidades no excederían al 20% de los ingresos familiares; se crearían programas de pago para los habitantes no asalariados para quienes los plazos totales de pago irían de uno a 15 años y las tasas de interés anual serían de, aproximadamente del 11%; además, se decía que habría participación de los damnificados en el programa. Este fue el espejismo creado por el aparato del Renovación Habitacional Popular en este período, mientras el presupuesto con el que contaba pasaba de los 10 mil millones de pesos.

I. Contratación de créditos con la Banca Internacional

El gobierno aprovechó la movilización de la sociedad civil en demanda de moratoria de la deuda externa y abrió nuevos espacios como la consulta popular sobre el pago de la deuda, para generar consenso interno que le permitiera pagar, negociar plazos y seguir recibiendo créditos.

El Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (PID), el Banco Mundial y los Bancos Centrales de los países acreedores ofrecieron otorgar ayuda financiera a México y dar un préstamo de emergencia por 600 millones de dólares, con el fin de salvar a uno de los países más endeudados de América Latina. En concreto el régimen logró una pequeña moratoria por 950 millones de dólares y un préstamo del BID por 100 millones de dólares.

Por otra parte, con Francia se empezó a negociar en diciembre de 85 un préstamo de 250 millones de francos (32 millones de dólares); de Japón también en diciembre se estaba terminando de firmar la contratación de un crédito por 55 millones de dólares. Con el Banco Interamericano de Desarrollo -como se señaló anteriormente- también a mediados de diciembre se estaba firmando un crédito por 100 millones de dólares y con el FMI en diciembre se hablaba de 300 millones de dólares para la reconstrucción. Todos estos eran préstamos adicionales blandos con tasas de interés bajas (6% y 7% en lugar de la tasa comercial que es del 9%) totalmente contabilizados fuera de los que sería la deuda contratada anteriormente con otros fines "ayuda emergente".

La otra fuente, para obtener recursos contempló impuesto adicionales en la renta a los sectores de ingresos medios y altos, y un impuesto a las tarifas de teléfonos, entre otros.

Antes de la caída de los precios del petróleo a nivel mundial, el gobierno obtuvo un préstamo del FMI del cual destinaría 400 millones de dólares (69.7%) a la reconstrucción.

Por último Silva Herzog, entonces Secretario de Hacienda y Crédito Público, informó, en mayo de 1986, que los recursos externos ascendían a cerca de mil millones de dólares; lo cual, nos hace suponer que también obtuvo otro préstamo del BID por 200 millones de dólares, anunciado en el mes de marzo anterior por corresponsales estadounidenses.

En total el gobierno obtuvo mil 50 millones de dólares por concepto de préstamos de la banca financiera internacional que, desde el punto de vista de la política económica de Miguel de la Madrid, representó un logro para el gobierno, no sólo por la reconcentración de créditos, sino porque en el caso del préstamo del Banco Mundial se obtuvieron junto con el paquete de la reconstrucción 174 millones de dólares para financiar otras prioridades del gobierno: apoyo a la descentralización y al sector agropecuario. Dichos préstamos elevaron el endeudamiento del sector público.

En un informe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (al 31 de marzo de 1986) se señaló un incremento del 5% en la deuda externa durante el último trimestre de 1985. La deuda económica con el exterior llegó a los 72 mil 458.2 millones de dólares. Además, con la continua devaluación, la deuda en pesos es cada vez mayor. Las posibilidades de pago se limitaron en el mejor de los casos a los intereses, en cuyo caso permanecería el ajuste a los salarios reales de los trabajadores y la reducción al gasto público, con el consecuente desempleo. Por otra parte las condiciones de pago del FMI son las más duras, sobre todo porque el plazo de amortización es a 5 años.

Además de los créditos externos, el gobierno estableció otros mecanismos internos para cubrir su falta de recursos: en el terreno político por ejemplo, recurrió a financiamientos del Banco Mundial para proyectos de vivienda, lo cual implica ceñirse a las líneas programáticas del organismo. El Banco Mundial inicia su política de préstamos para vivienda en América Latina justo a partir del triunfo de la Revolución Cubana, en el marco de la Alianza para el Progreso (ALPRO). El propósito de estos programas ha sido desde su origen desarticular movimientos emergentes de pobladores,

antes de que puedan rebasar en profundidad y amplitud, la capacidad de respuesta política de sus respectivos gobiernos. Con cada experiencia, las líneas programáticas del Banco van perfeccionándose. El "antídoto" ha sido en general eficaz, aunque existen experiencias como la del gobierno democrático chileno entre 1968 y 1970 que han puesto en tela de juicio su infalibilidad.

El 21 de noviembre de 1985 la Secretaría de Programación y Presupuesto declaraba que para 1986 el gobierno federal destinaría 104 mil millones de pesos para la reconstrucción de la ciudad de México distribuidos de la siguiente forma: 56 mil millones de pesos para las instituciones de salud y seguridad social; 23 mil millones de pesos para apoyar acciones de Renovación Habitacional; 25 mil millones de pesos para reparar el sistema de drenaje y para la infraestructura de distribución de agua; más, 131 mil millones de pesos para el proceso de descentralización de dependencias públicas.

A la par, el secretario de Hacienda y Crédito Público reconocía que las metas planteadas en los niveles previstos de déficit público, balanza de pagos e inflación no se cumplirían, ya que el terremoto había complicado la situación del país y precisaba que la reconstrucción implicaría incrementar el déficit y reducir aún más los gastos.

Se contaba con recursos provenientes de la Banca Internacional, pero hacía falta canalizar recursos internos al pago de estos créditos y, en general, de la creciente deuda externa, problema que se agravaba por la baja internacional del precio del petróleo y la reducción del turismo internacional, principales fuentes de divisas en nuestro país.

Es por esto que el Estado opta por poner en práctica nuevas medidas fiscales. Así, en enero de 1986 se aprueba una miscelánea fiscal para destinar 300 mil millones de pesos a la reconstrucción, sin embargo, fue insuficiente y en febrero del mismo año, el subcomité de Alternativas de Financiamiento del Comité de Reconstrucción de la Ciudad de México recomendó al presidente Miguel de la Madrid un nuevo paquete de medidas fiscales, siendo aprobadas en su mayoría por la Cámara de Diputados en abril de 1986 y puestas en práctica inmediatamente.

Para inicios de 1987 el balance de los pagos de la reconstrucción era el siguiente:

| FUENTE DE RECURSOS | MONTO (millones de dólares) |
|----------------------------------|--------------------------------|
| PANCA INTERNACIONAL | 955 |
| FONDO NACIONAL DE RECONSTRUCCION | 55 |
| VIA IMPUESTOS | 66 |
| T O T A L | 1,076 |

De los cuales se destinó el 25% al programa de vivienda, distribuidos de la siguiente manera:

| PROGRAMA | PRESUPUESTO OTORGADO (millones de dólares) |
|---------------------------------|---|
| Renovación Habitacional Popular | 210 |
| Fase II | 45 |
| Tlatelolco | 38 |
| T O T A L | 293 |

El presupuesto destinado a infraestructura educativa y hospitalaria representó el 36% del total, por lo que supone que el resto se destinó a gastos de emergencia y restablecimiento de infraestructura gubernamental; lo cual confirma que la coyuntura fue aprovechada por el gobierno para allegarse de recursos extraordinarios, y así, apuntalar programas normales del gasto público.

En conclusión, queda claro que el costo de la reconstrucción recayó en toda la sociedad y repercutió en el deterioro del nivel de vida de la mayoría de los mexicanos que, vía impuestos, reducción del gasto público, caída de salarios reales e inflación, tuvo que subsanar no sólo los gastos de la reconstrucción, sino también, los programas ordinarios del gobierno, que se veían amenazados por la situación de crisis creciente ya desde antes de los sismos. A fin cuentas, éste fue el costo social que el gobierno impuso, con el único fin de reivindicarse y ganar legitimidad política, preparándose para el período electoral de 1988.

II. Renovación Habitacional Popular

En lo que se refiere específicamente al programa de vivienda de Renovación Habitacional Popular, oficializado el 20 de noviembre de 1985, a cargo de Parcero López, se destinaron en un principio 10 mil millones de pesos para implementar un aparato burocrático que se encargaría de ganar tiempo para la captación de mayores recursos y la definición de un proyecto más objetivo que pudiera dar respuestas concretas al problema de la vivienda, que con el decreto expropiatorio contaba con 40 mil familias damnificadas reconocidas oficialmente.

Con este reducido presupuesto de emergencia, Renovación Habitacional Popular se sostuvo desde noviembre de 1985 hasta abril de 1986, tiempo en que se montaron los campamentos, se hizo el estudio socioeconómico y la entrega de certificados de derecho, pero sin dar respuesta clara al problema de la vivienda. Esta tarea de soporte o amortiguador que venía cumpliendo Parcero termina el 31 de marzo de 1986, fecha en que es aprobado el crédito de la banca mundial para la reconstrucción; al día siguiente Parcero es destituido de su cargo y toma posesión Manuel Aguilera, quien cuenta con una primera partida de 97,409 millones de pesos provenientes del Banco Mundial y 103,107 millones de pesos captados a través de impuestos extraordinarios para la reconstrucción.

El proyecto en síntesis era el siguiente:

| FINANCIAMIENTO | CREDITO | INTERES | FORMA | TIEMPO |
|------------------|---------------|---------|----------|-------------------|
| OBRA | | | DE PAGO* | DE PAGO |
| Vivienda nueva | 2,896,000 mdp | 17% | 30% | 8 años 4 meses |
| Reparación mayor | 2,225,700 mdp | 17% | 25% | 7 años |
| Reparación menor | 1,170,000 mdp | 13% | 20% | 5 años |

* Porcentaje a descontar de un salario mínimo mensual. Ejemplo, si el salario mínimo es de 50 mil pesos, la mensualidad a pagar sería de 15 mil pesos.

mdp= millones de pesos

Manuel Aguilera informó que en estos casos se incluía el costo del terreno y, que el enganche que exigía el Banco Mundial sería cubierto por el Gobierno Federal.

El presupuesto que otorgó el Banco Mundial fue ampliado con otros 74 mil millones de pesos debido, por una parte, al compromiso que este organismo contrajo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para la restauración de 186 inmuebles catalogados como monumentos históricos dentro del perímetro del decreto expropiatorio y, por otra, al sobregiro del presupuesto original.

Camacho Solís, Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, por su parte, señaló que el presupuesto para los programas de vivienda a damnificados era de 389 mil millones de pesos, de los cuales el 70% provenía de recursos fiscales y el 30% restante del exterior (septiembre 11 de 1986).

Por todo lo anterior, las críticas a Renovación habían sido muy fuertes; y al aparato creado para lograr consenso se le estaba yendo el control de las manos, por lo cual hubo que cambiar la táctica, el mismo PRI y el presidente asumieron las críticas de la población y expusieron las deficiencias de Renovación, por lo cual fue sustituido Parcero López por Manuel Aguilera, con la intención de renovar la imagen de este aparato.

La etapa de Parcero se caracterizó por el discurso de "no hay lana", no se definió nada en claro, había una cierta facilidad para negociar.

En un primer momento la política de PNP estaba indefinida. No se sabía cuáles iban a ser sus características, bien como aparato de apoyo, de coordinación, de dirección (aparato administrativo o aparato operativo). Los certificados de derecho no fueron más que una solución paliativa que en realidad no sirvieron de nada. En un segundo momento las medidas tomadas adquieren un carácter más popular y los proyectos independientes fueron aceptados porque significaba quitarle a PNP unas cuantas viviendas de encima.

Los proyectos independientes se llegaron a manejar dentro de las organizaciones populares como una alternativa frente a la falta de respuesta del Estado, los grupos de apoyo se

convirtieron una especie de "SEDUE de los pobres". Sin embargo, estos grupos no podían, ni pueden, dar respuesta a toda la gente, ya que aún con todos los donativos recibidos del extranjero el presupuesto no alcanzaría para cubrir todas las necesidades.

Cuando entra Aguilera cambia la visión del problema; la política de RHP fue cambiando continuamente dependiendo, en gran medida, de las presiones ejercidas por las propias organizaciones de damnificados. Parcerio fue hábil en el sentido de dejar hacer a las organizaciones lo que quisieran en tanto que no había la posibilidad de hacer más allá de las cuestiones administrativas y de coordinación. Esto se debió no tanto a que apoyaran a los proyectos independientes sino porque significaba quitarse ciertas responsabilidades.

Una conclusión general es que la presión social obligó al Estado a implementar mecanismos tanto para resolver el problema de vivienda como para tomar en sus manos un conflicto social. Eso queda claro con las propias declaraciones del Presidente de la República al decretar la expropiación de predios y al ser la primera tarea de organización de la reconstrucción formar Consejo de Reconstrucción Habitacional de Renovación, aún sin saber bajo qué criterios se iba a trabajar. Renovación se dedicó a "torear la bronca" primero con la expropiación, después con la entrega de certificados de derecho y, finalmente, con medidas de financiamiento (como la contratación de préstamos).

Respecto a la reconstrucción se cree que los programas estaban inciertos dentro de la misma lógica de apoyo a la industria de la construcción mediante los programas de vivienda que desarrolla el Estado, dirigidos hacia los sectores de escasos recursos. Esto no es ninguna novedad, cubre una serie de características que han tenido siempre los programas de vivienda: en primer lugar, las condiciones de pago son inaccesibles para la mayoría de la población a la que se dice están destinadas; en segundo lugar, en los casos en que se habla de autoconstrucción los requisitos de inversión de trabajo en la obra son difíciles de cubrir por la mayor parte de las familias.

Por otra parte, los alcances de los programas fueron muy reducidos en relación con la problemática. Las reparaciones, remodelaciones y rehabilitaciones fueron totalmente superficiales, no cubrieron los requerimientos mínimos de los damnificados, en términos técnicos, físicos, ni culturales. El acceso a los programas estuvo frecuentemente mediado por la afiliación de organizaciones controladas por el PPI; la práctica, la participación activa de los vecinos en la planeación, ejecución y supervisión de las obras estuvo restringida o bloqueada y, por último, la información que se da a la opinión pública sobre estos programas se presentó fraccionada, impidiendo una evaluación integral de ellos.

Toda la información publicada desde la creación hasta el finiquito del programa de Renovación Habitacional Popular fue bastante contradictoria.* A dos años de los sismos es difícil poder hacer una evaluación sobre dicho programa y de los posteriores como fueron Fase II y Casa Propia, por lo cual sigue siendo válida la necesidad de dar seguimiento a la investigación sobre las acciones implementadas por el Estado en materia de vivienda a partir de 1985 por todas las repercusiones sociales, económicas y políticas que trajo consigo.

* Para mayor información sobre los resultados de P40, Fase II y Casa Propia consultar:

Informe Anual de Coyuntura de Casa y Ciudad 1987.

Los actores de la reconstrucción. México, 1987.

Renovación Habitacional Popular. Atlas Técnico de la Reconstrucción. México, SEDUE, 1987.

Rosales Ayala, Silvano. Participación Popular y Reconstrucción Urbana (Tepito 1985-1987). México, UNAM, 1987.

Presidencia de la República. Reunión sobre Evaluación de Reconstrucción. México. Dirección General de Comunicación Social. Septiembre 13 de 1987.

TLATELOLCO: La historia de una infamia

EDNA ELENA VEGA RANGEL

Introducción

La unidad habitacional Adolfo López Mateos, mejor conocida como Nonoalco-Tlatelolco ha sido desde su propio proyecto hasta la fecha, motivo de atención de la opinión pública. En un folleto de promoción de esta unidad habitacional publicado en 1964 por el entonces Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas, S.A. (hoy Banobras), se señala: "La nueva Ciudad Tlatelolco surge del escenario mismo en que se desarrollaron los sucesos más gloriosos de nuestra historia. Por eso es joyel de tradiciones y cultura. LA NUEVA CIUDAD TLAELOLCO, como obra urbanística de primer orden, se proyecta hacia el futuro como símbolo del mexicano con suficiente fuerza física y espiritual para esperar confiado el mañana".

Nada quedaría más lejos de la realidad que esta afirmación "para esperar confiado el mañana", ante sucesos como la matanza del 2 de octubre de 1968, y el desplome del edificio Nuevo León el 19 de septiembre de 1985; el primero, por causas fundamentalmente político-económicas, el segundo, si bien causado por un fenómeno natural, determinado por la negligencia de nuestras autoridades capitalinas.

El presente artículo es una compilación de información y testimonios que nos llevan a demostrar (lamentablemente a costa de muchas vidas) la inoperancia de tan majestuoso proyecto.

I. Antecedentes

El proyecto de construcción de la Unidad Habitacional Adolfo López Mateos, tiene como antecedente inmediato la intención del gobierno (desde 1955) de poner en marcha un plan de regeneración urbana.

Con base al estudio sobre las zonas de tugurios realizado por el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas, se investigaron algunas colonias proletarias hasta "localizar el sitio que se consideró más adecuado para la construcción de la primera gran ciudad de carácter autónomo". Esta investigación se inició en 1958.

Después de investigar el cuartel Noroeste de la Ciudad, limitado por la Avenida Insurgentes, la Calzada de Tacuba, Guatemala y la carretera de Puebla, se decidió aprovechar los terrenos de la antigua estación central de los Ferrocarriles Nacionales, a estos se le unieron algunos terrenos más en los que había bodegas y construcciones en pésimo estado (básicamente vecindades) hasta contar con una superficie de 944 mil 530 metros cuadrados, que servirían para la primera fase o fase piloto de un proyecto que pretendía originalmente cubrir alrededor de 3 millones de metros cuadrados, para construir 38 mil viviendas destinadas a una población de más de 210 mil familias, para lo cual, además de la zona Nonoalco-Tlatelolco, se contemplaba el estudio de Perálvillo, Tepito, Penitenciaría, Lagunilla, El Carmen y Guerrero.

En dicha investigación se obtuvieron los siguientes datos:

- Se registraron densidades de población en índices superiores a los 600 habitantes por hectárea como promedio, y máximos que superaban los 800; mientras los correspondientes a la ciudad de México sólo alcanzaban un promedio de 150 habitantes por hectárea.
- Las construcciones dominantes, eran en un 80% vecindades que databan de 1880 a 1900.

Las construcciones destinadas a habitaciones carecían por completo de planeación; las unifamiliares, rodeadas de barracas, se levantaban en un terreno mínimo mal distribuido; en la mayoría de los casos contaban con una accesoria comercial, y el patio se utilizaba como taller o bodega.

- El 60% de las habitaciones tenían un alquiler de \$75.00. Por cuanto hace a los terrenos, su precio promedio era de 200 pesos el metro cuadrado.

De acuerdo a este estudio se determinó el tipo de vivienda que era necesario construir, ya que el discurso oficial señalaba que el proyecto debía combinar el aspecto social con el económico de tal forma que las características generales de los edificios pudieran satisfacer las necesidades de distintos estratos de la población.

De esta manera se clasificaron los edificios en tipos A, B, C destinados a familias de bajos ingresos; tipos I y L de semilujo y los tipos K, M y N, edificios de lujo que serían condominios, construyéndose en total 11 mil 906 departamentos. (VER CUADRO I)

El proyecto señalaba como finalidad principal: "abaratarse las rentas" y "evitar que sus moradores tengan que desplazarse hacia diversos puntos para satisfacer demandas cotidianas, ya que los medios para lograrlo se proporcionarán en la misma zona". En su totalidad, "la nueva unidad habitacional significa la descentralización orgánica, restructuración y rehabilitación de los barrios dentro de la ciudad".

Para desarrollar el proyecto, concebido por el Arquitecto Mario Pani, se invirtieron alrededor de mil 200 millones de pesos; el valor en que se adquirieron los terrenos fue de 1 y 140 pesos el metro cuadrado, calculándose una utilidad de 80 millones de pesos.

El financiamiento provino del Banco Interamericano de Construcción que, de acuerdo a un artículo publicado en el periódico El Día, el 23 de marzo de 1987 titulado "Crisis urbana y gestión social de la ciudad de México", proviene directamente de la "Alianza para el Progreso", a través del Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras, S.A.

Citando el mismo artículo, de la inversión total, el 58% se destinó a la construcción de los edificios tipo A, B, C, e I; 24% a los edificios K, L, M y N, un 13% a los servicios sociales (deportivos, escuelas, clínicas de salud, etc.) y el 5% a locales comerciales.

Entre las constructoras que intervinieron están: Construcciones y Pilotes S.A. (CONPSA), Cimentaciones Mexicanas (CIESA), C y R, S.A., Ingenieros y Contratistas, S.A. (INCONSA), Promoción y Relación de Obras S.A. (PROSA), Toluca S.A., Constructora Excelsior S.A., a cada una de las cuales se les asignó un número específico de edificios a construir.

Fue en 1960 cuando dio inicio la construcción de "la majestuosa ciudad", integrada por 102 edificios destinados a habitación y 45 destinados a servicios sociales, sobre una superficie de casi un kilómetro cuadrado, de la cual 400 mil metros cuadrados se destinaron a áreas verdes. La obra concluyó en 1964, coincidiendo con la conclusión de sexenio presidencial de Adolfo López Mateos.

Tlatelolco representaba la modernización de la ciudad: los grandes edificios con todos los servicios y el equipamiento urbano incluidos, resolverían el problema de la vivienda, eliminando "lo feo" (las vecindades y ciudades perdidas que rodeaban los patios de ferrocarriles).

CUADRO I

CARACTERISTICAS DE LOS EDIFICIOS DE LA UNIDAD.

| TIPO DE EDIF | NUM. DE EDIF | NUM. DE DPTOS. POR CADA TIPO DE EDIF | TOTAL DPTOS. | NIVELES POR TIPO DE EDIF | TOTAL CUARTOS SERVICIO | TOTAL LOCAL COMERCIALES |
|--------------|--------------|--------------------------------------|--------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|
| A | 17 | 112 | 1904 | 4+PB | ----- | ----- |
| A1 | 2 | 64 | 128 | 4+PB | ----- | ----- |
| A2 | 13 | 140 | 1820 | 5+PB | ----- | ----- |
| A3 | 12 | 100 | 1200 | 5+PB | ----- | ----- |
| Pc | 1 | 120 | 120 | 8+PB | ----- | ----- |
| Bn | 8 | 60 | 480 | 8+PB | 192 | ----- |
| Bo | 2 | 120 | 240 | 8+PB | 88 | ----- |
| Bp* | 5 | 90 | 440 | 8+PB | 170 | ----- |
| C | 10 | 288 | 2880 | 13+PB | 1050 | 410 |
| I | 9 | 112 | 1008 | 7+PB | 756 | 162 |
| K | 6 | 52 | 312 | 13+PB | ----- | 84 |
| L | 5 | 78 | 390 | 13+PB | ----- | 20 |
| M | 5 | 82 | 410 | 21+PB | ----- | 30 |
| N | 7 | 82 | 574 | 21+PB | ----- | 42 |
| TOTAL 102 | | | 11,906 | | 2256 | 748 |

* El edificio Donato Guerra (Bp) tiene 10 departamentos menos.

PB= planta baja.

De los 102 edificios construidos, el 14% fue destinado a empleados del ISSSTE y, por lo tanto, administrado por esa institución (9 tipo A, 4 tipo B y 2 tipo C); mientras el restante 84% sería administrado por Banobras y Fonhapo a través de la Administradora Inmobiliaria S.A. (AISA). Al respecto es importante señalar que los dos edificios restantes (tipo N) -ubicados sobre la Avenida Paseo de la Reforma y conocidos como las Torres Tecpan- fueron concesionados a un particular, para ser utilizados como "suites".

En los años que siguieron no se volvió a hablar de la continuidad del proyecto original; al contrario, se presentaron una serie de problemas no previstos, de los cuales sobresalieron: la falta de lugares de estacionamiento, las alzas arbitrarias a las cuotas de mantenimiento, el pésimo estado de la unidad, la utilización de los cuartos de servicio para vivienda de gente de escasos recursos; todos ellos motivos suficientes para que la población comenzara a organizarse desde hace ya 14 años.

En 1974 cuando se inició la organización vecinal en Tlatelolco, a través del COMITE COORDINADOR PROVISIONAL DE RESIDENTES DE CIUDAD TLATELOLCO, se denunció el excesivo incremento (del 20%) a las cuotas de administración y mantenimiento por parte de AISA. Esta organización provisional llegó a formar el 15 de abril de 1975 el COMITE COORDINADOR DE ASOCIACIONES DE RESIDENTES DE CIUDAD TLATELOLCO, A.C., de hecho la primera organización formal, tenía como demandas centrales las siguientes: (1)

1. Establecimiento del régimen de condominio.
2. Revisión del contrato de compra-venta de certificados de participación inmobiliaria, ya que no permite la cesión de derechos incorporados a los certificados y prohíbe el libre arrendamiento de los departamentos.
3. Derogación de los aumentos improcedentes sobre las cuotas de administración y mantenimiento.
4. Auditoría para esclarecer el destino que AISA ha dado a las cuotas de administración y mantenimiento.
5. Declaración de que no existe gravamen en los edificios de la unidad derivados de la emisión de certificados fiduciarios de adeudo.
6. Voz y voto de los representantes de los residentes en las juntas del Comité Ejecutivo del Fideicomiso que controla la unidad.

Estas demandas son sólo algunas de las planteadas por el Comité Coordinador, de las cuales la mayoría siguen vigentes. Entre los aspectos que se modificaron estuvo la demanda por el cambio de régimen de propiedad, si en un principio se buscaba escriturar en condominio más tarde empezaron a considerarse las opciones de asociaciones civiles y copropiedad.

Por medio del Comité se impulsó la creación de asociaciones civiles en cada uno de los edificios, con el fin principal de llegar a la autoadministración, sin embargo, fueron muy pocos los edificios que lo lograron.

Al agudizarse los problemas se crearon varias organizaciones como: el Consejo de Edificios en Autoadministración, la Coordinadora de Cuartos de Azotea, Asociación de Residentes y la Coordinadora de Residentes que, en síntesis, demandaban y siguen demandando la rehabilitación de los edificios y, en general, de toda la unidad habitacional.

A propósito de lo anterior, Pablo Muñoz, representante de la Coordinadora de Residentes de Tlatelolco, comenta:

"Podríamos señalar que la lucha en Tlatelolco es anterior a los sismos, esta lucha se dio fundamentalmente en razón al cambio de régimen que se trataba de implementar por parte de FONHAPO. Había problemas también de mantenimiento y, en virtud de ello, se crearon ciertas organizaciones, algunas de membrete, porque sus miembros se reunían periódicamente, pero no se llevaba a cabo ninguna acción de las planteadas; otras reales, dentro de ellas vale la pena mencionar a la Coordinadora de Cuartos Azotea de Tlatelolco que siempre ha trabajado con sus bases y que representa una fuerza verdadera y a otras, como la Asociación de Residentes, el Frente de Residentes, Asociación de Edificios en Autoadministración".

"...Se luchaba porque no se diera el cambio de régimen y por mejores servicios de mantenimiento que brindaba la Administradora Inmobiliaria S.A. (AISA), dependiente de BANOBRAS, ya que era muy defectuoso"

Otro testimonio que puede ilustrar sobre los primeros pasos de la organización vecinal es el de José Antonio García, miembro de la Coordinadora de Cuartos de Azotea, respecto a la creación de ésta, la cual ha sido una de las organizaciones que cuenta hasta hoy con una gran presencia al interior e incluso al exterior de Tlatelolco.

"Nuestra organización nace en 1983 ante un intento de desalojo masivo que se dio por parte de la mesa directiva del edificio Ponciano Arriaga. Alrededor de 40 inquilinos de azotea iban a ser desalojados. Nos dimos cuenta que existía todo un plan por parte de las mesas directivas reaccionarias en desalojar a los compañeros de azoteas. Los métodos que utilizaban, si hacemos historia eran: en 1973 por parte de BANOBRAS se dio un desalojo masivo de 2 mil compañeros que habitaban las azoteas, fue un desalojo violento, inclusive hubo enfrentamientos, y la justificante de un desalojo tan brutal por parte de BANOBRAS fue que ahí era un nido de prostitutas y malvivientes. Lo que se dio fue una especie de unidad entre caseros y BANOBRAS, coludidos en hacer este tipo de injusticias. Supuestamente, estos cuartos se habían hecho para la servidumbre y choferes, pero la realidad es que la mayoría de estos cuartos eran rentados. De los 102 edificios de la unidad 34 contaban con cuartos de azotea, que en total sumaban 2 mil 256 cuartos".

"Qué era lo que sucedía, Yo como propietario hacia un trato con un inquilino, decía; te lo rentó entre 5 y 6 mil pesos renta ya bastante cara en ese entonces (hace 3 años)-. Cuando yo ya no estaba de acuerdo porque mi inquilino ya no me quería dar más dinero, entonces yo me quejaba a AISA, y acusaba de invasión al inquilino. AISA enviaba todo su aparato jurídico y lo acusaba de despojo, citaba al inquilino a la delegación, y al no poder comprobar con recibos ni con contrato, inmediatamente al compañero se le encarcelaba por despojo y robo, entonces, le quitaban las pocas cosas que tenía, y volvían a dejar el cuarto cerrado; al poco tiempo se volvía a rentar".

"Cuando en 1973 y 74 se da ese desalojo masivo, AISA pone una vigilancia en todos los edificios con cuartos de azotea y en los estacionamientos X y Z, y daban una credencial de empleada doméstica y chofer. Pero a los 2 ó 3 años se vuelve a romper y vuelven a rentar los cuartos, y se repite la historia. Al darnos cuenta de estas injusticias, algunos compañeros decidimos constituir una organización de defensa inquilinaria. Como primer punto empezamos a investigar como defender nuestros derechos como inquilinos". Empezamos a leer el Código Civil, empezamos la lucha".

"Para la formación de nuestra organización citamos a los habitantes de cuartos de azotea del edificio Nuevo León y del estacionamiento "Z". Empezamos a tener reuniones, y formamos lo que se llamó Unión de Vecinos Organizados de los Cuartos de Servicio de Tlatelolco (UVOCS). Buscamos apoyo en algunos abogados, pero desgraciadamente hay pocos abogados comprometidos con las luchas populares, algunos te condicionan el apoyo; se convierten en caudillos, lo que en mi punto de vista es incorrecto".

"Entonces al no encontrar abogados que nos brindaran apoyo incondicional, nos vemos en la necesidad de estudiar e ir aprendiendo, primero a hacer consignaciones, comprar billetes y llevarlos a lo que ahora es el Juzgado de Arrendamiento Inmobiliario, antes era de los Civil. Empezamos a volantear con aquellos compañeros que estuvieran dispuestos a dar la lucha y a organizarse en la UVOCS invitándolos a que asistieran a nuestras asambleas para asesorarse jurídicamente".

"Empezamos a consignar, y ya no fue tan fácil desalojarnos, ni podían acusarnos de despojo, ni de robo. ¿Cómo contrataban los propietarios de cuartos de azotea y las mesas directivas de los edificios?... al no poderte desalojar legalmente, empiezan con cortarte la luz y los servicios, ¿qué sucede?, los servicios son colectivos, te quitan lavaderos, te quitan llaves de agua, dejan un solo baño para 16 familias, fue el caso por ejemplo, de los compañeros del Nuevo León. Lo que hicimos fue demandar a los propietarios por despojo de los servicios, pero no prosperó, porque según los acuerdos de la asamblea de cada edificio, los propietarios pueden hacer de sus servicios lo que ellos quieran".

Los problemas más fuertes los tuvimos con un señor llamado Enrique Pliego Rodal, "el dictador", que fue quien más atacó y dañó a los compañeros de cuartos de servicio. Lo que hicimos fue acusarlo por robo, ya que poníamos llaves, mandaban a sus trabajadores a quitarlas y ahí las deteníamos cuando las estaban quitando".

"Hablamos primero con los trabajadores para que no se presantaran a esa arbitrariedad, pero a lo que decían -yo recibo órdenes y no me interesa", se les detenía y se les acusaba de robo, aunque hubo trabajadores que se solidarizaron con

nosotros y prefirieron perder el empleo. Se acusaba directamente a la mesa directiva de los edificios. Logramos que nos respetaran únicamente las llaves".

"Después de esta lucha, con las consignaciones, y de poner llaves, etc. llegamos a evitar todo tipo de desalojos, los propietarios de los cuartos llegaban a hablar con nosotros, y fijábamos la nueva renta, convenios siempre favorables para los inquilinos. Posteriormente, como veíamos que la UVOCS de hecho sólo defendía a 3 edificios decidimos hacer un llamado a toda la Unidad para constituir lo que hoy es la Coordinadora de Cuartos de Azotea de Tlatelolco (CCAT). Hubo un primer llamado y muy pocos respondieron, los compañeros siempre vivían con temor, temor a que si llegaba la trabajadora social, si llegaba el licenciado, AISA o FONHAPO, cometieran abusos, que les sacaran sus cosas, hasta a las compañeras les hacían proposiciones indecorosas si querían mantener su cuarto".

"Los compañeros no creían en nada, ni en nadie. Pero a raíz de que detuvimos los desalojos en el Ponciano Arriaga, en el estacionamiento X y a raíz de que impedimos los aumentos de renta a 26 cuartos del estacionamiento Z (por parte de David Alarcón, propietario del inmueble) se dio una lucha muy fuerte, ya que les querían aumentar de 5 mil a 8 mil pesos; promovimos las consignaciones, hablamos con su representante que es el Lic. Enrique Cueto (gerente de las Tecpan). Al ver que no podía hacer nada, porque esos cuartos están irregulares, le dijimos: vamos a consignar y, además vamos a profundizar a ver si son de su propiedad. Logramos acordar que se les iba a respetar los 5 mil pesos de renta y, además, les iba a hacer mejoras en sus cuartos".

"La gente se convenció de que era necesario organizarse en la CCAT (ahí, como en toda organización inquilinaria, los intentos de desalojo los detenemos) y seguía manteniéndose la organización, seguía creciendo, pero era únicamente una organización de lucha inquilinaria. Llegamos a la conclusión de que no era conveniente vivir en esas condiciones; finalmente, lo que queríamos era una vivienda digna, no vivir en cuartos toda la vida (pues, no era una vivienda digna). Para eso tratamos de formar nuestra asociación civil, constituimos la Asociación Civil de la Coordinadora de Cuartos de Azotea para sacar créditos ante FONHAPO. Empezamos a tener

pláticas con este organismo para que nos diera créditos para vivienda, terrenos o autoconstrucción. Pero esto poco fructificó, porque nos tomaban en "bromita" los de FONHAPO, por nuestros bajos ingresos, éramos los "mugrosos" y nos creían incapaces de organizarnos, pero ya cuando la vieron en serio, que ya era un grupo numeroso, nos empezaron a dar listas que tienen de reservas territoriales, empezábamos a hacer asambleas para ver costos, ingresos y todo eso cuando... se da el sismo"

Ya desde 1982 la Asociación de Residentes de Tlatelolco y el Consejo de Edificios en Autoadministración (23 edificios en ese entonces), habían señalado entre dos de los principales problemas de la unidad: "la carencia de instalaciones de seguridad para casos de siniestro y falta de control de las obras de recimentación y de renivelación de los edificios, estos problemas son resultado de la incapacidad de las autoridades del DDF", agregaron.(2) Es importante recalcar la fecha y la declaración, ya que a 3 años de ellas se derrumbaron 2 de las 3 secciones del edificio Nuevo León.

II. 19 y 20 de septiembre de 1985

Así el 19 y 20 de septiembre de 1985, los sismos de todos conocidos sorprendieron de manera trágica a los residentes de esta gran unidad habitacional y en particular a los habitantes del edificio Nuevo León.

Tlatelolco está dividido en tres secciones, de las cuales la tercera fue la más dañada, en menor grado la segunda y la primera casi no se resintió, lo que tuvo que ver con el tipo de construcción en cada unidad, por ejemplo en la tercera unidad, existe un mayor número de edificios altos, mientras que los edificios pequeños casi no tuvieron problemas. Se calcula que con los sismos más del 50% de la población total, estimada en 100 mil habitantes, desalojó su vivienda.

En el caso de Tlatelolco, al igual que en otras colonias dañadas por los sismos podemos hablar de tres etapas importantes: la de emergencia, la de dotación de vivienda y la de reconstrucción de la unidad (llevada a cabo por SEDUE).

III. Primera etapa: EMERGENCIA

La propuesta inicial de FONHAPO fue establecer una coordinación entre la Secretaría de Salud, el Departamento del Distrito Federal, el Ejército, SEDUE y el propio FONHAPO, directamente con las organizaciones vecinales para formar guardias permanentes y rotativas en los edificios. Sin embargo, en la primera etapa no había coordinación alguna por parte de las autoridades ni de las organizaciones involucradas. De acuerdo a información oficial, las autoridades elaboraron un programa de emergencia que consistía en:

1. Determinar qué edificios requerían ser desalojados.
2. Promover niveles de organización, es decir que las organizaciones ya existentes se hicieran cargo de la gestoría y la negociación.
3. Organizar y canalizar a la gente a los albergues.

Esta primera etapa fue un momento difícil; FONHAPO era el centro del conflicto, ya que era el responsable de la administración y mantenimiento de los edificios (a través de AISA) desde 1982.

Toda la información en ese momento era bastante contradictoria, incluso por parte de las autoridades de una misma dependencia.

El testimonio de Pablo Muñoz, respecto a la etapa de emergencia es el siguiente:

"Hay un cambio cualitativo y cuantitativo muy significativo en cuanto sucede el sismo".

"Nos agrupamos todos por la propia tragedia, las necesidades, la afinidad y, de hecho, se pierden las organizaciones existentes, no así la CCAT. Se formó la Coordinadora de Residentes de Tlatelolco aparejada a la CCAT. Hay un gran número de personas que participan, y es a partir del propio día 19 que esto se hace".

"No podíamos creer la magnitud de la tragedia. Ese mismo día se plática con varias personas para definir que hacer. Decidimos ir al día siguiente a las oficinas de AISA, para pedir solución a los problemas de los residentes o sobrevivientes del Nuevo León, e indemnizaciones para los familiares de las personas fallecidas".

"El día 20 a las 4 P.M. se acude a las oficinas de AISA, para entrevistarnos con el Director de FONHAPO, y se dialogó con él. Lo impresionante en esa reunión era ver gente del edificio Nuevo León, que salió herida, sobrevivientes vendados, parecía una revolución".

"El director de FONHAPO no sabía que hacer, se vela muy impresionado. Llegó un momento que dijo que él no tenía facultades para resolver nada. Sin embargo, se logró que se les diera una ayuda de 4 mil 500 pesos diarios a los damnificados, para poder sufragar sus necesidades de habitación y alimentos, que se les ubicara en un hotel que pagaría completamente FONHAPO. Hasta ahí en parte lo que se relacionaba con el edificio Nuevo León, que de momento fue el problema más grande, pero vino una serie de demandas respecto al resto de los edificios, ¿qué era lo que iba a suceder con ellos?, el director se declaró incompetente para resolver los problemas".

"En un momento dado no quedó más que servir de gestor, era menester buscar otra alternativa como SEDUE o BANOBRAS, ya que FONHAPO se declaraba incompetente. El día 22 del mismo mes se hizo una reunión en la Plaza de las Tres Culturas, para la cual no hubo una convocatoria de alguien en especial, o de alguna organización, sino de los Tlatelolcas. Esta reunión se convoca para determinar qué se iba a hacer, se pedía que compareciera el Arquitecto Ortiz Flores, director

de FONHAPO, para que diera una respuesta, pero se nos dijo que no era posible que asistiera, lo buscamos y lo encontramos en el teatro 5 de Mayo. Fue una sorpresa que al estarle preguntando sobre diversos puntos de Tlatelolco, él nos contestara que no sabía absolutamente nada, pese a que ya habían pasado 3 días, y que pudo haber hablado con su cabeza de sector que es la SEDUE. Ahí ratificó su postura de no tener la capacidad de resolver los problemas de Tlatelolco. También nos sorprendió la irrupción de la Diputada del PRI Elba Esther Gordillo. Esta señora llevaba a sus guaruras que además hacían ostentación de que llevaban armas seguramente con el deseo de participar activamente en la reunión. La gente estaba tan molesta que ni siquiera le permitió tomar la palabra, y no porque no se quisiera, sino por la irritación que se sentía hacia los diputados por no haber hecho absolutamente nada para ayudar a Tlatelolco en los momentos graves, es más no los vimos jamás aquí ni en el edificio Nuevo León, ni en ningún otro edificio. Ellos se disculparon ahí diciendo que habían tenido siempre un acercamiento con Tlatelolco, si bien no personal sí a través de sus ayudantes, cosa que nosotros no podemos constatar. Al no tener una respuesta en ese momento con el director de FONHAPO, creímos conveniente ir a AISA, donde solicitamos la presencia de alguna autoridad competente, la de SEDUE, porque el segundo día después del temblor ésta intervino en las operaciones tanto de AISA como de FONHAPO".

"Acudimos a ver al director de FONHAPO, y era una multitud tan enorme que, de hecho, rodeamos todas las oficinas, estaban en una reunión y no nos querían recibir pero la comisión subió y le pedimos que dialogáramos. Mencionaron que sí lo harían pero con una comisión de 3 a 5 personas que consideraríamos representantes y les dijimos que no, que ellos tendrían que bajar a hablar con la gente para darles una respuesta. Queriendo o no bajaron, y nos dieron respuestas, porque decían que en un momento dado ellos pagarían una indemnización que se contempla en los Certificados de Participación Inmobiliaria a través de un seguro que pagan directamente los residentes, pero no se sabían los montos, y también dijeron que se reconstruirían los edificios. Pese a la lluvia, la gente seguía ahí, estaba furiosa, y muchas veces se quiso atentar contra estas personas".

"En esta reunión estuvo presente el diputado del PSUM Martínez Verdugo, residente del edificio José Manuel Arteaga, quien se ofreció a presentar en la Cámara de Diputados un documento elaborado por nosotros donde se señalaran cuáles eran nuestras demandas e inconformidades. Lo importante de este documento es que no se han modificado en absoluto nuestras solicitudes, que se sintetizan así: a) para los sobrevivientes del edificio Nuevo León una reubicación, en tanto se determinaran los pagos de indemnizaciones; b) permuta de los residentes sobrevivientes en edificios y departamentos similares; y, c) ya no a la ingerencia del gobierno sino que las decisiones las tomáramos los tlatelolcos".

"El 7 de octubre estuvimos presentes en la Cámara de Diputados, pero fuimos expulsados, porque se presentó de nuevo la Diputada Elba Esther y señaló que en Tlatelolco todo estaba bien, que su partido (PRI) se había ocupado de manera diligente de solucionar los problemas de los Tlatelolcos. Ante afirmaciones tan indignantes, se le abuchó hasta que llegó el momento en que se nos expulsó de la Cámara".

"Pedimos ayuda a organizaciones internacionales, como a la de Arquitectos e Ingenieros sin Frontera de París, Francia. Desafortunadamente, algo que notamos desde un principio es que Tlatelolco no contaba con ayuda alguna, ni por empresas privadas y menos por el gobierno. Nos contactamos con la UAM, con la Universidad de Puebla y con la UNAM, y se nos dijo que en Tlatelolco no podían actuar".

"Decidimos hacer una manifestación directamente en SEDUE previo un documento que se envió a Carrillo Arena, la entrevista la tuvimos con el Subsecretario de Vivienda, Gabino Fraga. Mientras platicábamos con él, Carrillo Arena -entonces Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología- tenía una entrevista con los periodistas, y aunque el Subsecretario Gabino Fraga nos aseguró varias cosas acerca de nuestras peticiones, Carrillo Arena afirmaba todo lo contrario a la opinión pública".

"Pedíamos sin embargo que se hicieran peritajes para los edificios, y una vez que los peritajes fueran avalados por firmas prestigiadas se determinara que hacer con los edificios. El Arq. Carrillo Arena, sin haber elaborado un estudio

erio de los edificios, ya estaba condenando a 32 de ellos a ser derruidos. Nos indignó darnos cuenta que había sido una arsa la plática con el Subsecretario de Vivienda".

Una vez que vimos que no había forma de desbaratar estos planes, acudimos el día 9 de octubre a la Cámara de Diputados con un documento donde manifestábamos que realizaríamos una marcha pacífica el sábado siguiente. Esta marcha no fue muy concurrida, llegó a los Pinos, pero en lugar de ser recibidos por el Sr. Presidente nos recibió su secretario y no se obtuvo más que la promesa de que se analizarían los problemas y se llegaría a una determinación, pero esta determinación nunca se dio".

La comunidad siguió realizando asambleas, y se preparó otra marcha para el 12 de octubre. Fue una marcha de aproximadamente 30 mil tlatelolcas, y pese a que durante el trayecto fuimos hostigados hasta en 7 ocasiones para que no la realizáramos, llegamos hasta los Pinos. En esta ocasión al Sr. Presidente se le entregó el pliego petitorio que se resume en lo siguiente:

- 1) Investigación exhaustiva de las causas que provocaron el desplome del edificio Nuevo León, con el correspondiente deslinde de responsabilidades civiles, profesionales y penales que procedan.
- 2) Peritajes responsables, amplios y serios de cada uno de los edificios que conforman la Unidad.
- 3) Reubicación inmediata y restitución posterior de vivienda en Tlatelolco a los damnificados.
- 4) Que no se tome ninguna decisión sobre Tlatelolco y su futuro al margen de los residentes organizados de la unidad.
- 5) La participación de representantes nuestros en los Comités y Comisiones de la Reconstrucción.

"El Sr. Presidente dijo algo muy acertado que nos convenció a todos y era que efectivamente no se podía atentar contra la vivienda de Tlatelolco, sino era una vez que se hubieran realizado los peritajes definitivos y exhaustivos".

"Señaló en contra de la afirmación de Carrillo Arena acerca del derrumbe de 32 edificios, que mientras no se hicieran los peritajes no se derrumbaría edificio alguno, cosa que nos pareció adecuada, ya que sin ser técnicos sabemos que sólo puede tirarse un edificio cuando definitivamente no sirve".

"Podemos determinar que a raíz de esto, y una vez que se nombró a Gabino Fraga para que fuera el conducto de Tlatelolco, hubo problemas en cuanto a los peritajes que se realizaron, los cuales desconocimos, ya que los técnicos lo único que hacían era ver, no traían aparatos, no hacían estudios del subsuelo, no había perforaciones para sacar corazones de concreto. En fin, creímos que era una cosa de juego, y hubo mucha inconformidad, estuvimos realizando asambleas de manera interna, y tuvimos que hacer una nueva marcha, para la cual se nos pusieron trabas y lo único que obtuvimos fue poder platicar con el Secretario nuevamente, pero todo se quedó en plática".

El testimonio del compañero José Antonio García sobre estos mismos momentos de emergencia es:

"El sismo nos sorprendió a todos, y no es por darnos nuestros cebollazos, ni como de egolatría, pero en el minuto que se da el sismo, se muestra una solidaridad de compañeros de azoteas, que sin necesidad de organizarse como Coordinadora, andaban en el rescate. Nos integramos al rescate de los compañeros del Nuevo León, estábamos ahí en lo que pudiéramos ayudar".

"Por otro lado la mayoría de los edificios que salieron dañados tenían cuartos de azotea y una de las preocupaciones fuertes era: vamos ayudar a los del Nuevo León y luego, qué vamos a pasar con nosotros, a dónde nos vamos a ir, qué vamos a hacer. Nos empezamos a agrupar en el parque Santiago. Mientras tanto llegaron camiones del DIF, de centros de Ayuda para llevarse a nuestros compañeros, pero no sabíamos qué hacer".

Me parece que algunas dependencias intervinieron sólo para hacer proselitismo, no se les veía una verdadera intención de ayudar. Tomamos el acuerdo y se fueron 100 familias albergadas en un campamento de Indios Verdes, pero otras 60 familias decidimos quedarnos, permanecer en Tlatelolco, y pusimos un campamento provisional en un predio que está enfrente de Viana sobre la Av. Reforma, ahí montamos nuestro campamento e inmediatamente llegó la ayuda y solidaridad del pueblo, ahí también llegaron compañeros de otras colonias. Al otro día nos empiezan a aventar cascajo de los restos del Nuevo León para sacarnos de ese campamento. Llegan como a las 9 de la noche con el cascajo, que producía un olor muy fuerte. A las 6 de la mañana decidimos pasarnos al campamento del Jardín Santiago, también inmediatamente llega ayuda del pueblo, de la CONAMUP, del SITUAM, de Tepepan".

"Pero se nos empiezan a infiltrar agentes de Gobernación, se nos empiezan a infiltrar los famosos doctores PRIISTAS, más que priistas, rateros. Porque si bien llegaron profesionistas, doctores con muy buenas intenciones de apoyar a los damnificados, llegaron otros con muy malas intenciones, como el caso de un doctor que nos causó muchos problemas, y estamos seguros que lo puso la misma delegación Cuauhtémoc, para que cuidara a la gente de los cuartos de azotea, el Dr. Romeo Pérez, que para empezar era Odontólogo no doctor, y la ayuda oficial él la canalizaba y distribuía. empezó a tener peso dentro de la organización y con ello manipuló la situación. Decía: -si se van con esas personas, que son comunistas, rojos y son lo peor, yo no les voy a dar ayuda. Nos metió en una división muy fuerte, y la gente, por sus misma necesidad, se fue acercando al Dr. Romero, quien además, decía: -si están conmigo la ayuda sobra. Creemos que esto sucedió en todos los campamentos, llegamos a la conclusión de que era una forma de control por parte de la delegación y del PRI, sobre todo en los campamentos más conflictivos como en la colonia Guerrero y la Morelos, es decir, donde hay antecedentes de lucha independiente".

"Lo que hicimos fue únicamente señalar que el Dr. estaba actuando mal, pero la gente no lo creía, hasta que ellos mismos se empiezan a dar cuenta de los robos que hizo".

"Se restableció la confianza en la Coordinadora, pero vuelve el ataque de que éramos comunistas porque se consiguieron casas de campaña de la Unión Soviética".

"Se acusó a los miembros del campamento de Santiago de ser guerrilleros urbanos, que teníamos armas, todo con el fin de preparar el desalojo violento del campamento. El Dr. Romeo y su grupo no querían salirse y sí metían bulla, pero contábamos con todo el apoyo de nuestros compañeros, incluso decían que no éramos damnificados los que estábamos coordinando el campamento. La gente expulsa a Romeo, y es cuando se consolida el campamento y en especial la Organización".

Ellos sabían que caía... ellos sabían

Sobre la caída del edificio Nuevo León a la vez que hay mucho que decir, los hechos fueron contundentes. A continuación presentamos el testimonio de Gonzalo Maldonado (sobreviviente).

"La Asociación de Residentes del edificio Nuevo León tenía ya varios años de estar organizada".

"Se acudió a la Procuraduría del Consumidor 30 días antes del sismo, llevando una pancarta que decía que la recimentación que se había hecho en el edificio Nuevo León realmente no daba seguridad, ya que había agua séptica en los sótanos, en los ductos de la basura".

"En esa reunión planteamos que si había un sismo de determinadas características, el edificio se vendría abajo. Los señores lo que hicieron fue reírse y no tomarnos en cuenta. Por eso una de las leyendas que llevamos durante las marchas que se realizaron después del sismo fue: ellos sabían que se caía, ellos sabían que se caía".

"Si se habían suspendido las obras de recimentación, fue porque las autoridades pretendían que los vecinos pagaran el costo, sin embargo, los residentes estábamos pagando los seguros, que cubrían los daños de los inmuebles, así que no teníamos porque hacer ningún otro pago. Es cierto que la recimentación del edificio era muy cara y aparentemente se hizo, ahora vemos lo bien que se hizo".

"Hasta el momento no había cambio de régimen de propiedad, no se trabajaba en autoadministración porque hubiera significado aceptar que los gastos correrían por parte de los residentes y no asumieran su responsabilidad FONHAPO y BANOBRAS".

"Desde el primer momento que sucedió la tragedia el trato hacia los residentes del edificio fue grosero, sin ningún respeto, altanero por parte del subdelegado, el Lic. Iron, y de las autoridades del DIF, ya que no otorgaron ninguna facilidad".

"Cuauhtémoc Abarca, presidente de la reconstrucción (SIC) es testigo del trabajo que hicieron, para identificación de cuerpos".

"Las indemnizaciones alcanzaron 5 millones 200 mil pesos por un departamento de 3 recámaras con cuarto de servicio, no es una indemnización total sino que se fue acumulando: 4 mil pesos diarios para gastos, menaje de los departamentos, 750 mil para los caídos, y de 500 mil para los que quedaron en pie, además de 300 mil pesos para quienes habían perdido sus autos. Esto se logró ejerciendo presión al Lic. Enrique Ortiz, director en ese entonces de FONHAPO".

"Las autoridades se sintieron tan presionadas con la caída del edificio, y con el hecho de que eran muchos los edificios que se iban a evacuar, que, lo que querían era sacar el problema más difícil, era el del edificio Nuevo León. Tan lo sacaron que todo lo demás fue muy fácil, indemnizar a los demás departamentos con sumas ridículas, como en el caso de los edificios de tipo "residencial" como el Xicotécatl y el Aguascalientes, a los que les llegaron a dar hasta 2.5 millones, a los edificios tipo "C", como el Nuevo León les llegaron a dar 1 millón 600 mil pesos. Los del Nuevo León ganamos un poquito más, pero a costa de tantas vidas".

Las indemnizaciones

"Desde el primer momento de las negociaciones, las autoridades prometieron que se iba a presentar a los responsables de esa tragedia, se pedía la consignación. Una vez que se tirara el módulo iba a ser más difícil comprobar y consignar a los responsables; entre ellos Carrillo Arena y el Subdelegado de Tlatelolco. Hasta el momento no se ha hecho nada y no creo que se haga".

"Hubo mucho saqueo por parte de las autoridades, desaparecieron las pertenencias de los residentes, en cuanto llegó el gobierno, el ejército, comenzaron los problemas y los robos, el saqueo fue tremendo".

"La vivienda no se dio, las viviendas las están vendiendo no regalando, los créditos que se dieron fueron pocos y tardaron mucho tiempo en darse. A mucha gente -la mayoría- no se les ha resuelto la solicitud de crédito. La mayoría de los residentes hemos resuelto el problema por nuestros propios medios".

"Tlatelolco tiene que volver a resurgir, y con mucha fuerza ante la gran necesidad de vivienda que existe en el país, principalmente en el DF. Entonces Tlatelolco va a resurgir; aunque exista la inseguridad ya que las reparaciones que están haciendo realmente no sirven".

"Yo sí volvería a vivir en Tlatelolco. La mayoría de los residentes del edificio Nuevo León coincidimos en señalar que el sismo fue el único medio en que nos podrían haber sacado de Tlatelolco, todos vivíamos muy a gusto, era muy buena ubicación, muy bonita zona, Tlatelolco tiene muy buen sistema de vida, tiene muchos servicios que unidades habitacional del sur de la ciudad no los tienen".

"A los Cuartos de Azotea se les dio el mismo trato en tanto que se les dieron facilidades para otorgarles vivienda y gastos de menaje, pero directamente la indemnización fue para los propietarios de los departamentos. De los cuartos de servicios, y de los residentes por cuerpo identificado se

les pago un millón 300, para aquella persona que no hubiera identificado a su familiar se levantaron actas, y después de un año si no aparecía el cuerpo, automáticamente se hacía acreedor al pago de indemnización".

"Desde un principio, cuando empezábamos a trabajar para organizar a los residentes porque el edificio se encontraba en mal estado, fue difícil, ya que no hubo una cooperación conjunta, fueron muy pocos los que respondieron, pero podemos considerar que sacamos adelante las negociaciones en lo que fue posible. En lo que se refiere al sismo, después de 16 años de vivir en el edificio la experiencia fue muy dolorosa, la mayoría de los vecinos que murieron fueron amigos míos, estábamos muy identificados. Murieron aproximadamente 700 personas, muchos de ellos no identificados".

"Hasta la fecha hay muchas solicitudes para créditos y para vivienda que están en SEDUE y que no se les ha dado solución. Si considero importante señalar que hay muchas irregularidades para el que realmente perdió su vivienda, no se les da un trato justo. Las autoridades se están inclinando a negociar por lo más fácil, porque para ellos es más fácil dar un crédito de cierta cantidad a gente de clase media hacia arriba, que reconstruir una vivienda. Lo único que nos queda decir es que si no salimos beneficiados nosotros, por lo menos que sean otras personas. Los sobrevivientes del Nuevo León en su mayoría siguen en contacto, pero en lo general, ya casi todos resolvieron su problema en lo individual".

"De la donación de Plácido Domingo se repartió millón y medio para cada residente. En el caso de los departamentos rentados fue el 50% para el propietario y 50% para el inquilino. Todo se hizo por medio de BANAMEX. Alguna ayuda para quienes vivían en los cuartos de servicio: algunos 750 mil, otros alcanzaron millón y medio. Este donativo provocó un choque con las autoridades, que querían manejar ese dinero, y este señor, bien sabido de las autoridades que tenemos, dijo que no, que él lo iba a dar personalmente, lo dio ante un grupo de representantes, y para los demás, salió una lista en el periódico que podrían pasar con previa identificación a recoger su cheque".

"En el momento inmediato al sismo no se supo nada del PRI, andaba en la Morelos y en otras colonias, pero aquí realmente no hizo sus "movimientos", hasta la fecha".

"La primera reacción de AISA y FONHAPO fue de temor, no tenían ni donde esconderse, ya que, en las cuatro entradas (C, D, E y F) fue muy reducido el número de sobrevivientes, de aproximadamente 164 edificio más cuartos de servicio sólo sobrevivieron 84 familias del módulo que permaneció en pie".

El testimonio del compañero de cuartos de azotea respecto a la caída del edificio Nuevo León es el siguiente:

"Sólo dos compañeros residentes del edificio Nuevo León, la compañera Guillén y la compañera Guerrero, apoyaron a los habitantes de cuartos de azotea, a quienes les decían: -no entiendo por qué los ayudan si son unos ignorantes, unos sucios, unas personas nocivas que les dieron muchos problemas. Pero aún así los apoyaron. Fueron 60 compañeros de cuartos de azotea del Nuevo León los que perdieron la vida. Hasta la fecha no todos han recibido el pago de indemnización por deudos, ni han recibido el pago por menaje que perdieron. Siempre minimizaron incluso la pérdida de vidas de los compañeros de cuartos de azotea".

"En el caso del compañero Salomón Reyes Crespo, perdió toda su familia: sus 9 hijos, sólo conservó a su esposa la cual, a consecuencia de la pérdida quedó mentalmente afectada. Le dieron un trato tan mezquino al compañero, queriendo incluso negociar por los deudos: que si tienes papeles de tu hijo te damos tanto y si no los tienes entonces es tanto. Siempre les dieron un trato muy soez a los compañeros que perdieron deudos en el Nuevo León, y eso nos ha indignado mucho. Finalmente, cuando nosotros tratamos de investigar las pérdidas, nos hemos dado cuenta que hay compañeros que simplemente se cansaron de buscar a sus familiares".

"Lo que se ha ganado después de esta experiencia, respeto ante las autoridades, es que en la medida en que pasan los días, más nos indignamos y más nos agrupamos. Antes de que se demolieran los restos del Nuevo León, nosotros hicimos una marcha silenciosa, residentes comprometidos y cuartos de azotea tratando de evitar que derrumbaran el Nuevo León".

Sobre la donación de Plácido Domingo:

"Todo siempre nos ha costado trabajo, desde la indemnización hasta la ayuda que dio Plácido Domingo. Algunos Tlatelolcas se han olvidado de su clase y de la solidaridad, empezaron a decir que a los cuartos de azotea no había que darles nada, querían hacerlos a un lado".

"Ahí tanto Plácido Domingo, como su mamá Pepita, fueron muy solidarios: tanto tiene derecho el del departamento como el del cuarto de azotea; y se dio por igual millón y medio".

"En este momento creemos que una tarea importante es la de retomar el asunto del derrumbe del Nuevo León, acusamos directamente a Eibenshultz, ya que era el director de FONHAPO cuando se hizo la recimentación del edificio, cuando se señaló que había problemas en el edificio y que con un sismo podía derrumbarse. Debemos desenmascararlo, y hacer que los funcionarios corruptos que tuvieron que ver, tengan su castigo. Pero podríamos decir que la mayoría de las demandas que tenemos las hemos logrado, pero nos hemos dado cuenta que sólo a través de la movilización se pueden lograr las cosas en este país, que la inercia y la pasividad no dejan frutos, porque nunca a través de escritos y peticiones pacíficas hemos logrado nada".

Con la caída del edificio Nuevo León, las autoridades de FONHAPO, AISA, SEDUE evidenciaban su negligencia e irresponsabilidad al no atender las demandas de los residentes respecto al mantenimiento y cimentación del edificio, demanda que por otra parte fueron motivo de que ya existiera una organización fuerte y con experiencia en la negociación.

Así, las organizaciones tlatelolcas -previas a los sismos representaban una amenaza seria para el Estado, ya que cuestionaban la actuación de éste con pruebas palpables, teniendo muy claro que las pretensiones del Estado, eran precisamente las de dividir a las organizaciones.

Uno de los mecanismos que trató de implementar el Estado para desmembrar la organización de damnificados de la unidad fue declarar que del total de los edificios (31%) serían derrumbados y sólo 59 de los 102 edificios podían ser habitados. De esta manera creaban entre los residentes el pánico, incluso a principios de octubre de 1985 la SEDUE -directamente, Carrillo Arena- declaró que: "sólo hay una sopa, o se salen de los edificios y compran una casa de oferta o, se quedan sin nada" (así lo denunciaron grupos residentes de la unidad ante diputados miembros de la Comisión Especial Pluripartidistas).

IV. Segunda etapa: DOTACION DE VIVIENDA

FONHAPO llegó al programa de dotación de vivienda, terminando el programa de emergencia. Se levantó una cédula para dar seguridad a la gente y para iniciar el nuevo programa, ante lo cual los vecinos respondieron bien -según las autoridades-. SEDUE y FONHAPO armaron conjuntamente el programa: SEDUE requisó a AISA y desplazó a FONHAPO, quedando éste como apoyo a SEDUE, desde ese momento se inició el programa de vivienda que se llamó "oferta de vivienda" y tuvo mucha acogida, ya que se les dieron facilidades para la adquisición de vivienda a los inquilinos por el sólo hecho de ser damni-

ficados (factor central para que funcionara este programa), los propietarios que no habitaban el inmueble -y que valúan sus departamentos hasta en 8 ó 15 millones de pesos de acuerdo con la cantidad de metros cuadrados- resultaron ser los más afectados ya que, al momento del sismo, con lo único que contaban era con un seguro que no contemplaba el valor total del departamento, sino únicamente una prima; por tanto, a lo único que tenían derecho de manera inmediata era al pago de la prima del seguro, muy por debajo del valor real del departamento.

En cambio, los propietarios residentes tenían derecho no sólo al pago de la prima del seguro, sino además a la oferta de vivienda, así lograban equilibrarse un poco entre lo que perdían y lo que podían obtener por el lado del programa. El programa se difundió de manera muy ágil, y tanto inquilinos como propietarios residentes rápido se inscribieron en él.

De acuerdo al punto de vista de un funcionario de FONHAPO: "en el caso de Tlatelolco fue uno de los programas que no ubicó de manera rápida la Coordinadora de Damnificados de Tlatelolco, por eso se aisló, lo último que movilizaba era a la gente de los edificios pequeños pero en menor medida. La Coordinadora no tuvo la posibilidad de jugar un papel determinante. Por el lado que pudo haber movilizado era con los damnificados del Nuevo León, pero ellos ya contaban con una experiencia de negociación y lo hicieron por separado. En un plazo de dos semanas, la mayoría de los damnificados de Tlatelolco ya se habían registrado en el padrón y en trámite para la oferta de vivienda.

"El trámite fue bastante rápido. lo cual fue posible porque la SEDUE adquirió unas 5 mil viviendas de INFONAVIT y FOVISSSTE ubicadas básicamente en el área metropolitana de la ciudad de México".

"En enero se habían entregado entre 4 y 5 mil viviendas (también se contrató de FOVI). El problema básico fue entre: propietarios e inquilinos. Ya que sólo se aceptaron las solicitudes de quien vivía en ese momento en el departamento, para lo que se pidió a la Asociación de Residentes o del edificio que firmaran atestiguando quien vivía ahí, pero en ocasiones firmaban hasta 2 o tres cartas de un mismo departamento, y se tuvo que ir eliminando la medida".

"A toda la gente se le pagó la prima del seguro, quien no aceptó programa de vivienda y si era propietaria no recibía más que esta prima. El porcentaje de habitantes que no aceptó el programa de vivienda fue mínimo. fue un programa de vivienda que tuvo éxito, porque fue un programa ágil, sin trabas burocráticas, se aplicó de manera rápida".

"La Coordinadora no fue capaz de ponerse al frente en la segunda etapa para la negociación".

El 24 de noviembre de 1985 Carrillo Arena informó con relación al Programa Emergente de Vivienda que de los 27 edificios dañados (3 mil 812 departamentos) se habían firmado convenios globales en 15 edificios y a nivel individual para el pago de seguros y compensaciones, más otras soluciones de vivienda: 3 mil 120 casos, lo que equivalía al 82% del universo.

De acuerdo a declaraciones oficiales para diciembre de 1985 -en menos de tres meses- a la mayoría de damnificados del edificio Nuevo León se les había dotado de vivienda. Los habitantes de Cuartos de Azotea fueron atendidos más tarde por RHP.

Aunque el Estado dio una respuesta rápida a los tlatelolcas ésta quedaba muy lejos de satisfacer las necesidades de la población afectada, como lo demuestran las siguientes declaraciones.

- La Coordinadora de Residentes de Tlatelolco declaró: "no hemos recibido soluciones justas; aproximadamente mil 750 familias no han firmado convenio alguno; el Arquitecto Carrillo Arena desarrolló campañas que transgieren la realidad; la SEDUE además, presiona para que los residentes renuncien a los derechos de los Certificados de Participación Inmobiliaria". La Coordinadora afirmó lo anterior en carta dirigida a Miguel de la Madrid, en la que anunció además la realización de una marcha junto con la CUD hacia los Pinos".

- El Frente de Residentes de Tlatelolco -por su parte- señaló (el día que vencía el primer plazo fijado por SEDUE para resolver el problema de los damnificados de Tlatelolco) que aún había mil 500 residentes que no habían firmado convenio para pago de indemnizaciones.

- La Asociación de Residentes del edificio Chihuahua, a su vez desconoció el convenio firmado entre SEDUE y supuestos habitantes del edificio. Acusaron al Subsecretario de Vivienda, Gabino Fraga, y a las personas que firmaron, de incurrir en violaciones a los ordenamientos legales que los rigen y, provocar divisiones y enfrentamientos entre los vecinos.

- Cuauhtémoc Abarca, dirigente de los Tlatelolcas, informó que "ante la angustia de no tener donde vivir, algunas familias de esta zona han empezado a ocupar sus viviendas, pese a que han sido declarados inhabitables. Los edificios ocupados son Miguel Hidalgo, Zacatecas y, parcialmente, el 2 de Abril, 15 de Septiembre, Niños Héroes, Molino del Rey. Expresó que de 25 casos de problemas de vivienda, sólo los inquilinos de 8 edificios han llegado a acuerdos con SEDUE, esto porque existe presión de ese organismo".

- De acuerdo con declaraciones de un residente de la Unidad, SEDUE, al mismo tiempo que indemnizaba a los damnificados, creaba un clima de inseguridad argumentando que las condiciones de Tlatelolco eran malas, que estaba asentado sobre un subsuelo que no era firme y, por lo tanto, que en cualquier momento los edificios podían caerse. Hay pánico a raíz de la propaganda enorme por parte de las oficinas de AISA, incluso a través de folletos donde le dicen a los residentes "hay que vender, hay que vender".

Los propios miembros de las organizaciones vecinales calificaban esto como un plan desestabilizador de la comunidad porque lo que SEDUE quería era que toda la gente saliera y así, desmembrar el movimiento de damnificados.

- La Asociación de Residentes del edificio Miguel Lerdo de Tejada denunció por ejemplo que con presiones y hostigamientos la SEDUE trataba de obligarlos a vender el edificio al gobierno.

- El Frente de Residentes de Tlatelolco señaló que no había ninguna respuesta concreta a los planteamientos de los damnificados de Tlatelolco, además reiteraba las denuncias de que SEDUE estaba presionando a los residentes a vender sus departamentos, a aceptar la prima de seguro y, por lo tanto, a abandonar la unidad.

El malestar también obedecía a la inconformidad por los peritajes que sobre la situación de los edificios había hecho SEDUE. Los residentes consideraban que los dictámenes de SEDUE eran poco confiables pues, se guiaban más por motivos políticos que por un verdadero intento de solucionar el problema de vivienda de los damnificados de Tlatelolco. Por su parte, SEDUE declaró que después de los sismos se hizo un estudio en dos niveles o etapas:

1. Determinación técnica. Consistió en hacer un reconocimiento apenas superficial para valorar el daño causado a los edificios y poder decidir cuáles podían ser habitados y cuales no.
2. Dictamen técnico. Consistió en un estudio más formal a nivel estructural y de mecánica de suelos.

Un claro ejemplo de la desconfianza hacia los peritajes de SEDUE lo encontramos en una nota publicada el 8 de noviembre de 1985, en la que la Asamblea General de Residentes del edificio Presidente Juárez expresaba:

"Nosotros, como la mayoría de Tlatelolcas, reclamamos la vigencia de nuestros derechos adquiridos como contratantes en fideicomiso de la unidad Adolfo López Mateos. No pedimos dádivas, sólo justicia diligente. Demandamos y promovemos por nuestra parte, peritajes confiables, serios y seguros para contrastarlos con los oficiales. Participamos que si la SEDUE se declara incapaz de hacer cumplir a BANOBRAS su obligación como fiduciaria (de reparar o reconstruir vivienda), apelaremos a las instancias judiciales que nos amparan constitucionalmente para que sea obligada. En el caso que dichos estudios demuestren la necesidad de la demolición de las contrucciones y nosotros lo aceptáramos, los pagos (por seguro, por reposición e indemnización del fondo de contingencias de FONHAPO y otros), deben ser equiparables al monto promedio por departamento o local comercial de 7 millones y medio de pesos"

Por lo dicho hasta aquí, podemos señalar que las etapas de emergencia y dotación de vivienda, durante las cuales Carrillo Arena estaba al frente de SEDUE, fueron bastante conflictivas. El Estado carecía de total credibilidad y legitimidad frente a los residentes de la unidad. Era urgente entonces dar un viraje a la política seguida hasta el momento y abrir entre la población expectativas de que "ahora sí" se iba a trabajar, diluyendo por otra parte el conflicto del edificio Nuevo León (sobre el cual, a 2 años del siniestro no se ha hecho el deslinde de responsabilidades -con todo lo que ello implica- y en lo que Carrillo Arena está directamente involucrado).

Respecto a la respuesta de SEDUE a la movilización popular, un integrante de la CCAT comentó: "la SEDUE abre días después del sismo la bolsa de vivienda para aquellos que tenían prestaciones como INFONAVIT o FOVISSSTE. Y cuando nosotros vamos para que nos censaran, nos dicen que no, porque ellos tenían entendido que nadie vivía en las azoteas y en los estacionamientos. Tuvimos que tomar las oficinas de AISA. Hablamos con el gerente Camarena, para que se nos reconociera como habitantes de cuartos de azotea, y ahí mismo nos censaron. La Coordinadora dio las cartas de vecindad (testimonios de vecindad), eso fue un gran logro, y permitió una mayor consolidación de nuestra organización".

"Ya una vez que nos censaron nos empiezan a llamar, diciéndonos que si tendríamos viviendas pero en Huehuetoca, en Tórtolas, en zonas completamente retiradas de Tlatelolco. En aquel entonces costaba 200 pesos trasladarse Tórtolas, y eran viviendas que no tenían ningún tipo de servicio. No lo aceptamos".

"Seguimos luchando, hay nuevas proposiciones: -te ofrecemos trabajo, te ofrecemos dinero para que seas de nuestra gente. Inmediatamente lo rechazamos, nos indignamos. Entonces por asamblea decidimos incorporarnos al Programa de Renovación Habitacional Popular. En esos días se formó la Coordinadora Unica de Damnificados, a la cual nos integramos".

"Después de movilizaciones y peregrinaciones, a través de una reunión con la Coordinadora Unica de Damnificados se acuerda por la junta de gobierno y por el Secretario de Gobernación incluirnos al programa de Renovación Habitacional

Popular. Abrimos censo para todos los compañeros que ingresarían. Con la salida de Parcero, todos los trámites tuvieron que repetirse, a Aguilera se le entregó un censo de 2 compañeros, y podría decirse que se reinicia la lucha".

"Mientras tanto el delegado de la Cuauhtémoc, el Lic. Jackson, y la subdelegada Nava nos decían que nos iban a dar vivienda por FIVIDESU, pero fue más bien propagandístico, porque hasta la fecha no sabemos nada de avances en ese ofrecimiento, además, la decisión fue de irnos a Renovación Habitacional Popular. y no caer en ese tipo de maniobras de delegación".

V. Tercera etapa: RECONSTRUCCION DE LA UNIDAD HABITACIONAL NONOALCO-TLATELOLCO

El 17 de febrero de 1986 se anunció el cambio de responsable de SEDUE, Carrillo Arena fue sustituido por Camacho Solís con lo cual se abrieron nuevas expectativas tanto para los damnificados como para el propio gobierno, ya que al calmar el descontento se retomaba el control político sobre la situación, al grado de que Parcero López -Director de Renovación Habitacional Popular- aseguró que en abril del mismo año empezaría "en serio" la construcción de viviendas.

El 12 de marzo se anunció con bombos y platillos el Programa de Reconstrucción Democrática de la Unidad Adolfo López Mateos Nonoalco-Tlatelolco (PRENT).

El Programa de Reconstrucción de la unidad sería puesto en marcha a más tardar en una semana y tendría un costo aproximado de 38 mil 103.5 millones de pesos a precios de febrero de 1986, según anunció el Secretario de SEDUE. De los 10 edificios de la unidad únicamente 11 serían demolidos en su totalidad, 18 reducidos de 14 a 7 pisos y los restantes reparados en sus acabados e instalaciones, todo sin costo alguno para los residentes.

Se destinaría el 88% de los recursos a reparaciones, el 5% a demoliciones, el 5.25% a acabados y el 4.75% a accesos por obras. Los gastos se cubrirían en un 75% con financiamiento de recursos fiscales y el 25% restante, a través de las aseguradoras de inmuebles.(3)

Para instrumentar el Programa de Reconstrucción en Tlatelolco se creó a mediados de mayo el Programa y Comisión de Reconstrucción de la Unidad Adolfo López Mateos. El diagnóstico definitivo sobre el cual se definieron las acciones a seguir fue el siguiente:

CUADRO II

| DIAGNOSTICO (SUBPROGRAMA A REALIZAR) | TIPO DE EDIFICIO | NO. DE EDIFICIOS |
|--|---------------------|---------------------|
| 60 edificios con daños menores: (subprograma reparación de acabados) | A | 11 |
| | A1 | 2 |
| | A2 | 13 |
| | A3 | 8 |
| | Bc | 1 |
| | Bn | 5 |
| | Bo | 2 |
| | Bp | 4 |
| SUBTOTAL | | 46 |
| 32 edificios con daños en estructura y cimentación: (subprograma de recimentación y reestructuración) | C | 9 |
| | I | 5 |
| | K | 4 |
| | L | 5 |
| | M | 5 |
| | N | 4 |
| SUBTOTAL | | 32 |
| 8 edificios irreparables (de 32 pasaron a 27, de 27 a 11 y de 11 a 8) (subprograma de demolición) | I | 4* |
| | C | 1** |
| | K | 2*** |
| | N | 1**** |
| SUBTOTAL | | 8 |
| TOTAL | | 100 |

* 2 explosivos, 1 mecánica, 1 convencional

explosivos * explosivos **** convencional

Cabe destacar que en este programa (PRENT) se hablaba de 96 edificios (10, mil 222 departamentos); 14 más están a cargo del FOVISSSTE (mil 342 departamentos) y 2 edificios que tienen daños estructurales (164 departamentos) no queda claro quién y cómo se van a reparar -Suites Tecpan-. La información sobre el total de edificios y departamentos es confusa tanto en las declaraciones de los funcionarios como en documentos oficiales. Podemos calcular aproximadamente que de 1. mil 906 departamentos, con las demoliciones -quedarán una vez concluidas las obras- 10 mil 560 departamentos, ya que además de la demolición de 8 edificios (730 departamentos) se planteó en el subprograma de recimentación y reestructuración reducir de 14 a 10 pisos 4 edificios (todos tipo K) y de 14 a 7 pisos 5 edificios más (todos tipo L).

De acuerdo con Sergio González Karg, vocal ejecutivo del Programa de Reconstrucción de Tlatelolco, para la realización de los trabajos de reconstrucción se requirió cancelar, modificar, desviar y recoger, las redes de distribución de agua potable, gas, electricidad, alumbrado público, teléfono y drenaje, programando las acciones de las siguiente forma*:

CUADRO III

| Acción | Duración |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Reparación de acabados | 12 meses terminará el 28/04/87 |
| Recimentación y reestructuración | 15 meses |
| Demolición | 2 y 4 meses. |

*FUENTE: Cristhus. Balance a un año del terremoto. No 597-598. Año LI, Agosto-Septiembre 1986, pag. 58.

En este proyecto de reparación de acabados intervendrán las siguientes constructoras y supervisoras:

CUADRO IV

| CONSTRUCTORAS | SUPERVISORAS |
|---------------------------|--|
| XITLALI, S.A. | ETCON |
| UNCYD, S.A. | ETCON |
| ARLO, S.A. | ETCON |
| MARABU, S.A. | ETCON |
| CODICO, S.A. | SUPERVISA |
| LAS TORRES, S.A. | DUAL INGENIERIA |
| GAM. CONSTRUCCIONES, S.A. | IMMASA |
| TRES ESTRELLAS, S.A. | IMMASA, LA MACUSPANA Y OCHOA Y ASOCIADOS |
| CAFARO, S.A. | LA MACUSPANA |
| EXACTA, S.A. | ETCON |

El subprograma de recimentación y reconstrucción inter-
venen:

CUADRO V

| CONSTRUCTORAS | SUPERVISORAS |
|----------------------|---------------|
| URBEC, S.A. | GRUPO EXODO |
| PYC, S.A. | ETCON |
| GYEM, S.A. | SUPERVISA |
| DISA. | SUPERVISA |
| S.G. CONSTRUCCIONES | SUPERVISA |
| SADA RANGEL. | DUAL |
| GUTSA CONSTRUCCIONES | DUAL |
| LAS TORRES, S.A. | IMMASA |
| PYASA. | IPESA |
| ECSA. | RUAL |
| COPRE, S.A. | RUAL |
| INCONSA. | OCHOA Y ADOS. |
| LOS REMEDIOS. | IMMASA |
| LAS HUERTAS. | TOPSA |
| CIGSA. | DISESA |

Las demoliciones se contrató a: DIASA, LAS TORRES, S.A.,
WENESA, y supervisó RIOBOO.

Sobre el Programa de Reconstrucción, el representante de la Coordinadora de Residentes de Tlatelolco nos dice que:

"...Se destinaron 38 mil 105 millones de pesos a la reconstrucción de Tlatelolco. Pero se nos dice también que se van a derribar 11 edificios en virtud de que varios de ellos estaban seriamente dañados".

"Con excepción de los restos del Nuevo León creemos que los otros edificios no era menester que se derrumbaran, bien por explosión o por el método tradicional, sino que esto se debió a que no había residentes ya en esos edificios, cosa que no sucedió en edificios como el Chihuahua, el Tamaulipas, Presidente Juárez, Miguel Hidalgo, etc. Es decir, aquellos edificios en que un 10% de los residentes resistieron, se pelearon y se ganaron, no los destruyeron, y en los que no había residentes no se pudo hacer nada. Hubo un caso particular, en el edificio 15 de Septiembre una sola señora defendió su edificio, dijo que "no saldría sino muerta", se peleó el edificio y se ganó".

"La oferta de vivienda también fue un engaño, porque no había posibilidades de adquirir vivienda, porque si bien cuando mucho se dieron 2 millones de pesos de indemnización y tres de préstamo para adquirir vivienda, con 5 millones de pesos no se lograba adquirir nada, porque sabemos que cualquier inmueble en el DF cuesta por lo menos 6 millones de pesos. Esta gente se sintió frustrada, y comenzó a regresar y así fue como edificios dañados se empezaron a habitar".

"La necesidad hace eso, "me salí con la esperanza de que el gobierno me ayudara, y me engañó, y no tengo a dónde ir". Al conseguir que se hiciera la reconstrucción de Tlatelolco, también se consiguieron otros beneficios como fue: que aquella persona que quisiera regresar a Tlatelolco pese a haber vendido su departamento, tenía la oportunidad de hacerlo en el lapso de un mes pagar la misma cantidad que había recibido por el departamento y volver a tener los mismos derechos".

"Para la reconstrucción se señalaba que se tenían que desalojar algunos edificios, con lo que no estuvimos de acuerdo, porque sabíamos que lo que querían era dividirnos, y que si

en un momento dado se iba la mayoría de los residentes, Tlatelolco sería un cementerio. Propusimos que se hiciera a la inversa y argumentamos que la gente no quería salir de Tlatelolco, que rehabilitaran áreas en Tlatelolco, en edificios menos dañados para que la gente viviera ahí mientras se reparaban los edificios. Fue otro de los logros, puesto que sí se hizo la rehabilitación de estas áreas".

"Se volvieron a repetir aquellos juegos que se hicieron en un principio, de malos trabajos, y alguien llamó mirajes a los pésimos peritajes que realizaron las autoridades, por lo que solicitamos supervisores para la Coordinadora, de los cuales 10 fueron pagados por SEDUE".

"Las cosas no se dieron en Tlatelolco como se esperaba, muchas de las cláusulas que se firmaron en convenio no se cumplieron, como por ejemplo la ayuda de renta, que trimestralmente se haría una revisión para ir la aumentando, hasta la fecha no se ha hecho una sola revisión (desde junio de 1986); también se señalaba la actuación de nuestros supervisores, que tendrían un papel de vigilancia, no se les da información, no sabemos que sucede en los edificios hasta que ya se realizaron las obras".

"SEDUE contrató constructoras privadas, las cuales no tenían ni la infraestructura, ni el personal necesario. Los trabajadores tuvieron problemas para que se les pagara, esto influyó en el retraso de las obras, y, en los malos trabajos. A partir de mayo de 87 presionamos para que se hicieran cambios, por lo menos para que se retirara la compañía Tres Estrellas, de nuevo hicimos un mitin ante la Voz Ejecutiva de SEDUE con apoyo de la CCAT, y al final logramos que saliera esta compañía. Las nuevas constructoras aún no cuentan con un programa de trabajo".

"Con relación a los espacios de los edificios que se derrumbaron, se hicieron convenios verbales, en los que determinamos que estos espacios se van a ocupar de acuerdo a las necesidades que vayan surgiendo. Se ha pensado en áreas verdes, una biblioteca, un monumento a Plácido Domingo. La Coordinadora recibió un proyecto de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) para hacer un auditorio dedicado a este señor, pero todavía no sabemos qué va a hacerse".

Para concluir con esta parte, Pablo Muñoz señala, SEDUE no está haciendo un gasto con la reconstrucción, está haciendo una inversión, porque los departamentos que se reconstruyan los va a vender al doble o, al triple y hasta más caros".

Los habitantes de Cuartos de Azotea fueron tratados de diferente manera por lo que respecta al programa de reconstrucción, ya que tuvieron que enfrentar diferentes obstáculos, entre ellos la dificultad de encontrar un predio disponible para construir las nuevas viviendas, la carencia de ayuda para renta y para menaje de casa y los reducidos ingresos de las familias que los marginaban de distintos programas.

Sobre este punto vale la pena hacer mención a una nota publicada en el periódico *Excélsior* el 16 de enero de 1986, donde se señala que en un estudio socioeconómico se constata que de las 250 familias que perdieron sus viviendas en los cuartos de azotea, el 63% de los damnificados tienen ingresos inferiores al salario mínimo, pero son menos de 82 mil pesos, y sólo el 10% son derechohabientes del ISSSTE o INFONAVIT. De estas 250 familias sólo 33 realizaron trámites para adquirir pies de casa en Alborada Aragón, Estado de México.

En cuanto a la etapa de reconstrucción la experiencia de los habitantes de cuartos de azoteas es la siguiente:

"Después de buen tiempo de estar instalados en el campamento Santiago, las autoridades de SEDUE nos mandan a un predio ubicado en Ricardo Flores Magón 499. Nosotros aferrados a que -nosotros no nos vamos hasta que nos entreguen nuestros certificados de Derecho porque ya fue acuerdo de la Junta de Gobierno y no nos moverán de aquí. Pero, qué es lo que pasa, también pierdes visión, porque cuando estábamos viendo que el predio que nos estaban ofreciendo estaba expropiado y todavía así decíamos -no nos vamos. Recapacitamos y dijimos -compañeros creemos que estamos actuando mal, ese predio está expropiado, y los predios expropiados son para los damnificados, nosotros somos damnificados, y estamos en Renova-

ción Habitacional Popular, entonces ¿qué nos conviene más tener las posesión de ese predio, o quedarnos en el Jardín Santiago por unos Certificados que a lo mejor no nos van a dar?. Acordamos irnos al predio y una vez asentados ahí afirmamos -este es nuestro predio y aquí es donde queremos nuestras viviendas. Nos costó mucho trabajo. Una vez ya incorporados a Renovación Habitacional Popular, en una reunión con el Delegado Jackson, le expusimos que ahí es donde queríamos vivienda para Cuartos de Azotea, él afirmó que ese terreno ya estaba destinado a áreas verdes o canchas deportivas".

- ¿Cómo es posible, señor delegado, que en lugar de satisfacer la necesidad de vivienda esté pensando en las canchitas estas?

"También le expusimos que en ese terreno queríamos poner un tianguis bazar y se llamarían Tianguis 19 de Septiembre a lo que respondió que no daría el permiso para el tianguis, pero que conseguiría empleo para todos los compañeros de cuartos de azotea, -un trabajo digno, un trabajo permanente, para que ustedes puedan pagar las viviendas".

"Porque en el caso de cuartos de azotea, la mayoría de compañeros son subempleados, empleadas domésticas, lavadores de coches. Cómo pagar las viviendas. Hasta ahora no nos ha cumplido (qué raro). pero es un problema que tenemos que resolver".

"Nosotros seguimos luchando, pedíamos además un predio ubicado en la calle de Sabino, pero las autoridades no nos dieron ninguna respuesta; al ver que en Sabino estaban construyendo las viviendas y que no eran para nosotros, invadimos el predio y detuvimos las obras. Nos habla Aguilera: -¿qué paso, que problemas existen?. Total que ahí mismo Aguilera aprueba la construcción de vivienda para Cuartos de Azotea en Ricardo Flores Magón 499".

"Sin ánimo de cebollazos a él, hemos recibido su ayuda y nos ha dado respuestas casi inmediatas. Para esto, también habla intentos de Renovación Habitacional Popular de no dejarnos ese predio, nos habían propuesto 4 ó 6 predios, y no acepta-

mos, sólo queríamos dos. Nos querían redensificar en viviendas disponibles en diferentes colonias, con el objetivo de pulverizar la organización".

"Siempre se nos ha dado trato de segunda clase, porque cuando pasó lo del Nuevo León a todos los que vivían en departamentos les daban 4 mil pesos diarios como ayuda de renta y, a los compañeros de azotea no les dieron absolutamente nada. También en cuestión de menaje, a los residentes les dieron 6 mil pesos, y cuando se les pidió que también a los compañeros de cuartos se les diera este pago, de una manera sarcástica dijeron: -pero ¿qué podían tener una parrillita, a poco podían tener televisión a color?. Una forma burlona e insultante".

"Qué es lo que pasa en Renovación Habitacional Popular, las 210 viviendas son insuficientes. Aguilera nos dice: -Esperen va a haber un programa más acorde con los recursos de ustedes; ante lo cual pedimos ampliación del censo. Acordamos esperar ya que se han dado buenas negociaciones con él, pero cuando salen viviendas en el Arenal se fueron 100 familias, y están por irse 100 familias a Iztacalco, fue una buena negociación. Pero lo que vemos del gobierno es una estrategia de ir sacando a la gente pobre a la periferia, lo vimos a raíz del sismo. Y eso es lo que va a suceder con Tlatelolco, están sacando a la gente pobre para volver a valorizar los departamentos. Toda la gente se asustó, vendieron a precios bajos y se fueron a la periferia, y si bien las organizaciones lograron la reconstrucción, finalmente, esos edificios son de SEDUE, y esta secretaria está componiendo sus edificios, que al final de cuentas los va a vender mucho más caros".

A dos años de los sismos, y habiéndose cumplido el plazo fijado por las propias autoridades para concluir las obras de reconstrucción de la unidad, la información sigue siendo igual o más contradictoria que antes, ya que día con día se anuncian avances en la reconstrucción, y al igual día con día son publicadas las denuncias que hacen los tlatelolcas respecto a los retrasos en las obras.

Continuamente podemos leer en los periódicos que existen avances de más del 90% en la reconstrucción. El primero de septiembre de 1987 Sergio González Karg aseguró que:

La reparación de acabados que se realiza en 46 inmuebles de la Unidad Habitacional Adolfo López Mateos Nonoalco-Tlatelolco, registra un avance del 98.7 por ciento, debido a que de 4 mil 435 departamentos por reparar se han terminado 4 mil 376, restando tan solo 59 viviendas que se concluirán en poco tiempo. (lo cual lleva un retraso de más de 5 meses de acuerdo a lo programado).

Sin embargo, en lo que se refiere al subprograma de recimentación y restructuración existe muy poca información, y la que existe es bastante confusa, en marzo de 87, aproximadamente, se anunció que se habían concluido los trabajos en el edificio 2 de Abril y 15 de Septiembre -reducidos de 14 a 7 pisos-, pero basto con visitar la zona para darnos cuenta que hasta hoy aún no concluyen dichos trabajos.

Existen edificios a los que simplemente no se les ha hecho nada, como es el caso de las suites Tecpan, y otros en los que el retraso es bastante considerable. A esto debemos añadirle los malos trabajos que se están llevando a cabo.

En el Tlatelolca (No 36), órgano informativo de la Coordinadora de Residentes, correspondiente a la semana del 11 al 17 de septiembre de 1987, se señala que se considera de gran importancia centrar la lucha alrededor de 3 asuntos fundamentales:

- a) Reconstrucción.
- b) Solicitantes de vivienda.
- c) Problemas en edificios del ISSSTE.

El primer punto se refiere al serio retraso de las obras y los malos trabajos que están haciendo las constructoras, lo cual se traduce en un alza considerable de los costos (ya que en ocasiones han tenido que repetir las operaciones por su mala calidad) y al mismo tiempo en el retraso de los avances de las obras.

Por otra parte se ha abierto la bolsa de vivienda, es decir, los departamentos reparados podrán ser adquiridos por particulares, teniendo prioridad -supuestamente- los damnificados o anteriores propietarios de los departamentos.

Los residentes demandan que se elabore un programa especial que permita que se les venda en condiciones de interés social y con prioridad en dicha bolsa de vivienda, la que alcanza poco más de 2 mil 700 departamentos.

Por lo que respecta a los edificios del ISSSTE, el principal problema es que estos edificios eran arrendados a los residentes, y ahora, con la reconstrucción, SEDUE pretende venderles los departamentos bajo el régimen de condominio, incluso aquellos edificios que no fueron reparados.

Otro aspecto que aún está en negociaciones son las condiciones del Seguro contra Daños. SEDUE y FONHAPO a principios de 87 en boletín informativo señalaba que estarían en vigor nuevos costos de las primas a pagar por los adquirientes, -cuotas que aún hoy a pesar de todas las demandas siguen siendo administradas por AISA- primas que cubren el seguro solamente de este año.

En este boletín se hace mención a que los costos son el resultado de las negociaciones entre SEDUE, La Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, FONHAPO y las mesas directivas de los edificios de la Unidad, habiéndose logrado que Aseguradora Mexicana otorgará un descuento del 46.5% en el seguro contratado, de 643 millones 761 mil pesos se redujo el costo a 299 millones 632 mil 7822 pesos.

La cobertura asegurada implica: incendio, explosión, huracán, granizo, terremoto y erupción volcánica.

Los costos varían de acuerdo a cada tipo de edificio y el número de recámaras de cada departamento. Así, los costos van de mil 500 pesos por un departamento de una recámara de un edificio tipo A, hasta 21 mil pesos por un "Pent House" de un edificio tipo N.

SA dio a conocer una lista de dichos costos, en ella aparecen asegurados un total de 56 edificios. Probablemente en los restantes 36 no se ha llegado a acuerdo alguno con los residentes o bien que a SEDUE y al resto de las autoridades se les olvido que existen estos 36 edificios, de los cuales 36 son del ISSSTE. Así tenemos que:

CUADRO VI

| TIPO DE EDIFICIOS | ASEGURADOS | NO ASEGURADOS | EDIFICIOS DEL ISSSTE |
|-------------------|------------|---------------|----------------------|
| A | 10 | 7 | 6 |
| A1 | 2 | - | - |
| A2 | 13 | - | - |
| A3 | 8 | 4 | 4 |
| Bc | 1 | - | 3 |
| Bn | 5 | 3 | 3 |
| Bo | 2 | - | - |
| Bp | 4 | 1 | 1 |
| C | 4 | 9 | 2 |
| I | 4 | 1 | - |
| K | - | 4 | - |
| L | - | 5 | - |
| M | 4 | 1 | - |
| N | 3 | 1 | - |
| O T A L | 56 | 36* | 16 |

Tomando en cuenta que 8 edificios fueron derruidos.

de da importancia en este artículo al pago de seguros por lo que pueda implicar a futuro ya que el ínfimo pago que se dio a los damnificados se justificó a partir del hecho de que los edificios no estaban asegurados de forma actualizada.

esperamos que en caso necesario no se vuelva a repetir la misma historia.

VI. Hacia adelante qué...

Tanto la Coordinadora de Residentes como la Coordinadora de Cuartos de Azotea han obtenido varios logros. La lucha de ambos y sus objetivos hacia adelante son:

Coordinadora de Residentes de Tlatelolco

-¿Qué es lo que esperamos de Tlatelolco?: continuar con la reconstrucción con la participación de los residentes; junto con la reconstrucción vamos a algo más grande, "la reconstrucción social de Tlatelolco", que no está dada nada más por los edificios sino por su gente.

"El PRI se ha querido inmiscuir de muchas formas: quiso dividirnos propagando rumores, atribuyéndose logros de las Coordinadoras, pero, afortunadamente en Tlatelolco no se va a dar lo que en otros sitios: que un líder se venda".

"A futuro la Coordinadora tiene muchas perspectivas que se van a reflejar en las próximas elecciones, debe darse un candidato de Tlatelolco. Hemos pensado en retomar todas las áreas y espacios físicos de Tlatelolco como es el caso de los deportivos que son manejados unos por el Seguro Social, otros por el Congreso del Trabajo y el otro por la Subdelegación. En el ámbito político pese a que como organización no pertenecemos a ningún partido hay miembros que si militan en alguna organización política, no dudamos que de ellos salga algún candidato para diputado, lucharíamos por él, en busca de un cambio radical de Tlatelolco, y sólo alguien que conozca los problemas de la Unidad, que viva en ella podrá dar soluciones concretas. Nuestra organización no es temporal, sino la vamos a hacer permanente.

"En términos cuantitativos la organización ha decrecido, para empezar porque mucha gente tuvo que salir, pero va a regresar. El crecimiento ha sido en términos cualitativos, la gente que hay esta unida con una convicción: hemos ganado y vamos a seguir ganando".

Coordinadora de Cuartos de Azotea de Tlatelolco

"La lucha de la CCAT se propone como objetivo permanecer en la zona centro, para esto estamos proponiendo una reconversión de los estacionamientos X y Z, de cuartos convertirlos en departamentos, cada estacionamiento tiene 144 cuartos y cabrían 36 viviendas. Se lo presentamos al Lic. Camacho Solís, y tenemos tres meses tratando de obtener una audiencia con él, pero no se nos ha dado. Los argumentos de las autoridades para no hacerlo es que no se pueden hacer esas modificaciones en los estacionamientos porque implicaría más peso; sin embargo, nosotros lo que presentamos es que los muros de carga sean sustituidos por tablarroca, y en el momento que sólo serían 35 familias, sería menor peso en contrato con 144 familias que había antes".

"Si SEDUE no nos apoya en este proyecto existe la posibilidad de que nos apoye la Iglesia de los Angeles, la cual nos puede ayudar a conseguir el financiamiento".

"La lucha principal en este momento es la reconversión de los estacionamientos, y como lucha permanente es, la defensa de los barrios, del vendedor ambulante, del inquilino, en síntesis la permanencia de las organizaciones populares, que estas organizaciones no sean coptadas por el PRI".

"Este es el compromiso que tenemos: que la organización no desaparezca a raíz de que los compañeros tengan su vivienda sino que se continúe la lucha, la solidaridad y -sobre todo- que esa organización sea independiente de los partidos políticos y grupos religiosos".

"Lo que también vemos, es que existen planes por parte del Estado de pulverizar estas organizaciones, es pues, lo que tenemos que enfrentar. Por ejemplo en el caso de Renovación Habitacional Popular, está tratando de implementar formas de organización por edificios, como en los 16 edificios donde vamos a estar van a ser 166 mesas directivas (una por cada edificio), les funcionó en el caso de Tlatelolco, cuando se autoadministran los edificios, se impide que se cree una organización fuerte. Eso es lo que ellos pretenden: que cada edificio se limite a los problemas de su edificio, y que se

peleen con el otro edificio. Tratamos de ver de que forma podemos romper con esta forma de organización que nos quiere imponer RHP".

"Ya no nos vamos a llamar Cuartos de Azotea de Tlatelolco sino Cuarta Sección de Tlatelolco Popular. Decimos que si bien nos alejamos una cuadritas de Tlatelolco nos alejamos para formar la Cuarta Sección, los edificios van a llevar el nombre de los edificios que se desplomaron con los sismos, nombre de los luchadores como Cuitlahuac, de fechas como la del 2 de octubre, en fin, fechas y nombre importantes y significativos de la lucha".

"La CCAT sin embargo, tiene que seguir funcionando como tal al interior de Tlatelolco, ya que todavía no se termina el problema, existen azoteas pobladas. Creemos que si no se da soluciones como la reconversión de los estacionamientos X y Z el problema es cíclico y en unos cuantos años se volverán a poblar estos cuartos. Creemos que la defensa de las azoteas es muy válida, porque resguardan al proletariado, es un cuarto que te satisface aunque sea mínimamente. Vemos que la lucha va a continuar como CCAT aclarando que la lucha no es vivir en un cuarto de azotea sino que hay que defender a los compañeros que aún viven hoy contra los lanzamientos hasta que no tengan una vivienda digna, el compromiso es seguir continuando la lucha y seguir en la línea del proletariado".

"Queremos demostrarles a las autoridades que los tlatelolcas podemos resolver nuestros problemas, pero agrupados en una organización y esto es lo que tenemos que preparar, y no solos sino con organizaciones de apoyo como ustedes, Casa y Ciudad, para romper con los esquemas que pretende imponer el gobierno a través de RHP con la finalidad de desarticular a las organizaciones independientes".

NOTAS

- (1) LA TRINCHERA TLATELOLCA, Tribuna Habitacional, s/f, pag. 18-19.
- (2) UNO MAS UNO 23 de junio de 1982, pag. 26.
- (3) Jornada 12, marzo 86, pag. 11.

PORTE II

OTROS ASPECTOS DE LA RECONSTRUCCION

GRADOS DE INTERVENCION TECNICA DE LA DIRECCION DE MONUMENTOS HISTORICOS EN EL CENTRO HISTORICO DESPUES DE LOS SISMOS

SARA MILDRED VAZQUEZ
Delegación D-III-24 INAH

I. Desarrollo de los acontecimientos

La situación del Centro Histórico antes de los sismos del mes de septiembre de 1985 era el resultado del descuido y el hacinamiento que a través del tiempo originaron cambios del uso del suelo en una zona que por las características de los edificios y la ordenada distribución de su traza fue considerada en un momento como ejemplar. Conforme el Centro Histórico fue creciendo se fue deshumanizando un área que estaba compuesta esencialmente por habitación con los servicios necesarios para ello de acuerdo a la escala que en un principio se tenía.

En los albores de este siglo el crecimiento poblacional en la Ciudad de México fue indiscriminado, sin existir un control de tipo urbanístico para su desarrollo. El Centro Histórico no pudo permanecer aislado a esta influencia; el resto de la ciudad fue creciendo y los pequeños pueblos aledaños se conurbaron poco a poco hasta llegar a ser la gran mancha urbana que ahora conocemos. Aparecieron nuevas colonias, aumentó enormemente el impuesto predial y también nuevas legislaciones, de las cuales tal vez la que influyó más en el deterioro del Centro Histórico fue la referente a las rentas congeladas; al favorecerse la permanencia de rentas bajas dentro de inmuebles a los que conforme pasaba el tiempo se les iba incrementando el impuesto predial, resultó cada día más difícil para los propietarios cubrir esa carga fiscal, pretextando que debido a eso no tienen recursos suficientes para mantener y restaurar los edificios, por lo cual quedaron estas actividades en manos de los arrendatarios haciéndose las reparaciones de cualquier manera, sin un estudio previo por parte de especialistas.

El crecimiento de la población fue provocando también el cambio de uso de los inmuebles antiguos así como la demolición de muchos de ellos, substituyéndolos por edificios modernos de mayor peso y volumen así como con un trabajo estructural diferente, lo cual modifica en determinado momento el comportamiento del subsuelo y de los edificios colindantes a ellos.

En el momento del temblor había muchos edificios antiguos que ya estaban resentidos por sismos anteriores, por abandono y por falta de mantenimiento, no obstante, debido a su conformación y características estructurales tales como pesadas y bajas proporciones así como cubiertas y muros de materiales flexibles, pudieron mantenerse en pie a través del tiempo. Algunos resultaron dañados por edificios colindantes que siendo de diferente proporción y estructura, al presentarse el movimiento sísmico actuaba en forma distinta; al alterarse la forma de la manzana al desaparecer las áreas verdes del corazón de la misma, así como la aparición de la pavimentación asfáltica que no permite la rehidratación del suelo, se suscitaron modificaciones tanto en el trabajo estructural de los edificios como en el trabajo del subsuelo; no olvidemos además, las continuas extracción de agua originada por la construcción de nuevos edificios.

A partir de los sismos se iniciaron una serie de actividades por parte de la Dirección de Monumentos Históricos en lo referente a la realización de dictámenes de cada uno de los inmuebles dañados indicando grados de deterioro y tiempo de intervención inmediata así como la posibilidad de desalojo de inmuebles. Primeramente se hicieron estudios generales para dar solución inmediata al problema de seguridad de la población sin poder dar solución a los problemas sociales que se iban ocasionando como el dejar sin habitación a multitud de personas que poblaban la zona, propiciándose en ese momento la especulación de la vivienda.

Se inició un estudio por parte de los trabajadores de la Dirección de Monumentos Históricos con un enfoque tecnocrático, sin que las autoridades permitieran el trabajo interdisciplinario; manteniéndose al margen los problemas, urbanos, antropológicos, arqueológicos e incluso antropométricos, originados por las necesidades que en ese momento tenían los habitantes de ese lugar, independientemente de que

en ningún caso se tuvo la intervención de Salvamentos Arqueológicos, quedando a un lado las actividades cotidianas, las cuales hasta ahora no se han restablecido en su totalidad.

Argumentando que la intervención había de ser inmediata y que el problema tendría que resolverse en seguida debido a la urgencia que la ocasión ameritaba desde el punto de vista humano y político, se procedió a realizar otra serie de dictámenes para discriminar más inmuebles y a quienes en ellos habitan.

En vista de la necesidad de intervención y la falta de personal para realizarla, paralelamente a los trabajos de urgencia, se procedió a realizar la Cartilla de Conservación de los Monumentos en la Zona del Centro Histórico de la Ciudad de México en la cual se enumeran los tipos de deterioro en los monumentos, así como en las actividades para la conservación.

Hasta septiembre de 1986 no había noticias respecto a la difusión de dicha cartilla entre los habitantes de inmuebles históricos deteriorados, como una ayuda técnica que posteriormente fuera complementada con la asesoría institucional del INAH.

Al aparecer los decretos de expropiación de edificios se dieron con la idea de que pudieran reestructurarse y favorecer de ese modo tanto a propietarios como a inquilinos; con esto se originó el proyecto de Renovación Habitacional Popular y a la vez, por parte de la Dirección de Monumentos Históricos, se le concedieron a una serie de constructoras, noventa proyectos de restauración de monumentos, sin permitirse la intervención de los trabajadores de dicha Dirección.

Simultáneamente a este hecho, el Departamento de Obras perdió la participación en los inmuebles en lo referente a la dirección de obras, quedando únicamente la función de asesorarlas. Se creó una Dirección de Obras dependiendo en forma directa de la Dirección General, y solamente con personal de confianza, evitando así la intervención de los trabajadores

de base, quienes con experiencia mínima de diez años creaban "conflicto" en la toma de decisiones en inmuebles históricos y museos.

Se conformaron equipos de asesoría a los damnificados con sede en Moneda 3, pero sólo se abarcaba a quienes estaban dentro del proyecto de Renovación, tratando de orientar a algunos de los habitantes de los inmuebles afectados, abocándose a ello la mitad de los arquitectos del Departamento de Obras y Proyectos (seis personas).

A partir del 29 de enero de 1986 se envían los lineamientos generales para la reglamentación de zona de monumentos de la Ciudad de México, a los cuales habría que sujetarse las obras nuevas en cuanto a alineamientos, volúmenes, formas, altura y sistemas constructivos. Dicha reglamentación es limitada y podría profundizarse más en cuanto a la intervención en los monumentos históricos, la cual no está debidamente protegida ni reglamentada.

Como únicamente se expropiaron noventa monumentos, se logró aumentar trece mas que no se habían considerado, sin embargo, se puede decir que son los únicos a los que se les ha dado atención, dejando a un lado el resto del Centro Histórico, ya que se han demolido innumerables monumentos históricos, entre otros:

Misioneros 10, Héroes 105, Peralvillo 22, Zapata 64 esquina con Margil, San Antonio Tomatlán 90 esquina Ferrocarril de Cintura, Luis Moya 82, Pugibet y Luis Moya, Arandas 71-73, Cinco de Febrero 157, Paraguay 72, Bravo esquina San Antonio Tomatlán, Ferrocarril de Cintura, así como el Templo del Sagrado Corazón ubicado en Héroes y Mosqueta, y parte del ex-convento de Santa María la Redonda.

Tampoco podemos olvidar los monumentos artísticos en las Colonias Morelos y Guerrero, los cuales han sido demolidos indiscriminadamente.

Analicemos ahora los criterios de intervención que por parte de autoridades se han seguido en el Proyecto de Renovación Habitacional:

- * Conservación total de monumentos históricos: 102 inmuebles.

- * Proyectos urbanos de contexto, preponderante: 6 inmuebles.

- * Conservación de la primera crujía: 56 inmuebles.

- * Proyecto especial (se permite la demolición por no ser monumento histórico pero se debe hacer un proyecto de adecuación al contexto): 90 inmuebles.

En total, son 255 inmuebles que se asesoraron y supervisaron.

A finales de 1986 se había iniciado la intervención en 60 de los 102 inmuebles, además de 25 amparados y 8 revocados.

Para esas mismas fechas, se tenían 23 inmuebles históricos considerados fuera de presupuesto por tener obra de importancia.

Sin embargo, no existe una relación exacta de los monumentos que han sido demolidos ni de los que habrán de intervenir. Quienes se abocaron a ello (el personal de la Coordinación de Inspecciones) fueron solamente cuatro arquitectos; ellos atendieron inspecciones y recorridos, además de las suspensiones en todo el Distrito Federal y parte del Centro Histórico.

La Coordinación del Registro Público de Monumentos Históricos sólo esta integrada por dos personas, con una propuesta de registro por parte de autoridades, para inscribir los inmuebles de Renovación Habitacional Popular después de intervenidos y no antes, como se propuso por los trabajadores en el momento inmediato al colapso.

La Coordinación de Zonas estuvo haciendo delimitaciones y declaraciones al por mayor, sin trabajos de investigación previa para avalar una adecuada reglamentación.

En general, las propuestas y proyectos presentados y realizados en esta Dirección han sido con fines políticos y publicitarios que solamente pueden reflejarse en los proyectos de Catálogo los cuales ocupan todo o la mayor parte del presupuesto dejando al margen el resto de las funciones inherentes e esa dependencia.

Como hemos podido observar, los problemas derivados de los sismos no han sido resueltos por el INAH, en el campo que correspondería a la Dirección de Monumentos (en cuanto a sus funciones de conservación protección y vigilancia del patrimonio).

II. Conclusiones

1. La atención al problema técnico de los monumentos ha sido parcial, dejando a un lado la solución al problema social.
2. No se han dado soluciones para detener la especulación inmobiliaria en la zona.
3. Las exigencias políticas-económicas por parte de autoridades han resuelto problemas inmediatos sin resolver totalmente (aún ahora, a más de dos años de los sismos).
4. Hay ineficiencia y desorganización por parte de las instituciones que han participado en la resolución del problema, por no existir unificación de criterios debido a la diversidad de objetivos, produciendo cambios constantes en la toma de decisiones, dejando a un lado la calidad por la cantidad.
5. No hay poder legal institucional, lo cual ha originado el tener que "negociar" demoliciones parciales o totales con anuencia del Instituto.

III. Propuestas

- a) Modificación a los reglamentos de construcción en centros históricos, tomando en cuenta la rehabilitación de los corrales de manzanas y del tipo de pavimentación que permitan la rehidratación del subsuelo; el resguardo de las zonas con la modificación del actual uso del suelo permitiendo el incremento de la habitación.
- b) Propiciar el cambio de uso, sobretudo en inmuebles abandonados, revitalizando la zona.
- c) Hacer efectivos los artículos que en la Ley Federal de Monumentos favorecen la restauración y mantenimiento de los inmuebles, como son los artículos, 10 y 100 los cuales no se aplican.
- d) Ejercer el poder de la opinión pública denunciando anomalías.
- e) Realizar proyectos y programas efectivos, con metas reales que tengan enfoques de tipo social, para lograr la salvaguarda del patrimonio en favor de la población que los habita.
- f) Limitar la compraventa inmobiliaria en el Centro Histórico, sujetándola a la decisión de un Consejo para evitar que este sujete a las leyes del mercado, mediante fideicomisos, comités supervisores, en fin un determinado sistema financiero que propicie el control catastral para que en esa zona no aumente el valor del impuesto predial en forma indiscriminada.

Introducción

Antes de los sismos, había una condición desfavorable en cuanto a los servicios de salud, en particular los de urgencias. Esto se evidenciaba desde el sexenio de José López Portillo, período en el que el Fondo Monetario Internacional (FMI) impone recortes en el gasto social, entre ellos el de salud. Ello trajo como consecuencia la disminución de personal, equipo, medicamento, etc. para atender la demanda institucional. En pocas palabras, ya antes de los sismos de 1985 existía un detrimento importante de las condiciones de salud de la población mexicana, y los sismos sólo vienen a evidenciar, con mucha mayor claridad, el problema de los recursos en el sector salud.

El Estado y los servicios asistenciales fueron rebasados por el fenómeno natural. En este sentido, la sociedad civil tuvo una destacadísima participación; es ella la primera, que de forma espontánea, instaló puestos de socorro y tiendas de campaña para atender a los heridos. Posteriormente las instituciones del sector salud como la Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA), el Instituto del Seguro Social (IMSS), el Departamento del Distrito Federal (DDF), la Cruz Roja, etc. retoman en sus manos el control.

Sin caer en amarillismos, el número de muertos y heridos resultado de los sismos sobrepasa las cifras oficiales; es un hecho innegable que las condiciones desfavorables que ya tenían los servicios de salud influyeron para que hubiera más víctimas de las necesarias, incluso la incapacidad ya sea pericial o técnica para las labores de rescate (tal vez por falta de recursos) no posibilitaron la salvación de más vidas. Evidentemente, nadie se esperaba un fenómeno de esa magnitud, pero sí es importante resaltar que el terreno desfavorable influyó para que hubiera un mayor número de víctimas.

1. La organización de la sociedad civil y de las organizaciones urbano populares en el aspecto salud a partir de los sismos

Paralelamente a la atención que empezaron a brindar las instituciones oficiales, se da una organización de la sociedad para atender las demandas de salud y de atención derivadas de los sismos; surgen muchos dispensarios, sobre todo en la zona centro, además de brigadas de médicos, pasantes de la UNAM, del Politécnico, de la UAM, que de manera independiente atendieron a los heridos, mucha veces en forma más eficaz y profesional que el propio sector oficial de salud.

A pocos días de los sismos, llega la ayuda internacional en el área de la medicina y se consolidan los centros de socorro con médicos extranjeros, apoyados por gente del país.

Por otra parte, antes de los sismos las organizaciones que conforman el Movimiento Urbano Popular (MUP), sobre todo del Valle de México, no pasaban en el terreno reivindicativo, de lo economicista respecto al problema de la salud. Por ejemplo, la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular (CONAMUP) y otras organizaciones como la Unión de Colonias Populares (UCP), tenían experiencias al haber logrado centros de salud, dispensarios, lo cual responde más a las necesidades de salud inmediatas que, a un planteamiento más global del problema de salud. Así, organizaciones como la de la colonia Guerrero o Martín Carrera nunca contemplaron el problema de la salud como una demanda central.

Entonces, los sismos toman totalmente desarticuladas a las organizaciones urbano populares. En ese sentido, es a raíz del 19 y 20 de septiembre de 1985 que algunas organizaciones retoman la demanda de salud; es el caso de la Unión de Inquilinos de la Colonia Morelos, el Centro Morelos, la Unión Popular Nueva Tenochtitlán (que surge a partir de los sismos), Amanecer del Barrio. Como está presente la demanda y la necesidad de atender los problemas de salud, incorporan a su esquema este elemento, pero dándole un lugar periférico o secundario con relación, en este caso, al problema fundamental que era la vivienda y la expropiación de predios.

Una vez pasada la etapa de emergencia y a raíz de la llegada de la ayuda internacional se consolida en varias organizaciones un proyecto de salud.

La gran enseñanza de esta difícil experiencia que fueron los sismos, es que cuando menos en lo formal, y en algunos casos en lo orgánico y práctico algunas organizaciones comenzaron a enfocar el problema de salud desde sus causas y no sólo desde sus efectos; no solamente tomando en cuenta la enfermedad sino también las condiciones de vida materiales de la población. Esto es significativo porque va a posibilitar ampliar las demandas y articularlas dentro de un frente común que enfrente al Estado.

Para realizar los proyectos independientes en torno a salud, llegó financiamiento del extranjero, tanto para instalar la infraestructura básica de consultorios, con instrumental, equipo y algo de medicamentos, además del pago temporal de una planta básica de médicos que adiestraran a la población en la atención básica. En algunos casos dotaron de casas de salud para realizar labores no sólo curativas sino, para realizar tareas encaminadas a la educación popular para la salud. En ello participaron, sobre todo, Cruz Roja Suiza, Médicos Sin Fronteras y la Iglesia Metodista, aportando financiamiento específico para levantar proyectos de salud dentro de las organizaciones populares.

Este financiamiento posibilitó que las organizaciones populares pensarán en proyectos de salud más estables y a más largo plazo. Sin este financiamiento, seguramente, algunos de los proyectos que ahora están vigentes y que se están consolidando no hubieran sido posibles.

Los proyectos que se han desarrollado con mayor eficacia han sido los de la Unión Popular de Inquilinos de la colonia Morelos-Peña Morelos (UPICM-PM), el Centro Morelos, Amanecer del Barrio y Unión Popular Valle Gómez. En la colonia Guerrero se intentó desarrollar este tipo de trabajo pero, no fue posible dada la dinámica de construcción de vivienda y otros problemas de la propia organización.

A partir de estas experiencias concretas de las organizaciones populares señaladas, existe la posibilidad de articular las demandas de salud a un proceso organizativo más amplio.

Un ejemplo de ello es lo que en especial ha hecho la UPICM-PM, donde, a partir de los sismos, se incorporó un equipo de trabajo de la Universidad Autónoma Metropolitana, el cual con una concepción nueva para atender el proceso de salud-enfermedad, empezó a desarrollar un trabajo organizativo en las colonias; con promotores de salud, clubs de salud, clubs de alimentación de niños; involucrando de manera conciente y racional, a la comunidad en resolver los problemas de salud, por lo menos los más inmediatos, dando la pauta para resolver a largo plazo aquellos de origen más estructural y que requieren del concurso de toda la sociedad para modificarlos.

De esta manera, ya se han dado los primeros pasos para incorporar orgánicamente la lucha por la salud con la lucha por mejores condiciones de vida. Dentro de un proceso formativo, de educación popular, el aspecto sanitario debe vincularse con demandas de carácter político, como lo es la lucha por la democracia en el Distrito Federal y por el cambio de autoridades que respondan a las necesidades de la población, es este caso, de salud.

II. El Estado en la reconstrucción de la infraestructura hospitalaria

Sobre la reconstrucción de la infraestructura hospitalaria, si bien el Estado planteó, en un primer momento, que la prioridad era la reconstrucción de ésta, al lado de la infraestructura educativa, en realidad fue sólo un pretexto para justificar la falta de atención a las demandas inmediatas de los damnificados.

A pesar de que el sector salud recibió la mayor proporción de recursos del Fondo Nacional de Reconstrucción y de que contó con otros apoyos financieros, a más de dos años de los sismos se ha avanzado poco en la recuperación de los servicios médicos y se ha dado a conocer mínima información sobre la canalización actual y futura de los fondos para la reconstrucción de este sector.

Con relación a los recursos para la reconstrucción, tenemos que:

a) El sector salud absorbió aproximadamente 70% de los fondos en pesos y alrededor del 62% de los dólares recabados por NAFINSA para la reconstrucción.

b) De los recursos del Fondo Nacional de Reconstrucción desglosados en el siguiente cuadro, se destinaron 46 mil 985.9 millones de pesos a la Secretaría de Salubridad y Asistencia; 20 mil 142 millones de pesos al Departamento del Distrito Federal; 5 mil 306 millones de pesos al DIF; 62 mil 502 millones de pesos al IMSS y 29 mil 75 millones de pesos al ISSSTE.

FONDO NACIONAL DE RECONSTRUCCION
ORIGEN Y ASIGNACION DE RECURSOS AL
15 DE SEPTIEMBRE DE 1986

1. Origen de los recursos

| | |
|--------------------------|---------------------|
| 1.1 Donativos Recibidos: | |
| Moneda nacional | 33, 956'242,576.04 |
| Dólares americanos | 13'542,513.02 |
| 1.2 Intereses Obtenidos: | |
| Moneda nacional | 9, 694'718,749.26 |
| Dólares americanos | 645,237.37 |
| T o t a l: | |
| Moneda nacional | 43, 650'901,325.30* |
| Dólares americanos | 14'187,750.39* |

2. Asignación de recursos moneda nacional

| | |
|-------------------------|--------------------|
| 2.1 Sector Salud | 28, 869'000,000.00 |
| 2.2 Sector Educación | 11, 385'008,493.15 |
| 2.3 Sector Vivienda | 972'928,690.59 |
| 2.4 Otros condicionados | 190'000,000.00 |
| T o t a l | 41, 416'937,183.74 |

3. Asignación de Recursos dólares americanos:

| | |
|-------------------------|--------------|
| 3.1 Sector Salud | 6'025,167.99 |
| 3.2 Sector Educación | 3'613,164.16 |
| 3.3 Sector Vivienda | 136,928.01 |
| 3.4 Otros condicionados | 5,919.86 |
| T o t a l | 9'781,180.02 |

(*) De estas cantidades, hasta finales de 1986 se encontraban en proceso de asignación \$2,234'024,141.56 y 4'406,570. dólares, al acuerdo que dictara el Comité Técnico Mixto del Fondo Nacional de Reconstrucción, sobre las solicitudes que le fueran sometidas por los ejecutores de programas de reconstrucción del sector social, público y privado.

c) La Secretaría de Programación y Presupuesto informó que se destinarían 57 mil millones de pesos con recursos del gobierno federal y de la Lotería Nacional para construir el nuevo Centro Médico del IMSS y un nuevo Hospital General del ISSSTE.

d) El titular de la Secretaría de Salud informó que estaba listo un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 100 millones de dólares para la rehabilitación y reconstrucción de centros de salud. En este caso, el BID daría tasas de interés preferenciales, por lo que se pagarían intereses de 8.7% y no de 9.5% que se estaba pagando.

De acuerdo al informe presentado sobre el sector salud a finales de 1986, se estimaba que de 1985 a 1988 la capacidad hospitalaria se recuperaría del 37 al 123% (esto significa que no sólo se repondría el 63% de infraestructura dañada, sino que se generaría un 23% más de lo que existía en septiembre de 1985). Sin embargo, no se señalaban los gastos hechos hasta esa fecha, ni los que irían a realizar.

Los datos oficiales son bastante contradictorios, por una parte el Estado nos dice que a pesar de la crisis, de la situación económica y de los efectos que los sismos tuvieron, la atención a la salud no se verá afectada, la población mexicana seguirá protegida; por otro, al ver las estadísticas oficiales de mortalidad y morbilidad, sobre todo infantil, materna y laboral, nos damos cuenta de que hay un desfase entre lo que generalmente se dice y lo que en realidad ocurre. Las estadísticas de hoy nos dicen que si bien se han abatido los niveles de enfermedad, sobre todo de aquellos prevenibles por vacunación, siguen vigentes, y aún con mayor evidencia, las enfermedades "producto de la pobreza" como son el alcoholismo, las enfermedades gastrointestinales y respiratorias. Este es el panorama general que demuestra la influencia de la reducción del gasto público en el área de la salud.

El Estado mexicano tiene que legitimarse, dar ante la opinión pública la apariencia de que él se interesa en los problemas de la gente. En el caso de la salud, es mucho más impactante la reconstrucción de un hospital Juárez o Centro Médico, tanto a los ojos de la población como de la opinión

pública internacional, que elaborar un proyecto de salud pública de atención primaria que contemple mejor alimentación para los niños, mejor atención materno-infantil. Es mucho más efectivo políticamente construir grandes centros médicos porque dan la impresión de mayor seguridad, de mayor cobertura, aunque los servicios que brinden sean pésimos.

Por ejemplo, hay un indicador, que si bien al parecer no tiene mucho que ver con la política implementada a partir de los sismos, si nos ilustra sobre la política oficial de salud: en el estado de Durango se construyó una infraestructura hospitalaria que rebasa la demanda real; en otros estados sucede lo mismo, la oferta supera la demanda con una infraestructura conocida como de atención de tercer nivel (especialidades). Si esta infraestructura fuera construida tomando en cuenta el crecimiento a futuro, esto sería razonable; sin embargo, si se toma en cuenta el propio discurso del Estado en el sentido de que es necesario adecuar y racionalizar los recursos y la propia estructura del servicio, esto parece contradictorio e incluso, absurdo.

Por otra parte, mucha de la ayuda internacional venía dirigida ex professo a reinstalar la infraestructura de salud, por lo que el Estado se veía obligado a utilizar ese dinero en la reconstrucción de hospitales. Sobre esto, durante algún tiempo se dijo que el Hospital Juárez se iba a reubicar y que el Centro Médico sería reconstruido en la misma zona pero, sería de menor magnitud, el hecho es que se van a construir unos señores edificios, con unas señoras instalaciones. Ello se hace con la intención, ya señalada, de causar una "gran impresión".

III. Los sismos y el sector médico

Respecto a los efectos directos de los sismos sobre el sector salud, es importante señalar que uno de los sectores profesionales que más pérdidas de vida y de invalidez tuvo fue el médico, a raíz de la caída del Centro Médico, el Hospital General (sobre todo en el área de ginecobstetricia), el Hospital Juárez y otros.

Ya antes de los sismos, los médicos, en especial del IMSS y SSA habían realizado movilizaciones oponiéndose a despidos, vedados o abiertos, por la democracia de las acciones sindicales, en contra de la corrupción de líderes, etc. A partir de septiembre de 1985, los conflictos laborales se acentuaron debido a los recortes al sector. Vedadamente los médicos fueron despedidos y algunos otros reubicados en sitios inexistentes, donde las plazas no tenían vigencia ni trabajo real. Por ello, es posible que el movimiento de médicos y enfermeras desempleados resurja, aún con mayor fuerza. A dos años de los sismos, se manifiesta ya esta movilización profesional por mejores condiciones laborales, salariales y, lo que es muy importante, están buscando ser más eficientes en la atención al público.

IV. A manera de conclusión

En síntesis, el problema de salud es el mismo antes y después de los sismos, los índices de morbilidad se mantienen, los de mortalidad indudablemente aumentan por causa del fenómeno; el problema laboral del sector no sólo no se resuelve sino que se agudiza; la infraestructura hospitalaria no responde a las necesidades de la población. Sin embargo, algo positivo dejaron los sismos y fue la posibilidad de que algunas organizaciones urbano populares retomaran la demanda de salud como un elemento central.

PARTE III

LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y POLITICAS

ALGUNAS EXPERIENCIAS DE ORGANIZACIONES DE DAMNIFICADOS EN LA RECONSTRUCCION

A continuación presentamos una serie de entrevistas que recogen los testimonios de compañeros que participaron en el proceso de reconstrucción.

Testimonio de **Oscar Cabrera**, miembro de la Coordinadora Unica de Damnificados (CUD) y de la Unión Popular de Inquilinos-Peña Morelos (UPICM-PM)*.

- ¿Cuál fue tu experiencia inmediata a los sismos?.

Resulta que mi familia fue damnificada y nos encontramos en la calle porque no sabíamos en que estado estaba la casa. Lo primero que hicimos fue organizar un centro de acopio en la calle con los demás vecinos.

En las calles de Pintores y Mecánicos se organizaron otros vecinos, al tercer día el 21 de septiembre de 1985, tuvimos una reunión todas las personas que participábamos en los centros de acopio y se decidió que todos los representantes nos vinculáramos a la Peña Morelos.

Al principio llegaron varios grupos de apoyo técnico, sobretudo, Colegio de Ingenieros, vino gente de Casa y Ciudad, del Politécnico, UAM, de la Universidad de Puebla y con ellos se hicieron recorridos a partir de los cuales se hizo una distribución de los grupos por zonas de trabajo.

* Entrevista realizada por Edna Elena Vega Rangel en febrero de 1988.

Las tareas inmediatas que realizaron cada uno de los grupos de apoyo fueron los siguientes:

- Dictámenes técnicos y capacitación de algunos compañeros para hacer apuntalamientos.
- Se revisaron las viviendas para verificar que existieran condiciones de seguridad para los habitantes. La gente permanecía en sus casas ya que no tenía a donde ir, pero al hacerse los dictámenes en los casos en que fue necesario desalojar se les dijo que estaban mal sus viviendas y se empezaron a hacer campamentos en las calles, de hule, de láminas de cartón, etc.

Hubo dos derrumbes uno en Pintores y otro en Panaderos, en estas vecindades hubo heridos así que nos dedicamos a rescatarlos y a sacar las pertenencias de la gente.

Al empezar a participar en la Unión, se formaron varias comisiones para solicitar apoyo a las autoridades, a mi me tocó ir a la Cámara de Diputados en donde nos recibió la Comisión Pluripartidista y se lograron una serie de audiencias con las delegaciones. En el caso de la Venustiano Carranza, el delegado que era Alberto Meléndez no nos recibió y en su lugar nos atendió el subdelegado de Obras, nos dijo que para la delegación Venustiano Carranza existían otras prioridades. Para ellos era más importante normalizar la vialidad y las actividades propias de la delegación. Afirmó que el problema de la gente en la calle era una forma de inflar el problema, que no habían damnificados en la zona, sólo los del Mercado Jamaica y de algunas casas que se habían caído en el Centro.

Posteriormente tuvimos una reunión con el delegado, donde se comprometió a dar muchas cosas (dar material para apuntalar, enviar gente para dictámenes técnicos, reparar las fugas de agua); sin embargo, en la práctica no hicieron nada.

A la semana decidimos realizar una marcha (27 septiembre de 85) donde se levantaron las siguientes demandas:

- 1) Expropiación de predios dañados por los sismos.
- 2) Créditos baratos a damnificados.
- 3) Solicitar al gobierno que no se realizaran desalojos por parte de los caseros aprovechando que, la gente se encontraba en la calle.
- 4) Reanudación de los servicios.
- 5) Que empezara a llegar ayuda a las familias damnificadas.

Participamos en coordinación con otras organizaciones que surgieron en la zona como la Asociación Morelos (hoy Amanecer del Barrio), Valle Gómez, Centro Morelos y Emiliano Carranza. Nos dimos a la tarea de establecer contacto con otras organizaciones de inquilinos y damnificados para ver de que manera se resolvía el problema, fue el caso de la gente de Tlatelolco, Guerrrero y Roma.

Se convoca a la marcha del 27 de septiembre de 1985 que iría de Labradores a los Pinos. No fuimos recibidos por el Presidente, en su lugar nos recibió Gamboa Patrón y Andrés Massieu, asesores de la Presidencia. Nos canalizaron a SEDUE para darnos respuesta. En dicha Secretaría se nos dijo que se nos iba a atender en los siguientes días, que se iba a dar información al público y, en síntesis, que se iba a atender el problema de la vivienda. De hecho el trato de Carrillo Arena fue despótico, amenazador, y no se logró nada. Sin embargo, fue importante que para la gente quedara claro que la respuesta del gobierno, la cual estaba en contraste con las tareas desarrolladas por las propias organizaciones populares (centros de acopio para distribuir víveres, brigadas de apuntalamiento, de vigilancia etc).

- ¿Cómo surge la CUD y cuáles eran sus objetivos?.

Fue a partir de esta primera coordinación que establecimos con varias organizaciones. Se realizaron 3 ó 4 reuniones; la primera en la colonia Roma en las calles de Chiapas y Córdo-

...a, en los campamentos, donde acudieron varias organizaciones del Centro, Morelos, Guerrero, Tlatelolco, Penito Juárez, Condesa, Valle Gómez, Doctores, Multifamiliar Juárez e incluso de Iztapalapa, Xochimilco y Azcapotzalco.

La segunda reunión fue en la Morelos con el fin de establecer los mecanismos operativos y una propuesta organizativa. El 23 de octubre se realiza esta reunión y se participa en la marcha contra el pago de la deuda externa. El 24 de octubre se convoca formalmente a la constitución de la CUD en el auditorio 5 de Mayo de Tlatelolco.

La CUD fue producto de la necesidad del propio movimiento, y sobre todo del sentimiento unitario amplio por parte de la población para lograr solución al problema de vivienda.

¿Estas organizaciones ya trabajaban de manera conjunta o bien la integración de ellas para formar la CUD surgió espontáneamente?

Hay organizaciones que ya estaban trabajando anteriormente en forma conjunta dentro de la Coordinadora Inquilinaria, otras surgieron a partir del sismo.

La organización de la colonia Santa María por ejemplo, consideraba que el problema de damnificados era secundario y fue toda su dinámica durante 2 años. Para ellos lo importante era defender los derechos de los inquilinos, por ello hubo diferencias para la constitución de la CUD en un principio.

Otras organizaciones que acudieron a la constitución de la CUD eran en su mayoría de la regional Valle de México de CONAMUP, se fueron alejando en la medida que no eran organizaciones propiamente de damnificados. La CUD va así adquiriendo esta especificidad desde un principio, es una coordinadora de damnificados, de ahí que su objetivo concreto era lograr una respuesta inmediata para los propios damnificados logrando una vivienda, no había vuelta de hoja.

- ¿El surgimiento de la CUD desmovilizó el trabajo que venían realizando cada una de las organizaciones de damnificados de manera independiente?

La CUD no desmovilizó en ningún momento. De hecho se logra ir estableciendo una serie de canales de negociación con las autoridades. Esto no era garantía de que las respuestas del Estado fueran positivas ya que desde un principio la intención de las autoridades fue disgregar a las organizaciones de damnificados dándoles un trato diferencial como fue el caso de Tlatelolco con relación a las colonias populares.

Si bien es cierto que en cada una de las colonias las posibles soluciones tenían que ser diferentes (por las características propias de la vivienda), los problemas que enfrentábamos como damnificados eran comunes. Sin embargo, el hecho de que se conformara la CUD fue lo que evitó la disgregación.

Antes de que se formara la CUD se logra, después de amplias negociaciones y movilizaciones no coordinadas pero generalizadas en toda la ciudad, que el gobierno decreta el 11 de octubre la expropiación de 7 mil predios. A los diez días realizamos una nueva marcha debido a todos los errores cometidos en el decreto expropiatorio. Posteriormente, los 7 mil predios expropiados se reducen a sólo 4 mil, se excluyen zonas como la Roma y se incorporan otras como el Centro Histórico.

A raíz de que se forma la CUD se empiezan a realizar una serie de negociaciones conjuntas donde, si bien en cada negociación se deja un apartado especial para tratar cada problema específico (para Tlatelolco, para el Multifamiliar Juárez y colonias populares, etc.) de manera global el problema era el mismo, todos estábamos en la calle y en los campamentos y, nadie tenía una respuesta del gobierno, el cual trataba de pasar por encima de los derechos de los damnificados. Lo que logró la CUD fue aglutinar a todas las organizaciones evitando la desmovilización. Sin embargo, otras organizaciones que surgen al lado o antes de la CUD, a partir de la expropiación van a ir desapareciendo o a ser coptadas por el PRI.

Algunas se unifican con otras organizaciones de la misma CUD pero, terminan siendo coptadas por el PRI, porque sus líderes eran priistas, como fue el caso de Fuerzas Unidas del Centro que regresaron al PRI; algunas se unifican con otras organizaciones como fue el caso de la uniones de vecinos del Centro que dieron origen a la Unión Popular Nueva Tenochtitlán (UPNT), o bien, se dio el caso de la incorporación de organizaciones inquilinarias como en la colonia Pensil, la cual no era considerada como zona damnificada.

Considero que no hubo una disgregación sino, al contrario la CUD permitió aglutinar fuerzas y el ir desarrollando una alternativa propia producto de la discusión de experiencias que se van a conjugar tanto de las organizaciones que tenían mucho tiempo como la Guerrero, Tlatelolco, como de las organizaciones que surgieron en esos momentos (la Roma, Condesa, Doctores, etc.).

- ¿Consideras que la CONAMUP no dio respuesta a los problemas de damnificados?.

Yo creo que no es tanto que la CONAMUP no haya dado respuesta sino que la respuesta no estuvo a la altura. La respuesta que dio CONAMUP fue una respuesta tradicional al querer aglutinar el movimiento, pero no consideró un hecho importante de los sismos, que fue la participación masiva de la gente, una autorganización espontánea, así la CONAMUP no fue capaz de adecuar su estructura al momento que se da la coyuntura de los sismos. Siento que algunas fuerzas de la CONAMUP no entendía este fenómeno y de ahí que la respuesta de CONAMUP haya terminado siendo una respuesta colateral al problema de los damnificados. Mientras CONAMUP al lado de otras fuerzas convoca el 27 de septiembre a la conformación del Comité Organizador Para la Solidaridad y la Reconstrucción (COPOSOR) y se ponen a decidir que van hacer con los damnificados, nosotros ya íbamos en la marcha a los Pinos con propuestas y alternativas concretas.

Su participación fue tardía y marginal, fue de apoyo, de hecho permitió el desarrollo de algunas organizaciones como la Tránsito, pero no fue lo que se esperaba de una Coordinadora Nacional, en el sentido de haber enviado cuadros para organizar el trabajo en las colonias, llevando su experiencia de más de 7 años de lucha a nivel urbano para desarrollar y articular a las organizaciones de damnificados. La idea de CONAMUP fue coptar a las organizaciones que iban surgiendo pero sin entender ni explicarse la dinámica propia de estas organizaciones.

De ahí que desde el principio la relación que se establece entre la CUD y la CONAMUP sea una relación muy diplomática pero fría.

- ¿Cuáles fueron los obstáculos que enfrentó la CUD?.

- 1) El gobierno no reconocía que hubiera damnificados.
- 2) No se reconocía oficialmente a las organizaciones de damnificados.
- 3) No se reconocía a la CUD como interlocutor.
- 4) La prioridad para el Estado era la reconstrucción de escuelas, hospitales, oficinas públicas dejando hasta el final a la vivienda.

Es debido a ello que la principal consigna de la CUD era: "que el gobierno entienda...primero es la vivienda". El gobierno sólo reconocía que hablan damnificados en Tlatelolco, el Multifamiliar Juárez, y nada más.

Los obstáculos fueron muchos, conforme avanzaban los programas de reconstrucción. El Estado más que reconstruir vivienda trató de reconstruir al PRI y sus formas de control. El partido oficial fue repudiado por la gente, ello quedó demostrado cuando los damnificados nunca recurrieron a los centros de acopio del PRI.

La respuesta del gobierno fue dura, no reconociendo a las organizaciones independientes y canalizando todo por medio del PRI e imponiendo como requisito para la atención a los damnificados que ellos estuvieran registrados en la liga de cooperativas de vivienda del PRI.

- ¿La existencia de diferentes corrientes políticas al interior de la CUD provocó problemas?

Lo que existió desde un principio fue el reconocimiento de la pluralidad al interior de la misma CUD, no hay fuerza política hegomónica, nunca ha existido esa tendencia siempre ha existido un marco de respeto mutuo entre la CUD como organización y los militantes y las organizaciones políticas involucradas. La CUD mantiene relaciones con organizaciones de izquierda tanto parlamentarias como no parlamentarias -con registro y sin registro-,

- Con los propios damnificados ¿cuáles fueron los problemas desde hasta la construcción de vivienda?

Los problemas con los damnificados fueron varios:

1) Hubieron conflictos con compañeros que desarrollaban su trabajo con una visión caudillista, es decir, pretendían dirigir al movimiento de damnificados sin consultar a las bases.

2) Otro problema fue que alguna gente se quiso aprovechar del problema de emergencia lucrando con los donativos que llegaron del extranjero. En el caso de la Unión, se trató de evitar al máximo esto y creo que en gran medida lo logramos. No queríamos que toda la ayuda solidaria terminara siendo un botín de aves de rapina.

por otra parte habría que señalar que el programa de Renovación Habitacional Popular fue el resultado de la propuesta de las organizaciones populares. De hecho, gran parte de los proyectos de vivienda que iniciaron las organizaciones los rescata el gobierno para crear el programa y así atiende de manera masiva a la gente de la zona; la diferencia entre el programa de RHP y los programas independientes era que mientras los segundos lo que buscaban era la participación consiente de la gente, RHP lo que buscaba era desmovilizar a la gente.

A más de dos años de los sismos el programa Fase II está atorado. Fase II inicialmente iba a atender a 16 mil familias y hoy a 12 mil, existen alrededor de 3 mil familias en campamentos sin contestación, en la Guerrero, Doctores, Morelos, Centro, donde el problema de vivienda son los créditos ya que este programa al igual que el de RHP está determinado por mecanismos y normas del Banco Mundial, y por lo tanto el crédito se hace mas lejano, a pesar de que supuestamente fue diseñado para las familias de escasos recursos.

Con el nuevo programa de Casa Propia, anunciado el septiembre de 1987, está más jodido el asunto, tú tienes que tener una vivienda de por lo menos 50 m², sólo en el centro posiblemente haya viviendas de este tipo, pero hay un problema: si son Monumentos Históricos no están sujetos a este programa; además, tiene esencialmente el mismo problema que FII: la venta del predio y el monto de la operación dependen de la voluntad del propietario.

El crédito que otorga el programa Casa Propia es de 1 millón 600 mil pesos y eso no alcanza ni para compra el suelo. Suponiendo que la gente pudiera comprar el suelo, lo hará un periodo de 8 a 10 años, según las normas del programa, después de 10 años se podrá obtener un crédito con FONHAPO o FIVIDESU.

Los créditos de FIVIDESU son muy duros, de hecho antes de Fase II, FIVIDESU se nos quiso proponer como alternativa a los damnificados; sin embargo esto fue rechazado. Por ejemplo, en enero 1986 las casas de RHP costaban 2 millones 896 mil pesos, en tanto que las viviendas construidas por FIVIDESU iban a tener un costo de 4 millones 500 mil pesos.

- ¿Tú crees que las medidas adoptadas por el Estado influyeron en la desarticulación de la CUD?

Yo siento que el gobierno si buscó desarticular el movimiento y retomar el dominio por medio del PRI. Por otra parte, utilizó los programas de reconstrucción de vivienda con la intención no de resolver el problema de los damnificados pero sí desarticular a las organizaciones.

Ahora hay un periodo de paz que no es reflejo solamente de la CUD, sino sería abstracción de la situación global por la que esta pasando el país. De nada sirve que haya un movimiento bueno sin los trabajadores.

La CUD ha podido desplegar dentro de sus fuerzas de damnificados lo que tiene pero, en la medida que no surgan nuevos protagonistas del propio movimiento social no podrá avanzar más de lo que lo ha hecho. Lo que se tiene que discutir dentro de las organizaciones del Movimiento Urbano Popular, no solamente en la CUD, es la forma de estar a la ofensiva en el problema específico de la vivienda sin hacer abstracción de la situación económica por la que atraviesa el país.

- ¿Cuáles consideras que fueron los principales logros de la CUD?

El simple hecho de haberse preservado la CUD como organización de damnificados hasta julio de 1986 creo que fue un logro, ya que durante periodo septiembre de 1985 a julio de 1986 se dio una ofensiva por parte del gobierno hacia las organizaciones sociales tratando de desmembrarlas, de dividir las o de infiltrarlas, incluso, esa fue una prueba.

Otro de los logros fue la reconstrucción realizada por REP, logro no sólo de la CUD, sino de todas las organizaciones del MUP y del movimiento de solidaridad del pueblo en su conjunto. Es un logro de la población la construcción de 44 mil viviendas que bien que mal cayéndose o muy mal construí-

das, mejoró las condiciones de vida de mucha gente ya que, no es lo mismo para una familia de damnificados vivir en un cuarto de 4 x 4 a vivir ahorita en una casa de 40 m², que a la mejor está muy fea, que no tiene acabados, pero por lo menos se mejoraron las condiciones anteriores.

Por otra parte, se logró el reconocimiento de la población misma de su capacidad de obligar al Estado a dar respuestas que vayan en función a las necesidades de la población; esto es parte de la experiencia de la CUD, experiencia que abre nuevas perspectivas y alternativas de organización, superior, diferente, centralizada, democrática, pluralista, como en un tiempo la CUD lo fue, yo creo que en ese es un reto de la CUD y de todas las organizaciones del MUP.

- ¿Podrías hacer un balance no sólo de la CUD sino de todo el MUP en 1987?

En general el balance es positivo:

1) Se cierra una fase de reconstrucción de manera masiva donde el triunfo es del Movimiento Urbano Popular.

2) Surgen organizaciones masivas como la Asamblea de Barrios.

3) Ante la represión y la falta de alternativas por parte del Estado, el conjunto de organizaciones urbanas se ven obligadas a ponerse a discutir seriamente la unidad del MUP.

Todo el desarrollo de las actividades del MUP en el año Internacional de los Sin Techo, con todo lo desarticulado las tensiones, muestran un saldo positivo para el Movimiento Urbano Popular. Hay que pensar en las tensiones al interior del MUP y como superarlas con métodos nuevos, ya que si 1987 fue un año difícil para las organizaciones sociales y sindicales en su conjunto, para las organizaciones urbanas va a ser más difícil porque el problema en la ciudad se va a agudizar.

- ¿Cuáles consideras que podrían ser los principales ejes de lucha para el año que comienza, 1988?

Creo que los cuatro principales ejes de lucha son:

1. La vivienda.
2. La lucha por servicios.
3. La lucha contra las alzas en las tasas del predial, agua, etc.
4. La lucha por la democracia

Testimonio de la compañera Arquitecta **Georgina R. Sandoval**, miembro de la Unión Popular de Inquilinos de la colonia Morelos-Peña Morelos, quien además de dirigente de la Unión, participó en la construcción de viviendas dañadas por los sismos de 1985*.

- ¿Cuáles fueron las circunstancias que llevaron a la Unión a construir vivienda para damnificados?

Los días posteriores a los sismos representaron para la mayoría de los damnificados un momento de incertidumbre ya que no se sabía cómo solucionar los problemas a los que se enfrentaban y si el Estado daría una respuesta a las necesidades inmediatas de la población afectada. El pueblo se vuelca a las calles de manera espontánea (y en algunos casos, convocado por algunas organizaciones, entre ellas la Unión Peña) buscando una respuesta por parte del gobierno, la que fuera; sin embargo, lo único que encontró fue prepotencia y, negativas, las cuales sólo evidenciaban la propia incapacidad del Estado para enfrentar el problema.

Por lo anterior, las organizaciones sociales instrumentan sus propias respuestas acordes a la realidad social y económica de los pobladores del barrio, a través o en coordinación con otros organismos como universidades y asociaciones civiles.

En el caso particular de la Unión Peña se planteó un proyecto de reconstrucción teniendo como objetivos: 1. Propiciar la organización vecinal; 2. Fortalecer a la Unión; 3. El objetivo político de ese momento sería medir la respuesta gubernamental, de los propietarios, y de los vecinos en general (finales de septiembre de 1985); y 4. Lograr la permanencia de los pobladores en su barrio. En síntesis, el objetivo central era organizar masiva y conscientemente a la población del centro de la ciudad.

*Entrevista realizada en marzo de 1988 por Edna Elena Vega Rangel.

De esta manera, en el momento en que nos entrevistamos con el Presidente de la República (2 de octubre del mismo año), además de plantearle la necesidad de la expropiación de predios dañados por los sismos, fue posible hablar de nuestro proyecto de reconstrucción de vivienda. La entrevista, por sí misma, era un logro de las organizaciones sociales ya que éstas se legitimaban como interlocutores al más alto nivel, aunque sólo fuera propagandísticamente y por las circunstancias de emergencia por las que se pasaba.

Así, un logro inicial de las organizaciones de damnificados fue el centrar la situación de los sismos en DEMANDAR enérgicamente al gobierno la solución al conflicto, designándolo como el responsable de reconstruir, de indemnizar, expropiar, etc.

La amplia movilización de la sociedad civil trae como consecuencia la necesidad, por parte del gobierno, de dar una respuesta política. Una primera respuesta fue el decreto expropiatorio del 11 de octubre y su modificación el 21 del mismo. Este decreto, sin embargo, divide a los damnificados en dos grupos: los damnificados reconocidos oficialmente y los que incluso hasta ahora siguen en las mismas condiciones de damnificados, es decir sin respuesta concreta a su demanda de vivienda. La segunda respuesta se dio con la creación del programa de Renovación Habitacional Popular, que para el gobierno significaba la carta que le serviría para reivindicarse no sólo ante la gente de la zona, sino también frente al resto de la ciudadanía del país y con la opinión internacional, lo cual implicaba que este organismo tenía que ser eficiente y no burocrático (en general así fue).

Esto para nosotros significaba que el Estado pretendía ponerse al frente del movimiento, con el fin de fortalecer al PRI y sus instancias, lo cual no se logra hasta después del período en que Parcero López estuvo al frente de RHP, esto es hasta el momento en que se inicia la construcción de vivienda, con Manuel Aguilera como responsable del proyecto (enero de 1987).

Para los que intervenimos en el proceso (técnicos, administrativos, dirigentes de la Unión-Peña y militantes de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria -ACNR-) poder planear y conducir técnica, financiera y organizativamente,

significó abrir la posibilidad de una experiencia nueva, por tanto poder aportar cosas nuevas al Movimiento Urbano Popular.

El número de viviendas que podíamos construir no pretendió competir cuantitativamente con las realizadas por el gobierno, pero sí de manera cualitativa. Por ello nos planteamos construir inicialmente 150 vecindades.

A partir de las consecuencias físicas causadas por los sismos en la colonia Morelos una serie de agencias financieras estuvieron dispuestas a realizar un "sismo tour", es decir apoyar económicamente en la reconstrucción de vivienda a las organizaciones vecinales.

Cada una de las agencias que aportaron recursos para desarrollar los proyectos de reconstrucción de las organizaciones independientes de damnificados tienen lineamientos propios y por tanto condicionan su apoyo a las uniones en función del trabajo que éstas hayan realizado con los vecinos. Un factor fundamental para hacer realidad la canalización directa de recursos hacia las uniones independientes de damnificados por parte de estas agencias fue la imagen de corrupción que tenía -y tiene todavía- el Estado dentro del ámbito internacional. En nuestro caso, recibimos apoyo del Catholic Relief Service y de Cruz Roja Suiza.

Para la realización del proyecto nos planteamos la necesidad de cuidar los aspectos legales y fiscales implícitos en la construcción de vivienda, ya que consideramos que de no cumplir con los requisitos oficiales, en el futuro las autoridades podrían utilizar esto como pretexto para detener nuestro trabajo.

Por ello creamos un organismo con una personalidad jurídica intermedia entre la Unión y las agencias financieras llamadas Promoción de Actividad Socioeducativa, Asociación Cívica (PASE, A.C.). No se pretendió hacer una constructora, sino más bien unir a una serie de instituciones con experiencia en relación previa con organizaciones populares, cada una de las cuales tenía un carácter profesional diferente entre sí para desarrollar toda la variedad de tareas necesarias.

Así Fomento Cultural y Educativo se encargó de: recibir y distribuir los recursos, administrándolos y llevando al día la contabilidad; suministrar materiales; llevar la tramitación con Hacienda y el Seguro Social. Dentro de PASE, el Corporativo de Estudios Jurídicos se encargó de la relación legal con las autoridades, con los vecinos y con todo aquel con quien hiciera falta. Casa y Ciudad, A.C., particularmente su área de Asesoría Directa, fue la responsable técnica del proyecto, abarcando desde el diseño de éste hasta la supervisión de la obra.

PASE fue fundamental porque liberó a la Unión de este tipo de actividades permitiéndole abocarse al aspecto organizativo.

- ¿Cuáles son las principales características del proyecto?

En términos de construcción teníamos como experiencia previa a los sismos el cambio de techos en la vecindad de Sol 199, en donde no tuvimos permiso del dueño para hacerlo.

Con los sismos, se buscó una respuesta global (social, económica, cultural, financiera, legal y técnica) basada en la realidad de los pobladores. Por esto pensamos en una vivienda que pudiera ser construida en etapas, de acuerdo a las posibilidades económicas de los vecinos, es decir, hablamos de dos etapas constructivas de 25 m² cada una. La obra contempló todos los servicios al interior de cada vivienda, rescatando el viejo esquema de vecindad, lo cual quiere decir también rescatar la cultura del barrio y la imagen urbana de la ciudad.

Por otra parte, planteamos que financieramente existiera la posibilidad de recuperar el dinero donado por las agencias a través de un fondo revolvente, con el cual pudiera darse continuidad a programas de vivienda; para ello el monto del crédito se fijó en función únicamente del costo del material invertido en cada obra; estos créditos tienen un interés

anual del 9% y el pago mensual es el 15% del ingreso familiar declarado por los beneficiarios, y el cual se incrementa con un índice inflacionario del 30% anual.

Para la concreción del proyecto, nos preocupó instrumentar mecanismos para que los vecinos participaran en el proceso constructivo, el mantenimiento y la administración del condominio vecinal. Así, para el diseño del proyecto de vivienda y del conjunto de la vecindad, tomamos en cuenta las necesidades de las familias que vivirían ahí (número de familias, superficie del predio, densidad, características físicas y técnicas del inmueble antes y después de los sismos, propuestas de los mismos vecinos, etc.) para posteriormente hacer consenso entre los vecinos. Con esta labor llegamos a tener 6 prototipos de vivienda. No desarrollamos el "diseño participativo" por: 1. considerarlo una utopía; 2. las condiciones del momento requerían de respuestas inmediatas.

Empezamos a construir en Obreros 12. La limpieza del predio se realizó días después de los sismos, tarea donde participaron los vecinos y trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia. El 26 de octubre siguiente iniciamos los trabajos constructivos. Esta acción -que se dio antes del decreto expropiatorio- jugó un papel político importante, ya que ante la opinión pública la Unión demostró su capacidad organizativa y técnica, y a la vez la incapacidad del Estado.

Para el desarrollo de los proyectos, una vez que se tenían los recursos, y las propuestas, era imprescindible otro factor básico y fundamental para dar concreción al proyecto: la confianza de la gente. Es importante señalar la importancia del papel que debe jugar un arquitecto dentro del desarrollo del proceso constructivo. Por lo general, está acostumbrado a desarrollar un papel meramente técnico sin meterse en la parte organizativa de los vecinos y tampoco a desarrollar un trabajo político. En nuestro caso, los arquitectos jugaron un papel técnico-organizativo.

Para la construcción tuvimos la posibilidad de experimentar (en términos arquitectónicos) la autoconstrucción, algunos elementos de la construcción participativa, la construcción a través de la constructora, la administración y la autoad-

ministración. Todas estas con el propósito fundamental -repito- de buscar cómo hacer que la gente participara e hiciera suyo el proyecto:

La autoconstrucción. Se dieron cursos de albañilería, plomería y electricidad a los vecinos con la finalidad de que ellos se hicieran cargo de la obra. Esto fue considerado en un momento como un ahorro, ya que se prescindía de pagar mano de obra calificada. Sin embargo, en la realidad resultó que la obra se desarrolló a un ritmo lento (con los costos derivados de esto) debido al tiempo limitado que pueden dedicar los vecinos a la autoconstrucción. Además, los vecinos poco acostumbrados a desarrollar este tipo de trabajo, no lo hacen con el mismo profesionalismo de alguien que vive de eso. Añádase el agotamiento físico que implica para los vecinos realizar labores de construcción después del horario de trabajo asalariado.

La construcción participativa. En el proceso interviene los técnicos, la mano de obra calificada, los vecinos capacitados y los vecinos de la obra. Con esta opción se reducen los tiempos de construcción de la obra, aunque también implica cansancio y desgaste para los vecinos. Puede funcionar en obras pequeñas y no complicadas.

La constructora. Su intervención altera la inversión monetaria y el costo final de la obra, reduce el tiempo de terminación de las viviendas y se garantiza la calidad de las mismas por los vecinos, a quienes se les dan previamente las orientaciones necesarias para la supervisión. Como los vecinos establecen su horario de trabajo, pueden realizar otras tareas en la Unión.

La administración. La parte constructiva está a cargo de mano de obra calificada. La Unión centraliza los recursos, los vecinos orientados por los arquitectos contratan la mano de obra, cuantifican el material, compran los materiales, pagan a los albañiles, hacen reporte, supervisan la obra. El estar involucrados en todos estos pasos, les hace aprender no a construir, sino a tener conciencia de todos los pasos de la obra y la responsabilidad que tienen si no cumplen con alguna tarea.

La autoadministración. La parte constructiva está a cargo de mano de obra calificada mientras que los vecinos desarrollan tareas puntuales dentro de la obra (acarreos). Los vecinos orientados por su responsable de organización y por un técnico tienen la responsabilidad del manejo de los recursos; del suministro de los materiales; del pago a los albañiles; de llevar la administración y la contabilidad y de entregar reportes periódicos a la Unión, a los propios vecinos y a la fuente de financiamiento, así como de supervisar la obra.

Realizarlo implica que los propios vecinos sean quienes formen sus tiempos de trabajo, formen comisiones que distribuyan las responsabilidades -en función a cualidades personales y a la confianza que se tengan entre ellos. Como sea, este modelo implica que los vecinos dediquen tiempo importante para cumplir con su responsabilidad y por lo tanto es poco probable que realicen otras tareas de la Unión. Por lo mismo debemos tener una visión más objetiva de las consecuencias de su trabajo.

Con todas estas variantes, logramos construir 164 viviendas nuevas, 6 comercios y rehabilitar 24 viviendas en un periodo de poco más de dos años, beneficiando a una población aproximada de mil habitantes. Las vecindades donde se construyó fueron las siguientes:

Carpintería 17
Carroceros 52
Constancia 72
Ferrocarril de Cintura 50
Gorostiza 36
Labradores 23 y 79
Lecumberri 18-20
Miguel Domínguez 11
Mixcalco 45
Obreros 12
Relojeros 42
Sastrería 102
Tapicería 88

Es importante señalar que las relaciones con el gobierno fueron conflictivas. En el periodo en que Parceró López estaba a cargo de RHP se tuvieron problemas con este organismo, no obstante que retomaron nuestras propuestas y las integraron a su política populista. Para el gobierno RHP significó un mecanismo para revitalizar al PRI durante la reconstrucción. Por ello, cuando ven que nuestro proyecto fortalece a la Unión empiezan a crear desconcierto y miedo entre la gente hacia nosotros; todo eso con el fin de incorporar esa población a las medidas oficiales de cooptación partidista.

Con Aguilera la situación cambia: creo que evaluaron la conveniencia de limitarse a darnos tan sólo lineamientos de construcción, ya que por más que construyéramos (aún sumando el esfuerzo de otras organizaciones) no pasaríamos de hacer más allá del 3% de la reconstrucción del D.F.

- ¿Cuál sería el balance de la reconstrucción realizada por la Unión?

En lo organizativo, la Unión crece. Es con base en sus mejores cuadros que los miembros de las vecindades reconstruidas sienten no sólo un compromiso moral para con la Unión, sino también se ha despertado una consciencia social de tal manera que permanecen apoyando y solidarizándose con otros compañeros que no han resuelto su problema de vivienda, involucrándose en otras tareas de la Unión o del Movimiento Urbano. No pudieron faltar los elementos negativos de quienes simplemente esperaron la entrega de su vivienda y cerraron las puertas de sus casas a la Unión; fue el caso de quienes no dieron el paso a la consciencia política.

En cuanto a lo constructivo, la población de la zona no puede evitar comparar lo hecho por la Unión y lo hecho por RHP. El saldo resulta positivo para nosotros: viviendas de mejor construcción, 10 m² más de superficie que las de RHP, zonas

de tendido y convivencia. Aunque fue sumamente desgastante permitió el desarrollo de un proceso educativo que amplió las posibilidades de comunicación y cohesión dentro de la Unión. El hecho de contar con mejores condiciones espaciales a las de RHP garantiza que los pobladores no saldrán del barrio. Además, se descarta la posibilidad de expulsión dado que el financiamiento está organizado por los propios miembros de la Unión, quienes realizan planes de pago de las viviendas en contacto con la realidad y atendiendo a sus prioridades, y no desde un escritorio burocrático, donde se priorizan políticas corporativistas, como es el caso de RHP.

Ahora, en lo que respecta a los alcances políticos, inicia la reconstrucción antes que el gobierno y ser los primeros en entregar viviendas; así como dar a conocer nuestras condiciones financieras y poder cumplir con el compromiso con los vecinos fueron hechos que demostraron la capacidad que tiene la sociedad para dar respuesta a los problemas sociales, en este caso la vivienda.

En conclusión, el balance que hacemos de nuestra actividad en la reconstrucción es positivo: significó crecer organizativamente y nos dimos a conocer en la zona. Esto lo hemos visto con el tiempo, porque en el momento de la realización de la reconstrucción, por ser ésta tan agotadora, llegamos a pensar que provocaría desmovilización y distracción entre la gente, lo cual se reflejaba en la conducta dentro de la Unión. No obstante, es importante recalcar que los esfuerzos que realizan las organizaciones populares y los recursos con los que ellas puedan contar son muy limitados frente a la magnitud de los problemas sociales que padecen. Es fundamental partir del hecho de que es un deber del gobierno mexicano dotar de vivienda a la población necesitada y, no sólo a la que puede pagar los créditos que otorga (que son una minoría).

Por todo esto sabemos que es importante transmitir esta experiencia y pensar en términos del MUP para que esta demanda reivindicativa-política pueda ser atendida de manera masiva: ejemplo de esto último es la Asamblea de Barrios y Organizaciones Vecinales (APOV), creada en abril de 1987.

Los programas de reconstrucción no gubernamentales: casos de la colonia Guerrero

GEORGINA FLORES

Introducción

Uno de los efectos negativos que generaron los sismos, fue el acrecentar la crisis de la vivienda, el problema afectó a diferentes clases sociales, de ellas las más dañadas fueron las clases populares, las cuales desde los primeros momentos, desbordaron su participación ante la emergencia, rescatando víctimas, abasteciendo de víveres, instalando campamentos provisionales, etc.

Algunos grupos de damnificados al no encontrar una respuesta inmediata por parte del Estado sobre la reconstrucción de viviendas propusieron sus propios proyectos de reconstrucción. Fue el caso concreto de la colonia Guerrero, situada dentro de la vieja zona céntrica de la ciudad de México.

En la colonia Guerrero -distinguida por una gran experiencia en cuanto a organización ya que sus pobladores han tenido que enfrentarse al problema inquilinario y las políticas de remodelación del centro de la ciudad- dos organizaciones decidieron enfrentarse a la reconstrucción, la Unión de Vecinos de la Colonia Guerrero (UVCG) creada en 1975, y Campamentos Unidos, organización que se creó después de los sismos.

I. Proyecto de la Unión de Vecinos de la colonia Guerrero (UVCG)

La Unión de Vecinos toma la iniciativa en la reconstrucción. Con anterioridad había realizado trabajos de rehabilitación en vecindades sustituyendo techos deteriorados (Sol 199), asesorados técnicamente por Casa y Ciudad, A.C. Desde las primeras horas pasados los sismos la Unión realizó trabajos de apuntalamiento y dictámenes en vecindades de toda la colonia apoyados por sus asesores técnicos.

El proyecto de reconstrucción de la Unión, contó con la participación de diferentes grupos como: Casa y Ciudad, A. C. (asesoría técnica), Corporativo de Estudios y Asesoría Jurídica (asesoría legal), Fomento Cultural y Educativo A. C. (asesoría administrativa), la Parroquia de Nuestra Señora de los Angeles, asociaciones que crearon Promoción de Actividad Socioeducativa (PASE).

Se planteó como objetivo la construcción de vivienda nueva para aquellas vecindades que fueron destruidas totalmente y, la rehabilitación de vivienda, reforzando o reestructurando la vecindad.

El financiamiento fue otorgado por varios organismos y grupos extranjeros, principalmente OXFAM y Catholic Relief Services (CRS).

Los trabajos en la reconstrucción empezaron con la demolición de tres vecindades y la capacitación de los vecinos sobre los procesos de construcción mediante cursos de albañilería, electricidad y plomería.

Una vez dados los primeros pasos, en el mes de octubre de 1985, se inició la construcción en Lerdo 132, la mano de obra que se utilizó inicialmente en el proyecto era aportada por los propios vecinos además de albañiles y arquitectos de Casa y Ciudad, llevando a cabo una construcción de carácter participativa.

Posteriormente, para agilizar las obras y evitar el aumento de sus precios se encarga el trabajo a constructoras privadas, con supervisión de los asesores y de la Unión. De la primera experiencia sobre el trabajo participativo, uno de los miembros de la Unión señala que:

"Ayudamos a cargar tabiques, a hacer la mezcla, a hacer los arillos, a abrir cepas, para que se levanten las viviendas. La vivienda es de una recámara, y va a ser de dos pisos. Trabajamos desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde incluso sábados y domingos para ir avanzando más". (1)

El proyecto se abrió a la participación de cualquier habitante de la colonia, independientemente de que fuera miembro de la Unión, los únicos requisitos eran: que los inquilinos de la vecindad estuviera organizados, que acudieran a la Unión para integrar su vecindad, comprometerse a participar en los trabajos de construcción y a pagar sus viviendas.

Las viviendas que se construyeron mejoraron las condiciones de vida de los habitantes de aquellas viejas vecindades, hoy cuentan con una vivienda que contiene: dos recámaras, una cocineta, sala-comedor, un baño y un pequeño patio al interior de la vivienda. Se respetaron los espacios comunes y la convivencia que había anteriormente en la vecindad.

Las condiciones de pago se dan bajo un contrato en el que se especifican: el precio de la vivienda, los pagos acordados dependiendo de la capacidad económica de la familia sin rebasar el 20% de su ingreso familiar, con un interés del 10% anual para todos los casos.

En total se construyeron ocho inmuebles: Sol 138, 108 y 46, Lerdo 132; Camelia 102; Félix U. Gómez 137 y Zaragoza 204. Se repararon las vecindades de Marte 122 y Soto 263. En total se produjeron 157 viviendas todas sobre predios expropiados.

II. Proyecto de Campamentos Unidos

Ante la confusión sobre cómo se llevaría a cabo el proceso de reconstrucción nace el 14 de octubre de 1985 Campamentos Unidos formado por 4 vecindades: Pedro Moreno 163 y 142, Zarco 78 y 81.

Su primera actividad fue instalar campamentos en la calle para dar seguridad a la gente que vivía en vecindades muy dañadas. Sus principales demandas ante la delegación Cuauhtémoc eran: peritajes, ampliación del decreto expropiatorio y campamentos.

Con una organización ya estable y el apoyo de otras vecindades se consiguió la asesoría de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Así un grupo de alumnos y maestros del Taller Max Cetto conjuntamente con la organización deciden llevar a cabo un proyecto de reconstrucción de vivienda que se caracterizó por una autoconstrucción mixta, la cual tenía como objetivo abaratar los costos de construcción en tanto que los vecinos aportaban la mano de obra.

Los trabajos en la reconstrucción empezaron con la participación del área técnica en los anteproyectos de vivienda, paralelamente se capacitó a la gente en cursos de albañilería, plomería, carpintería y electricidad. Mientras tanto las tareas sobre la organización, abastecimiento de víveres, salud, etc. continuaron dentro de la organización.

El proyecto fue financiado por diferentes organismos como: Junior League, Cruz Roja Suiza, Casa de los Amigos, Comité Comunitario Mexicano de Ayuda a los Damnificados (CEMAD), FIAN, UNICEF, Crisantemo Amarillo, Iglesia Luterana y otros.

Los trabajos de demolición empezaron en Zarco 78. Tanto para los alumnos como para los vecinos es la primera "obra-escuela". El testimonio de uno de los miembros de la organización señala que con esta obra lograron conjuntar un trabajo de equipo:

"Lo que aprendí en la obra pero, me costó mucho trabajo fueron los amarres, los hacía al revés, no sabía cómo hacerlos por más que me decían. Mi primer tabique lo tuve que quitar y volver a poner. Los muchachos me enseñaban, especialmente Fernando, yo le daba los tabiques y él los pegaba, después, él ponía una hilera y yo otra. No teníamos albañiles hasta que después se contrataron".
(2)

Los estudiantes elaboraron los proyectos de acuerdo a la problemática del suelo y a las sugerencias de la población, los prototipos incluyeron: dos recámaras, una cocineta, sala comedor, un baño y un pequeño patio interior, además de todos los acabados.

El proyecto original contempló la construcción de 25 vecindades en la colonia Guerrero (de las cuales 7 predios eran expropiados y los 18 restantes fueron adquiridos por compra-venta) además de 3 vecindades que se ubican en la colonia Atlampa. Los predios incluidos en el proyecto son:

Colonia Guerrero

| | |
|-----------|---------------------------------------|
| Camelia | 75* |
| Degollado | 93 y 94 |
| Guerrero | 158* |
| Héroes | 201 |
| Lerdo | 106 y 157* |
| Luna | 138 |
| Mecánicos | 141* |
| Mina | 98 |
| P. Moreno | 142, 194, 133 y 138 |
| Soto | 108 |
| Violeta | 15 |
| Zaragoza | 217 |
| Zarco | 90, 78*, 67, 69*, 100, 81, 197* y 245 |

Colonia Atlampa

Nopal 90, 96 y 140

* predios expropiados.

Del proyecto original de 28 vecindades, hasta el mes enero de 1988 se construyeron 10 vecindades (120 viviendas) y las 3 de Atlampa (66 viviendas), existe una vecindad en demolición y se espera que en una segunda etapa de trabajo se concluyan 50 viviendas más.

El precio de la vivienda y las facilidades de pago dependen de la participación de la familia en la Autoconstrucción Mixta, así podrán obtener a menor precio su vivienda.

La actividad de Campamentos Unidos intenta ir más allá de la reconstrucción habitacional, por lo que para mejorar el nivel de vida de sus miembros instaló la Unidad de Promoción y Atención a la Salud de Campamentos Unidos (UPASCU), la cual ha promovido comités de salud, cursos de medicina preventiva, enfermería, alimentación, etc. También instaló una tienda de abasto de productos de primera necesidad y una cooperativa de producción (carpintería), la cual produce muebles para la propia organización y realiza algunas ventas en forma directa. Instaló un Centro de Estudios del Barrio, en apoyo a la investigación.

III. Evaluación de los proyectos

El presentar dos programas de reconstrucción independiente, nos lleva a hacer una pequeña evaluación.

El hecho de que las organizaciones de damnificados opten por sus propios programas de reconstrucción, muestra la acción del trinomio: damnificados, asesores técnicos y organismos financieros, el cual nunca se había podido lograr dentro del problema de la vivienda, mostrando una expansión cuantitativa y cualitativa en estos casos.

El trabajo era difícil, la participación de los asesores técnicos jugó un papel importante, así como la capacitación previa de los vecinos en las obras de construcción. No se trataba de un laboratorio de experimentación, los trabajos

demonstraron un profesionalismo de arquitectos, alumnos y de los propios vecinos, lo que sí se experimentó fue un trabajo conjunto, siendo el principal problema la participación constante de la gente en las obras, por lo que la autoconstrucción implica: una serie de problemas, desgaste físico, avances o lentitudes en las obras, costos, etc.

NOTAS

- (1) Entrevista a Juan Manuel Zúñiga P., por Carmen Llorens, en Revista el Cotidiano enero-febrero, año II, núm. 9 1986, pág. 56.
- (2) Entrevista con la Sra. Isabel Cisneros.

LOS PARTIDOS POLITICOS EN LA RECONSTRUCCION

DAVID CERVANTES

1985

19 DE SEPTIEMBRE

Las organizaciones políticas no estaban capacitadas para dar una respuesta como tales. La militancia se suma a las tareas de emergencia de manera individual, con familiares, amigos y/o grupos de compañeros de organizaciones políticas. El tipo de participación es de elemental solidaridad como ciudadanos.

27 septiembre

IZQUIERDA

DERECHA/ESTADO

Situación de Emergencia

La población civil estaba volcada en las tareas de rescate y solidaridad, la acción era espontánea mientras el gobierno era incapaz de dirigir tal acción, las organizaciones políticas se mostraron limitadas para ponerse a la cabeza.

Se lleva acabo la primera reunión para la Unidad de Acción que daría lugar a la conformación del Comité Popular de Solidaridad para la Reconstrucción (COPOSOR). Asisten: Partidos y Organizaciones Políticas de Izquierda (PMT, PSUM, PRT, ORI-LM, ACNR, MRP, ULR y otras); organizaciones sociales (Coordinadoras Nacionales:CNTE, CONAMUP, COSINA, etc.); organizaciones civiles; voluntarios, etc. Más de 80 organizaciones. Se podría decir que era la Asamblea Nacional Obrera, Campesina, Popular (ANOCPP) ampliada.

PRI- Actuación a nivel declarativo "apoyo a damnificados"/su aparato rebasado/su base dispersa.

Contradicciones en sus declaraciones al interior del gobierno y al interior del PRI y entre el PRI y el Gobierno.

PRI- empieza a actuar su aparato pero espontáneamente sin claridad a largo plazo. Burdamente quiere ganar presencia entre los damnificados.

Organiza albergues fuera de las zonas de damnificados.

Surgen diversas posiciones:

- 1) Coyuntura de asalto al poder.
- 2) Coyuntura para desarrollar un movimiento político amplio.
- 3) Es prioritaria la ayuda solidaria a damnificados, sin involucrar lo político.

Ya para entonces, las organizaciones políticas reagrupaban sus fuerzas y discutían sobre la coyuntura y sus perspectivas.

También comienzan las declaraciones de los partidos en la Cámara de Diputados (denuncias y reclamos al gobierno).

Algunas organizaciones políticas de izquierda como PPR, MRP, OIR-LM, ORPC, POS, PRI, ACNR, lograron "insertarse" directamente en organizaciones de damnificados. Existe entre algunas de ellas una instancia de coordinación: la Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria (UNIR).

Continúan las declaraciones.

Octubre

Principios de Evidencia e interpretación

Va cediendo la situación de emergencia y se va pasando a la etapa de reconstrucción.

El gobierno va teniendo más control en la medida en que la población civil va dejando de participar y que el mismo gobierno "coarta" esa participación.

Los sismos generan una nueva situación que pone al orden del día y muestra crudamente aspectos contradictorios fundamentales de carácter económico, social y político como:

- La necesidad de vivienda aumenta espectacularmente y con ello se agraban las condiciones de vida de un gran sector de la población.

- La política económica del Estado no se orienta a resolver los problemas sociales, incluso se le hace un grave cuestionamiento por el pago de la deuda externa.

COPOSOR.- Se da una estructura orgánica y se traza un objetivo más claro: apoyar a damnificados y elaborar proyectos de reconstrucción alternativos; pero al mismo tiempo va desvaneciéndose la posibilidad de ser una verdadera instancia Coordinadora de los damnificados y para la centralización del apoyo. No hay claridad en los proyectos y alternativas debido a: diferencias políticas entre las organizaciones/ una creciente coordinación directa entre las organizaciones de damnificados/ se retiran algunas organizaciones y otras participan sólo como mimbres (incluso los partidos)/ las tareas recaen en algunos grupos con capacidad limitada.

Las direcciones de los partidos privilegian su actuación de aparato en la Cámara.

PRI- continúa su actuación igual/la definición de la política a seguir hacia damnificados se empieza a cocinar/se manifiesta contundente la centralización del poder/ Miguel de la Madrid define verticalmente. Se dan algunas contradicciones en las declaraciones del gobierno y en el interior del PRI algunas contradicciones en sus posiciones.

- Se evidencia la falta de democracia, principalmente en el Distrito Federal.

Existe un potencial estallamiento de convulsiones sociales por la situación de agravamiento de las condiciones de vida y trabajo y, ante la falta de espacios democráticos.

La Izquierda pone en evidencia su falta de inserción en el pueblo y no es capaz de dar al movimiento una orientación más política. Su actuación es más bien para lograr esa inserción; manifestando además un fuerte inmediatismo.

No se logra una sólida y permanente coordinación de las fuerzas políticas y más bien se da la coordinación a nivel de las organizaciones de masas.

Destaca la actuación de dirigentes sin partido que comienzan a ganar presencia en las organizaciones de damnificados.

Mediados de octubre

Se dispersan las fuerzas políticas y con ellas, las expresiones de la lucha:

* Los Partidos en la Cámara.

* Las organizaciones dentro del movimiento; que son envueltas por la dinámica propia de las organizaciones sociales (su necesidad de organi-

COPOSOR pasa definitivamente a segundo plano. Se conforma la CUD.

El COPOSOR se reduce poco a poco a una instancia que canaliza apoyo a los damnificados y lejos va quedando la posibilidad de ser una instancia unificadora y orientadora de la lucha, menos aún capaz de elaborar propuestas de recons-

Decreto expropiatorio/se delinea la política de reconstrucción.

RHP toma medidas, que sin hacer uso de la represión directa (como principal forma de respuesta) le rinde buenos frutos en el sentido de desarticular esa fuerza social explosiva (desconecta sutilmente el detonador de la bomba).

zarse y sus demandas inmediatas).

Las organizaciones sociales de damnificados abren cauces particulares de negociación.

El movimiento popular y democrático en su convulsión no rebasa la labor de mera solidaridad.

Los espontáneos regresan a sus casas.

Los partidos políticos y la CUD pugnan por la ampliación del decreto expropiatorio, pero la respuesta del gobierno es tajante por ese lado, aunque deja abierta la posibilidad de una alternativa diferente para dar respuesta a las vecindades no expropiadas.

trucción alternativa.

Se dispersa más todavía el accionar de las fuerzas políticas. Estos responden desde su particular campo de acción y con sus limitadas fuerzas y por más que algunas alcanzan a vislumbrar la respuesta necesaria, las posibilidades serían limitadas. Es la continuidad de su accionar anterior a los sismos, aunque ahora con nuevas demandas y nuevos actores en el movimiento de masas.

No hubo que esperar una respuesta mas autoritaria y represiva por parte del Estado, la propia izquierda en vez de hacer confluir la lucha de los sectores de masas y de las organizaciones políticas en un movimiento amplio cuya lucha se desarrollara en tres ejes fundamentales: lucha antimperialista (contra el pago de la deuda); por los derechos democráticos (espacio de participación en la toma de decisiones ahora para la reconstrucción, mañana para lo demás) y; por la solución a demandas inmediatas (vivienda principalmente). La Izquierda desarrolla un proceso

Da respuestas inmediatas y contundentes a cada uno de los sectores de los damnificados. Así para las organizaciones de colonos, la expropiación y la creación de RHP son la primera gran medida que permite al gobierno, ante este sector, un respiro en las negociaciones y recupera en un instante gran parte de su capacidad de maniobra frente al cuestionamiento que se venía generalizando; aunque esto lo haya llevado a enfrentar contradicciones con otro sector: los casatenientes, con el que la negociación era evidentemente más fácil, además de que a largo plazo esta medida daría sus frutos para la "refuncionalización" de la estructura urbana.

De este modo, se da línea al PRI de como actuar en el movimiento de los damnificados.

El PRI y sus paleros se encargan de dar "rimbombancia" a la medida expropiatoria, como gran acto patriótico y es a partir de ello que comienza una labor más clara para colocarse a la cabeza del movimiento de los damnificados

levantan demandas generales, a las que el gobierno se ve obligado a dar respuesta en lo inmediato, para aliviar la situación y dar tiempo a mejores condiciones, para actuar como siempre, de manera impositiva.

| <p>Noviembre Opinión Pública-Prensa</p> | | <p>Renovación Habitacional Popular- PRI</p> |
|---|--|---|
| <p>Ante la opinión pública va quedando salvada la imagen presidencial, el PRI avanza en su inserción entre los damnificados y va "ganando" espacios en los medios de comunicación. Se desvía la atención hacia RHP como responsable directo de la reconstrucción.</p> | <p>Los Partidos continúan su actividad de denuncia y de demandas básicamente a nivel parlamentario.</p> | <p>Se combina su actitud en la búsqueda de ganar legitimidad y consenso, y al mismo tiempo de resaltar presencia y capacidad organizativa a las organizaciones de la CUD</p> |
| <p>Se utiliza una política de apertura y flexibilidad en el trato directo con las organizaciones de la CUD, para ello es importante la experiencia de funcionarios como José Parceró López.</p> | <p>Las organizaciones dentro del movimiento desarrollaron su actividad fundamentalmente sobre los siguientes ejes de trabajo:</p> | <p>RHP. despliega su capacidad cubriendo fundamentalmente la parte administrativa de su proyecto:</p> |
| <p>Se desvanecen las expectativas de algunas organizaciones de izquierda no parlamentarias.</p> | <p>A) Tareas de organización. Dar estructura y consolidar a organizaciones que surgen con los sismos. Adecuar funciones y enfrentar el crecimiento de las organizaciones existentes antes de los sismos.</p> | <p>Censos por vecindades, entrega de credenciales de reconocimiento de derechos, conformación de los comités de reconstrucción, etc.</p> |
| <p>La CUD muestra su potencial real y el movimiento democrático en su conjunto se mantiene disperso.</p> | <p>B) Relacionado con lo anterior, hacer frente a la labor de zapa del PRI, tratando de conservar las fuerzas, evitar división y denunciar imposiciones, coerción, corrupción, etc.</p> | <p>Con esto se conjuga la labor del PRI (con la complicidad de RHP) corporativizando a los damnificados a través de la imposición de la integración de los comités de reconstrucción y su pertenencia a la federación de comités de re-</p> |

No existe coordinación política y las organizaciones políticas priorizan cada una su trabajo a nivel de organizaciones sociales (conformación de organizaciones de masas).

Todo lo anterior se refleja en otro fenómeno importante:

- La CUD carece de una orientación política a largo plazo.

- Las organizaciones de la CUD se "sumen" en su dinámica propia.

- Se confronta un proyecto no existente al proyecto de reconstrucción del Estado. Reconstrucción Democrática; respeto a las organizaciones sociales, respeto al arraigo de los vecinos en su zona, respeto a las tradiciones culturales, vivienda económica, etc. son algunos de los principios y/o criterios que contendría una propuesta alternativa a la del Estado, pero que no se concreta como planteamiento común de la CUD.

Esto genera en mayor o menor medida confusión en cada una de las orga-

C) Buscar la solución al problema de vivienda con los propios medios de las organizaciones sociales ante la incapacidad del gobierno de dar respuesta rápida.

D) Encauzar demandas conjuntas a través de la CUD, (sostenimiento de la movilización-negociación).

Esta dinámica lleva a:

- Desgaste de algunos cuadros políticos y cuadros más activos de las organizaciones sociales.

- Falta de coordinación política entre organizaciones políticas.

- Avances desiguales en el nivel organizativo de las organizaciones sociales y en el encuentro de soluciones inmediatas a las negociaciones de reconstrucción de cada colonia.

Y al mismo tiempo a:

- La conformación de algunas organizaciones estables y el fortalecimiento de otras en términos cuantitativos.

construcción, organización que crea el PRI o contraposición a la CUD y buscando legitimar la aglutinación mayoritaria de los damnificados en las filas del PRI y consiguiendo su representatividad para abordar y conducir la lucha de los damnificados. El PRI avanza sobre la línea, con el apoyo de RHP y mediante la utilización de sus métodos conocidos de imposición y coerción, se satura a las organizaciones dependientes, se utiliza el chantaje psicológico, etc.

Sin contar todo el espacio que abre el aparato gubernamental (delegaciones, DDF, etc. a través de los medios de comunicación).

El PST impugna a RHP su incapacidad de dar solución a los damnificados y utiliza la movilización como método de presión (negociación a las alturas), dando algunas soluciones a los damnificados.

izaciones en cuanto a la reconstrucción necesaria y a quién debe responsabilizarse de ello, lo que a su vez acentúa la división entre los damnificados organizados y los no organizados.

Las organizaciones que captaron mayor apoyo en recursos económicos y técnicos para desarrollar proyectos propios de reconstrucción -que logran dar respuestas parciales, pero concretas a la necesidad de vivienda- lograron ponerse a la delantera de Renovación Habitacional Popular, que sólo tiene capacidad hasta ese momento de implementar la parte administrativa de su proyecto mientras que en el aspecto técnico y financiero no hay nada claro.

-Ampliar consenso de algunas organizaciones sociales a nivel de sus zonas de influencia.

1986

Enero

RHP-PRI

La dinámica interna de las organizaciones de la CUD y la dinámica burocrática en la que RHP se sumerge, impiden más seriamente la coordinación política y la definición de una política a largo plazo.

Además, la incapacidad e imposibilidad de las organizaciones para rom-

Los partidos continúan igual, sólo desde la Cámara, aunque van introduciendo nuevas demandas conforme avanza el proceso: contra las revocaciones, por el no avance real en la reconstrucción, por el abuso de autoridades. Mantienen las demandas de democratización del D.F., y contra el régimen de

El PRI en el DF se fortalece continuando su política antes descrita, logra armar su aparato (Federación de Comités de Reconstrucción) y su inserción entre los damnificados. Dado este paso y al no haber resultados concretos por parte de RHP (más que en la maraña burocrática-administrativa en que metió

per este círculo vicioso, repercute incluso en la política que éstas siguen, dentro de ese mismo proceso, en las negociaciones que se refieren a la demanda de una reconstrucción democrática.

La experiencia desarrollada con los recursos propios por las organizaciones (los llamados hechos demostrativos), brindaba elementos y planteaba con hechos, los rasgos esenciales que debía contener ese proyecto de reconstrucción democrática por el que se pugnaba, pero no hubo la habilidad de estructurar estos elementos en un proyecto concreto que se contrapusiera al proyecto de RHP y que podía haber permitido un fortalecimiento de la CUD, de sus organizaciones, y como aglutinador de los damnificados en su conjunto.

Sin embargo, no puede negarse que estos "hechos demostrativos" significaron una presión real por sí mismos para el gobierno y de ahí que no fueran casuales algunas políticas y criterios que empezó a manejar RHP (no habría mucho

condominio.

El efecto organizador y aglutinador que tienen los proyectos de reconstrucción independientes empieza a ceder ya que se van evidenciando sus limitaciones. Han servido como hechos demostrativos y han cumplido como medios de organización.

Se plantea entonces la necesidad de demandar respuestas reales e inmediatas a Renovación Habitacional Popular de manera urgente.

Esto pasa, sobre todo en algunas colonias por un proceso de mayor concientización de las bases de las organizaciones para ubicar con mayor claridad la política que había venido aplicando el Estado y su responsabilidad en la no solución a las demandas de los damnificados.

La CUD ha logrado mantener su fuerza y su capacidad de movilización, sin embargo, en las negociaciones el ritmo y la dinámica lo va imponiendo cada vez con mayor claridad el gobierno.

a las organizaciones de damnificados y a damnificados no organizados) el PRI aprovecha esta etapa ofreciendo entre otras cosas, certificados de derecho. El PRI pasa a una radicalidad verbal e incluso a la movilización para mantener y/o fortalecer su imagen de defensor de los derechos de los damnificados, exige al DDF y a RHP hechos concretos (casas).

RHP

No puede resolver la concretización del programa de reconstrucción fundamentalmente porque no se ha resuelto a nivel gobierno -la Banca Internacional fija el monto del presupuesto para la reconstrucción- se marcan algunas normas y criterios técnicos financieros pero se inician masivamente la reconstrucción. Estos criterios modifican y la cosa no se ve clara.

Este empantanamiento de RHP (aunque en realidad el organismo no puede dar más pues arriba se definían las cosas) genera una fuerte presión sobre Parcerio Lopez, no sólo de la CUD

casa y ciudad

ación más allá de reindicaciones en torno a la reconstrucción, como la elección de jefes de manzana -experiencia que será un punto de confluencia y coordinación, aunque muy puntual, a nivel de las organizaciones políticas-.

s en estos momentos cuando se puede decir que el gobierno reafirma su control, cierra pinzas y vuelve a la "normalidad" pero, con una nueva experiencia que irá asimilando para poner en práctica con mayor eficacia, su proyecto económico y político antipopular en futuros programas de su política urbana.

la Izquierda y las organizaciones sociales vuelven al cauce "normal" de su actividad política, en el marco de un reflujo general del movimiento democrático en el ambiente previo del mundial de fútbol.

En el movimiento de los damnificados aún se percibe algo del espíritu combativo y explosivo de los meses anteriores y existe expectación en cuanto a la reconstrucción; ésta inercia impi-

elecciones de jefes de manzana, coyuntura en la que se persigue ampliar presencia, desarrollar campañas de denuncia, ganar posibles espacios de lucha y tener una experiencia en el ejercicio de los derechos democráticos y políticos del pueblo (aunque claro, en el terreno del enemigo).

No se plantea impedir o presentar alternativas a la aprobación de ley de condominio en la Cámara.

darse la firma del Convenio de Concertación Democrática para la Reconstrucción, en el que se permita el campo y los compromisos para la actuación de todos los participantes en la reconstrucción "legalmente" y ante la opinión pública.

Esto además de tener claros objetivos políticos, en el control del proceso de la reconstrucción obedece al juego interno del PRI donde ya se empiezan a jugar las cartas de la sucesión presidencial. Las corrientes y las personas buscan mejores posiciones para esta contienda.

Es también en esta etapa que se da la aprobación en la Cámara de la Ley de Régimen de Propiedad en Condominio para los inmuebles expropiados y es también cuando se presenta la coyuntura de elecciones de jefes de manzana y Consejo Consultivo, en la que el PRI-gobierno recuerda a la ciudadanía que no hay cambio real, que el autoritarismo y la antidemocracia siguen siendo las líneas de la política de este régimen.

de comprender con toda objetividad los pasos que el gobierno está dando y su implicación a largo plazo.

Podría plantearse que se da un "desfase político puntual" entre la política de las organizaciones políticas y la política del Estado debido a que el desgaste y la espontaneidad de los meses anteriores permea la visión y el accionar de las organizaciones sociales.

Junio

En esta etapa, el gobierno da tiempo al tiempo, habiendo tendido todas las redes y con los hilos en la mano; ya sólo es cosa de sostener con habilidad la política trazada, Manuel Aguilera y Camacho Solís, juegan en esto un papel fundamental.

El PRI y el gobierno explotan al máximo ante la opinión pública los pasos y las acciones de "concertación" que se van dando en el proceso el gobierno recupera por lo menos en torno al problema de los damnificados legitimidad y con-

De los partidos de izquierda no había nada relevante que mencionar.

Para las organizaciones políticas (para las más "consecuentes") se abre un espacio para consolidar más orgánicamente a las organizaciones sociales y principalmente a los núcleos de vecinos que han mantenido una participación más permanente y comprometida en la lucha. Al mismo tiempo, afianzan su inserción al interior de las organizaciones sociales, se dan intentos importantes a nivel de la coordinación política

PRI-RHP

El PRI mantiene por lado su labor divisionista enfrentando a vecinos en las vecindades que participan las organizaciones independientes y esto además de lograr una división irreconciliable en algunos casos y/o la medida de los miembros de las organizaciones, juegan un papel importante para el gobierno al mantener ocupadas a las organizaciones, apagar estos fuegos que aparecen como lunares en las zonas de influencia de las organizaciones de la CUD.

Por otro lado el

Se entra en un proceso paralelamente a la atención al proyecto de reconstrucción, de intentar definir el rumbo político de la CUD, se dan algunos pasos en este sentido. Al mismo tiempo, se va abriendo paso a la reflexión y al análisis de la situación por parte de las organizaciones políticas, se vuelve la atención, por algunas más que por otras, al trabajo político en el seno de las organizaciones sociales.

La CUD empieza a entrar en una nueva fase de la reconstrucción: Programa Fase II.

La habil política del gobierno a través de Renovación Habitacional Popular-SEDUE-PRI tiene sus frutos ahora en el debilitamiento de las organizaciones vía la corrupción de algunos de sus dirigentes.

la búsqueda de una perspectiva política clara para el movimiento, en particular a su instancia representativa de coordinación: la CUD.

Se hace más patente el desarrollo desigual de las organizaciones (algunas se consolidan, otras se debilitan y otras más se desintegran). En cada una se reflejan errores y aciertos de su conducción, pero en general es un reflejo de la incapacidad del conjunto de las organizaciones sociales y fundamentalmente de las organizaciones políticas de superar el nivel de coordinación inmaturo y de generar nuevos "cuadros" capaces de organizar, sostener y desarrollar el trabajo, la conducción y formación de las bases de las organizaciones. Se entiende que hablamos también de la falta de una orientación política común y a largo plazo del movimiento.

Recurrentemente, esto lleva a que muchos problemas que enfrentan las organizaciones los resuelvan cada una por su cuenta y de acuerdo a los recursos y posibi-

lidades de ellas.

sigue explotando políticamente los actos de entrega de certificados de derecho de vivienda nueva, etc.

Se centra, como ya se dijo la atención a los damnificados en SEDUE y RHP y de la firma del Convenio de Concertación Democrática se derivan acciones y compromisos en los que se involucran a las organizaciones de damnificados y grupos independientes que participan en la reconstrucción.

Un ejemplo de ello es la conformación del "Comité Técnico" para revisar y aprobar los proyectos de vivienda atípicos. En esta instancia se da juego a grupos técnicos y universidades que apoyan a las organizaciones, el gobierno manejó esto como una expresión del espíritu de democracia que se le quería dar a la reconstrucción y del respeto a las organizaciones y proyectos independientes. En realidad, esta instancia resultó un paso más en la maraña burocrática a la que se sometió a las organizaciones para ver resueltas sus demandas más concretas además de

lidades de ellas.

Paralelamente a la atención que cada una de las organizaciones tiene que dar a sus problemas particulares, ya sea en el terreno organizativo o en el terreno de la lucha frente a RHP y al PRI, las organizaciones se involucran en la dinámica de la lucha por el respeto y reconocimiento de sus proyectos de reconstrucción propios (proceso de negociación con RHP-SEDUE y en particular, con el Comité Técnico).

Cada organización en particular y la CUD llegan a desarrollar movilizaciones con las que lograron algunas reivindicaciones parciales (a caso concesiones gratuitas de RHP) pero definitivamente son logros que ya no modifican en esencia el proyecto de reconstrucción del gobierno.

La etapa de la lucha es ya fundamentalmente defensiva. Entre las movilizaciones que se llevan a cabo la que resulta de mayor importancia, es la movilización de septiembre, a un año de los sismos, que a pesar de

servir, como otras muchas cosas, para que las autoridades pudieran mostrar que era una realidad la "concertación democrática"

Por su parte RHP, después de haber definido las políticas y criterios de su programa de reconstrucción (demanda que movilizó en meses anteriores a la CUD), toma medidas para hacer operativo y eficiente el aparato de RHP y ello implica no sólo medidas administrativas, técnicas y financieras, sino también la solución ágil de los conflictos que se van presentando en el terreno político con los damnificados. En lo primero, se da el cambio de funcionarios, simplificación de la estructura administrativa, etc. y para lo segundo, se combina la habilidad personal de Manuel Aguilera y su "brazo derecho", Laura Garza, en el trato directo con los damnificados, con la inclusión, en su equipo de trabajo, de gente con experiencia o militancia en el movimiento democrático, que garantizan la aplicación de la línea de diálogo abierto y flexibilidad en las negociaciones.

la situación ya descrita de las organizaciones y la CUD, aglutina a una gran cantidad de damnificados y miembros de otros sectores que apoyan y simpatizan con las organizaciones de damnificados.

Es contundente en ese acto la capacidad de movilización y presencia que aún mantiene la CUD frente a la movilización de acarreados que lleva a cabo el PRI.

En la CUD, a pesar de esta gran movilización y de que ha logrado sostener actividades coordinadas (foros, actos culturales, conferencias de prensa, etc.) durante esta etapa se manifiesta un debilitamiento expresado en:

- Heterogeneidad de posiciones en su conducción que más que llevarla a una etapa superior, la va llevando a una posible fragmentación.

- Disminuye su presencia ante la opinión pública. No se logra revertir la política de desinformación y aislamiento que aplica el gobierno en los medios comunicación.

Esta política de RHP y su combinación con la negociación por debajo del agua con algunos representantes de las organizaciones de damnificados, tanto de la CUD como del PST, le permite un buen margen de maniobra para resolver los conflictos que se le presentan e ir desarticulando y enfriando la tendencia unitaria y combativa que había manifestado la CUD anteriormente.

A todo esto se agrega, ya para fin de año, la formalización del compromiso del gobierno de llevar a cabo el programa de Fase II y se abre otro largo proceso de negociación con las organizaciones de la CUD.

Por su parte, el PST (haciendo gala de su oportunismo) juega el papel de las dos caras: por un lado, lleva a cabo movilizaciones del Directorio de Damnificados (tomas de oficinas, marchas, tomas de campamentos, algunas muy combativas) como medidas de presión a RHP, mismo que si bien en algunos casos reditúa en ciertos beneficios para los damnificados, están caracteri-

- Embelezamiento de algunos dirigentes "sin partido" por la relación directa que establecen con altos funcionarios de gobierno (vetetismo).

- Sintetizando lo anterior, falta de perspectiva política.

zadas por una participación espontánea de las bases y una conducción caudillista de parte de los activistas del mentado partido. Estas acciones también se caracterizaron por la utilización política que el PST hizo de ellas y por generar enfrentamientos con otros grupos de damnificados.

Por otro lado, utilizó la negociación con grupos del PRI y aún con Aguilera, utilizando su situación de "apéndice del PRI" en la Cámara de Diputados, de cuyo resultado sólo se vieron beneficiados los "altos dirigentes del partido".

Su política oportunista y la corrupción acendrada de sus dirigentes le generó, al ser esto evidente para los grupos de damnificados con mayor experiencia y con una conciencia más clara, un fuerte debilitamiento organizativo del Directorio de Damnificados y de la capacidad de sus líderes para manipular a las bases. Esto también lo llevó a ganarse la hostilidad y la reprobación de la dirección de RHP.

1987

Enero-Marzo

LOS PARTIDOS
ESTAN INMERSOS
EN LA DINAMICA
DE SU PROCESO
DE FUSION

RHP-PRI

El programa de reconstrucción de Renovación Habitacional Popular está a punto de culminar, aunque el gobierno ya lo de por concluido.

Se abre una nueva etapa de la lucha por el mejoramiento de la vivienda encausada en el programa Fase II y por la conservación de la vivienda, su mejoría, el mantenimiento de la población en su colonia, etc.

El gobierno ya ha asimilado la experiencia y se plantea aplicar en programas de vivienda los aportes políticos y económicos que de ella obtuvo.

En la CUD se imprime la dinámica del proceso de negociación con Fase II.

Se hace cada vez más plausible la necesidad de dar un salto cualitativo en la CUD. Varias organizaciones presentan conflictos internos.

Algunos dirigentes han sido aparentemente, y otros realmente, mediatizados por los anzuelos de corrupción lanzados por RHP.

Las organizaciones políticas entran en procesos de readecuación de su trabajo, como una necesidad de responder a los requerimientos de sus propios procesos organizativos, de sus definiciones políticas hacia el movimiento en general, como una necesidad imperiosa que les plantea la situación del propio movimiento.

Las organizaciones que lo tuvieron, logran sostener su proyecto de reconstrucción independiente.

La política del gobierno da sus frutos de mediano plazo y urge concluir este proyecto en función de los problemas de la situación económica general, mostrar ante la opinión pública la eficacia del Estado, dejar lo más libre el camino para "la sucesión".

RHP acelera, hasta donde le es posible, la reconstrucción para concluir el programa en las fechas establecidas. La dinámica de negociación RHP-CUD- organizaciones entra en la etapa de conclusión del proyecto. Esto presiona a las organizaciones a "poner en orden sus papeles" para no dejar algún asunto pendiente fuera de la jugada.

PRI-MTH

Anuncian la conclusión del proyecto, aunque en realidad está rezagada una buena parte de la construcción de vecinda-

des, sobre todo la reparación de vecindades de la zona centro y viviendas en zonas más aisladas.

Se entra de lleno a las negociaciones para el programa Fase II.

El PST sufre las consecuencias de su política oportunista, termina su actuación en la reconstrucción fuertemente debilitado y con crecientes conflictos internos que lo llevan finalmente a una ruptura. En ello tuvo un peso fundamental su actuación en la reconstrucción.

PARTE IV

LA CIUDAD DEL GOBIERNO

ORGANISMOS OFICIALES DE VIVIENDA 1986-1987

GEORGINA R. SANDOVAL

Introducción: Panorama y antecedentes generales sobre la intervención del Estado Mexicano en materia de vivienda

En el período posrevolucionario los pasos más importantes que ha dado la política habitacional del gobierno mexicano han sido:

1. La creación del Artículo 123 plasmado en la Constitución Mexicana de 1917, en el que se obliga a los patrones a dotar de vivienda a sus trabajadores.
2. Modificación al mismo artículo durante el período de Echeverría, en el que se desobliga a los patrones a dotar de vivienda a sus trabajadores y se crean los organismos INFONAVIT, FOVISSSTE, AURIS Y CORETT; los cuales asumen de forma tripartita (gobierno, patrones y trabajadores) la dotación de vivienda.
3. En diciembre de 1983 se expide la Ley Federal de Vivienda, en la que se asienta que los patrones no tienen ninguna obligación para con los trabajadores, sino que le corresponde al Estado "asumir" la dotación de vivienda. Para 1987 el Estado "convoca" al pueblo, trabajadores, empresarios y constructores a solventar el problema de la vivienda, buscando que la participación de los actores y gestores del proceso de la vivienda sea cada vez más comprometida, participativa y eficaz.

La concepción que guía y decide el último sexenio en materia de vivienda considera a ésta como un derecho social que tiene mucho que ver con la necesidad de equilibrar las relaciones obrero-patronales y que está ligado al acelerado crecimiento de la población, la expansión de la industria, el surgimiento de asentamientos a gran escala; por tanto la política habitacional se concibe como un instrumento de la política social para el desarrollo económico.

Para poder llevar adelante esta política, el gobierno mexicano se ve en la necesidad de conciliar diversos intereses con sectores como:

1. La Comunidad Internacional, principalmente la Banca. Frente a este sector pretende aparentar honestidad con el fin de hacerse de recursos frescos; para tal efecto, además de seguir los lineamientos impuestos por dicha Banca, debe crear la imagen de que los organismos de vivienda (FOVISSSTE, INFONAVIT, FONHAPO, FIVIDESU, RHP, etc.) son apolíticos, eficaces y no corruptos.

En 1986, el Banco Mundial otorgó recursos para la construcción de vivienda vía FONHAPO (que tiene entre sus acreditados a Renovación Habitacional Popular).

2. La Iniciativa Privada, en particular la Industria de la Construcción y sus allegadas, a las cuales ofrece incentivos para su reactivación tales como fuerza de trabajo barata y, desde luego, una amplia protección fiscal. No obstante las constructoras declaran constantemente que se encuentran prácticamente paralizadas y grandes sectores de la iniciativa privada exigen al gobierno que abandone su política proteccionista hacia los sectores populares, respondiendo éste con el retiro de subsidios.

3. Las Clases Medias, con las que intenta a toda costa legitimarse, difundiendo una imagen de preocupación, pluralidad y disposición para solucionar la situación existente, ya que éste sector podría representar una amenaza para la estabilidad política.

4. El PRI y sus organismos oficiales. Pone a su disposición todas las instancias en materia de vivienda para su utilización política, pretendiendo que aglutinen las demandas populares, no tanto con el fin de resolver el problema de la vivienda sino para captar votos, sobre todo en épocas electorales.

5. Los Sectores Independientes. Para ellos crea canales aparentes de participación democrática en la construcción de vivienda, aunque, en la práctica los bloquea: hasta ahora, las condiciones operativas, financieras, técnicas, jurídicas

y sociales las impone el propio gobierno en coordinación con el Banco Mundial, limitando la posibilidad de una auténtica participación democrática.

Para una mejor comprensión del problema es importante tener en cuenta:

a) La situación económica del país, la cual durante 1986 todavía está condicionada por los efectos de la caída vertical del precio del petróleo y el incumplimiento del Programa de Recuperación. Se manifiesta una aguda tendencia recesiva. Por otro lado, siguiendo la lógica de la política oficial la recuperación de la economía no depende de algún programa nacional especial, sino de negociar recursos financieros frescos con el Fondo Monetario Internacional y con la Banca Internacional. Además, como agravante a la crisis, los costos de la construcción se incrementan constantemente, de tal forma que el volumen total de las construcciones es sustancialmente menor que en años anteriores. El Banco de México informó que el costo de edificación se incrementó en 96.7% de noviembre de 85 a noviembre de 86, y el aumento acumulado en el período enero noviembre de 86 que fue de 89.3%. Según esta fuente el costo de la vivienda de interés social se incrementó debido al aumento de 96.3% en precios de materiales de construcción y 98.1% en mano de obra. (1)

En este marco, según datos de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, a pesar de que en 1986 -durante 11 meses- 426 constructoras trabajaron en la reconstrucción, no hubo crecimiento en el ramo (2), por lo cual se esperaba una baja de 11 y 14% en la participación de las constructoras en el Producto Interno Bruto (PIB), contrastando con el hecho de que la industria del cemento se colocó entre las de mayores utilidades durante el primer semestre de 1986 (debido, entre otras cosas a que colocó grandes volúmenes de la producción en el extranjero).

No hay que olvidar que la mayor parte del trabajo de la industria de la construcción está en obras públicas, al margen de los programas habitacionales, así como también hay que hacer algunas consideraciones respecto a la vivienda.

b) El ritmo de ocupación del suelo. Basta mencionar que en el Distrito Federal el promedio de ocupación anual de suelo es de 4 mil 533.3 hectáreas y en el Estado de México de mil 885 hectáreas, mientras que la zona metropolitana de Guadalajara en los tres últimos años ha incorporado 90 mil predios irregulares. (3)

c) Déficit de vivienda. "El país se aproxima a los 82 millones de habitantes, de los cuales el 70% se asienta en zonas urbanas. El total de viviendas supera los 14.2 millones, de los cuales el 35% -casi 5 millones- están deterioradas o no satisfacen las necesidades mínimas. A partir de 1970, la tasa de crecimiento de la población alcanzó su máximo valor (3.4%) y comenzó a reducirse (hasta lograr en los últimos años un promedio anual de 2%), la tasa de incremento de vivienda es de 3.7%. Así, mientras la primera se duplica cada 35 años, la segunda lo hace cada 19". (4)

Lo anterior supone que la demanda del presente año y hasta el año 2000 será de 9.5 millones de casas nuevas para satisfacer los requerimientos derivados del incremento poblacional y 4.3 millones para resolver las necesidades creadas por deterioro, reposición y para evitar hacinamiento. (5)

I. Caracterización de los organismos oficiales de vivienda y sus respectivos programas

Para acceder a los programas normales de vivienda existe una serie de barreras particulares en cada caso, y si a esto le sumamos la acostumbrada burocracia, es claro que obtener vivienda no sólo es cuestión de contar con recursos disponibles (no prometidos). Uno de los más graves problemas para acceder a la vivienda es obviamente acceder al suelo, gran parte convertido en propiedad privada, fuera del alcance de las mayorías pues para conseguir un crédito se necesita una garantía hipotecaria con la que no es fácil contar. Además de que dichos programas de vivienda pueden ser muy criticados por no contemplar seriamente lo relacionado a ofrecer alternativas para acceder al suelo y a todos los servicios correspondientes, no como una línea más de crédito, sino como acciones contempladas desde el Plan Nacional de Desarrollo Urbano.

Desde 1984, en los créditos dirigidos a la población de escasos recursos (atendidos por FONHAPO a nivel nacional, por FIVIDESU en el Distrito Federal y los Institutos de Vivienda de cada uno de los Estados -acreditados por el primero-) aplicó un subsidio que durante 1986 iba del 9 al 21% inicialmente, aumentando un 10% anual. Esta acción no es publicada por el gobierno y por los mismos organismos, pero se utiliza en el ofrecimiento de vivienda con fines electorales dentro de las organizaciones del partido oficial.

Por otra parte, la táctica del Estado de dividir a los necesitados de vivienda se expresa claramente en la existencia de diferentes programas: a) El Fondo de Operación y Descuento Bancario a la Vivienda (FOVI) y la Banca atienden a las clases medias y acomodadas, construyendo únicamente viviendas terminada lo cual le brinda un mayor margen de ganancia a la industria de la construcción; b) Los trabajadores organizados y asalariados son atendidos -supuestamente- por INFONAVIT, FOVISSSTE, PEMEX, CFE, Instituto de Seguridad de las Fuerzas Armadas (ISFAM) y el Fondo de Vivienda Militar (FVIMI), cuyas viviendas construye también la industria de la construcción; c) Los organismos que atienden a los sectores "no asalariados" y cuyos ingresos deben ir de uno a 2.5 veces el salario mínimo vigente son el Fondo Nacional de Hab-

taciones Populares (FONHAPO) y el Fideicomiso de Vivienda y Desarrollo Social y Urbano (FIVIDESU), este último solo en el Distrito Federal. Aunque a FONHAPO le corresponde atender -de acuerdo a sus propios documentos- al 70% de la población del país, durante 1986 tenía asignado tan sólo el 4% del presupuesto del Programa Nacional de Vivienda; salvo las líneas de crédito (manejadas por este organismo) para la adquisición de suelo y autoconstrucción, en las demás interviene la industria de la construcción. En otras palabras, la demanda no solvente -la de los sectores populares- no podrá ser atendida.

Además de los institutos anteriores, en cada uno de los Estados de la República funcionan organismos de vivienda que operan con fondos de FOVI y FONHAPO, con una política de querer ser autosuficientes, lo cual implica un cobro extra por sus servicios y, el consabido condicionamiento para acceder a la vivienda por medio de la afiliación forzosa a organizaciones controladas por el partido oficial.

De acuerdo al Banco de México, uno de los problemas más serios que enfrentan los programas de vivienda es su rentabilidad, que incluye carteras con antigüedad hasta de 15 años, las cuales cuentan con tasas de interés fijas que se rezagan frente a la inflación. El interés promedio de estos créditos es del 30%. Esta situación se traduce en un subsidio cuantioso y constituye el mayor reto a vencer "la caída del poder adquisitivo y las altas tasas de interés obligan a aumentar el subsidio para la adquisición de vivienda, con lo que los esquemas organizados pierden capital de apoyo.

Para conseguir el mecanismo que logre captar recursos, planear y concretar proyectos, ofrecerlos en un mercado abierto y rescatar los fondos para volver a iniciar el ciclo, se precisa lograr: equilibrio entre los costos de los recursos y la recuperación de los mismos; participación de los involucrados y generación de una oferta basada en la demanda real. En otras palabras, las circunstancias cambian continuamente, por lo que el concepto de vivienda y las satisfacciones de la misma tienen que transformarse para que se ajusten a la reducida capacidad de pago del demandante". (6)

Durante 1986 se ensayó (en la relación con el Banco Mundial vía Renovación Habitacional Popular) que la recuperación fuera en una proporción de dos a uno.

En general se puede caracterizar a todos los organismos de vivienda de la siguiente manera:

- La forma concreta de operación de los sistemas financieros incide muy poco sobre los desequilibrios de oferta y demanda de vivienda.
- Su sistema financiero está diseñado mediante complejos mecanismos cuyo principal objetivo es recuperar la inversión.
- Cada organismo representa un complejo aparato burocrático una infraestructura institucional que actúa como mecanismo de control de diversos sectores de la población.
- Poca difusión de las políticas de cada organismo.
- Se actúa sólo como organismo financiero sin incidencia social, jurídica y técnica. Se incide sólo en el financiamiento, no en la producción de vivienda y esto repercute entre otras cosas, en el costo final de las habitaciones construidas.
- La distribución de créditos es un medio de corrupción, manipulación y formación de clientelas políticas.
- Muchos programas de vivienda dependen de la coyuntura política.
- Las normas técnicas se definen a partir de criterios económicos que facilitan el trabajo y la recuperación, y no a partir de las necesidades de la población en función de espacio y las particularidades de la zona.
- Cada año cambian sus políticas.
- De todos los organismos de vivienda, sólo FONHAPO tiene la cobertura para que entren grupos organizados independientes.

FONHAPO tiene distribuidos los siguientes programas de vivienda:

- * Vivienda Progresiva 51%
- * Lotes y Servicios 33%
- * Vivienda Mejorada 15%
- * Vivienda Terminada 1%

A diferencia de los demás organismos de vivienda que funcionan a través de cajones de crédito, FONHAPO opera a partir de la capacidad de pago de los beneficiarios, lo cual determina el monto del crédito y éste a su vez las condiciones crediticias; en pocas palabras, al que tiene menos le toca menos. Cabe agregar que desde 1984 FONHAPO comenzó a operar con la Industria de la Construcción, sometiendo obras a concurso.

II. Alcances de la política de vivienda durante 1986

El Estado mexicano no se plantea resolver a fondo el problema habitacional como demanda social, sino como un instrumento para desarrollar la política económica. "Según informes oficiales, hasta ahora el único proyecto de inversión que desde la entrada de recursos externos ha recibido luz verde para su financiamiento, es el incluido en el programa de vivienda que está a cargo de SEDUE..." (7). Sin embargo, es claro que le preocupa evitar conflictos sociales, es un Estado capaz de tomar medidas políticas dependiendo de la coyuntura, es así como nos podemos explicar la creación de un programa sin precedentes como el de Renovación Popular Habitacional y la función, al mismo tiempo, de los programas normales de vivienda. Una gran preocupación durante el período 1986 es la eficiencia, que se plantea como reto fundamental, no sólo para quedar bien ante la opinión pública sino también porque la operatividad de los organismos en este momento les va a permitir recuperar la inversión y así incrementar los recursos financieros a futuro (reciclamiento). El programa de Renovación Habitacional Popular podrá ser todo lo cuestionable que se quiera (ver capítulo correspondiente), lo que no se puede negar, a pesar del retraso con que llegaron los recursos, fue su eficiencia.

Al principio del período 1986, todos los programas de vivienda vieron restringida su actividad, debido fundamentalmente a la incertidumbre de que los recursos propios de cada organismo fueran requeridos para ser canalizados al programa de Renovación Habitacional Popular dadas las características políticas de éste. Una vez definido de dónde se obtendrían los recursos para Renovación Habitacional Popular, comenzó a operar el programa normal 1986 en abril del mismo año.

Según el informe presidencial de septiembre de 1986, las metas del Programa Nacional para el Desarrollo de la Vivienda se reprogramaron de 307 mil unidades a 269 mil 127, debido principalmente al aumento de costos. Se terminaron 233 mil 348 unidades que representan el 86.7% de la meta programada. De las acciones concluidas, el 54% correspondió a vivienda terminada, el 23% a vivienda progresiva, el 12% a lotes con servicios, el 3% a mejoramientos de vivienda y el 8% a otros

créditos. Las acciones habitacionales en 1986 se orientaron en un 58% a ciudades medias, 5% a áreas metropolitanas, 5% a centros de apoyo y 22% a otras localidades.

El Banco de México señala "una característica importante de dicho programa es que contribuye a la descentralización. No obstante que alrededor del 42% de los recursos captados por la Banca se originan en el Distrito Federal, más del 80% del financiamiento que ésta destina a vivienda es canalizando al interior del país donde se ha hecho obra en más de 200 localidades urbanas". Es FONHAPO el organismo directamente responsable de administrar los recursos provenientes del Banco de México además de autorizar los créditos y supervisar el desarrollo de las obras hasta el finiquito de dicho crédito.

La característica financiera más importante del período de 1986 fue que a partir de entonces se estableció que el pago que deben realizar los adquirentes, se incrementaría en la misma proporción que los salarios mínimos, al mes siguiente en que éstos se modificaran. En los últimos años, se realizan ajustes para lograr una mayor recuperación de recursos y ampliar así la cobertura del programa.

Otra característica del Programa de Vivienda en 1986 fue el aumento de la tasa de interés de todos los créditos, aunque se aclaró que los créditos dirigidos a la población de más escasos recursos permanecerían abajo del costo porcentual promedio de captación, cuya tasa de interés fue del 9% al 21% durante 1987.

Durante 1986, los recursos fiscales que se tenían que derogar (repartir) en materia de vivienda fueron canalizados en su totalidad a Renovación Habitacional Popular, lo que de alguna manera restringió la fluidez financiera de los diferentes organismos que tuvieron que comenzar a actuar con recursos propios.

También durante 1986 se experimentó la canalización de recursos del Banco Mundial al programa de Renovación Habitacional Popular. A partir de que RHP entregó vivienda terminada, se vieron seriamente cuestionadas tanto las líneas de crédito como los programas del resto de los organismos; es decir, se hizo la pregunta ¿por qué no se implementaron des-

de RHP programas de lotes y servicios, vivienda progresiva, vivienda mejorada en lugar de vivienda terminada? además ¿por qué no se siguió la política de constitución legal de grupos ya sea en cooperativas o en asociaciones civiles como requisito para otorgar vivienda?; si la vivienda terminada permitió eficiencia, por qué no sólo hablar de eficiencia en términos financieros, burocráticos y técnicos, sino también en los resultados para los beneficiarios de los créditos. ¿acaso la eficiencia es sólo una táctica temporal?

III. Programa de Vivienda de 1987

Lo presentado a continuación está realizado tomando como base el documento "Vivienda; decisiones institucionales programa 1987", publicado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología en febrero de 1987.

1. PROGRAMA DE VIVIENDA 1987
ORIGEN Y ASIGNACION DE RECURSOS
(miles de millones de pesos)

| | RECURSOS INTERNOS (1) | RECUROS CREDITICIOS EXTERNOS | TOTAL | % |
|--|-----------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| PROGRAMA DE ENTIDADES Y ORGANISMOS | | | 983.3 | 40.57 |
| INFONAVIT | 728.5 | -- | 728.5 | 30.08 |
| FOVISSSTE | 66.7 | -- | 66.7 | 2.75 |
| FONHAPO | 84.2 | -- | 84.2 | 3.47 |
| FIVIDESU | 13.5 | -- | 13.5 | .55 |
| FOVIMI/ISSFAM | 41.3 | -- | 41.3 | 1.70 |
| PEMEX | 40.0 | -- | 40.0 | 1.65 |
| CFE | 9.1 | -- | 9.1 | .37 |
| PROGRAMAS FINANCIEROS | | | 1 017.0 | 41.99 |
| BANCA | 815.0 | -- | 815.0 | 33.65 |
| FOVI | 202.0 | -- | 202.0 | 8.34 |
| RECONSTRUCCION RENOVACION HABITACIONAL P. TLATELOLCO FASE II | 48.0 30.0 7.0 | 26.0 -- 38.0 | 74.0 30.0 45.0 | 3.05 1.23 1.85 |
| PROGRAMA ESPECIAL | | | 272.0 | 11.22 |
| FONHAPO | 32.0 | 32.0 | 64.0 | 2.64 |
| FOVI | 71.5(2) | 71.5(3) | 143.0 | 5.90 |
| FOVISSSTE | -- | 65.0(4) | 65.0 | 2.68 |
| T O T A L | 2 188.8 | 232.52 | 421.3 | 100 |

- (1) Recursos fiscales propios de los organismos.
- (2) Se compone de 6.5 mil millones de pesos provenientes de recursos fiscales y 65 mil millones de crédito de contingencia de recuperación.
- (3) Recursos a contratarse con el Banco Mundial.
- (4) De los 65 mil millones, 26 mil ejercerá el organismo directamente y 39 mil en Sistema de Conversión con FONHAPO. Todos los recursos provienen del crédito contingente de recuperación.

1. El Estado informó que se canalizarían más recursos a vivienda, los cuales permitirían por un lado, un fortalecimiento de los organismos de vivienda y por otro, superar lo realizado en los últimos seis años.

UNIDADES DE VIVIENDA POR TIPO DE PROGRAMA

| PROGRAMA | 1977-1982 | 1983-1986 |
|--------------------------|-----------|-----------|
| Vivienda Terminada | 430, 159 | 499, 593 |
| Vivienda Progresiva | 39, 903 | 150, 590 |
| Lotes con servicios | 70, 592 | 101, 720 |
| Mejoramiento de vivienda | 16, 719 | 110, 433 |
| Otros créditos | 53, 174 | 76, 820 |
| T O T A L | 650, 547 | 939, 168 |

Se reconoció que los recursos han visto restringidos sus alcances por la inflación (en 1986 esto se reconoce oficialmente, vía el informe presidencial).

2. Se mencionó que el 84% de las acciones hechas se realizaron fuera del área metropolitana de la ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. No señala que esta medida se deba fundamentalmente a la poca o nula incidencia que el mismo Estado tiene dentro de estas ciudades por la existencia de un gran número de asentamientos irregulares.

3. Para 1987 las políticas de financiamiento cambiaron con el propósito de lograr una mayor recuperación que permitiera ampliar los alcances de los programas, sin mencionar que gran cantidad de programas estaban suspendidos fundamentalmente por trámites burocráticos y que lo que en realidad se pretendía era hacer acciones semilla (inversiones que garanticen la recuperación financiera del mismo) más baratas que llegaran a un mayor número de beneficiarios, y de esta

forma garantizaran la recuperación necesaria para que el mismo fondo inicial se estuviera reciclando. Y, finalmente, que para lograr esto sería necesario indexar las condiciones de pago, los intereses, etc.; es decir, conforme avanzara la inflación se establecerían las condiciones de pago de la vivienda.

4. Se informó que dependiendo del núcleo poblacional de que se tratara serían los esquemas de recuperación, que fundamentalmente habría un nuevo procedimiento en donde se expresaría el valor de la vivienda y los montos del crédito en determinado número de veces el salario mínimo. Es decir, se anunciaba que hasta que la vivienda o acción estuviera terminada se podría saber su valor, y que este valor se expresaría en función del monto del salario mínimo en ese momento. Esto le garantiza al Estado que no se devalúe su inversión. En el caso del sistema bancario, se adecuarían constantemente las tasas de interés y los pagos mensuales.

Por otro lado, se reconoció que estas medidas protegerían el valor real de los recursos y, por lo tanto, se aseguraría la estabilidad del desarrollo de los programas de vivienda. Hasta mediados del mes de marzo de este año estas nuevas reglas de operación no habían podido funcionar, por estar condicionadas por la Ley Federal de Vivienda, la cual estipula que se fije con anterioridad el costo de la vivienda; de ahí que le hayan realizado modificaciones a la misma, autorizadas por la Cámara de Diputados; así en abril, se señaló que para fines de concertación y divulgación tanto el préstamo como la recuperación se expresaría el valor de la vivienda en una determinada equivalencia en veces salario mínimo regional y para fines legales se expresaría en pesos.

5. Se mencionaba además que los sistemas de recuperación llevarían implícitos un esquema de subsidio con el fin de favorecer a gente de menores recursos, quienes conocerían previamente el monto del subsidio. En este punto se omitió que las nuevas reglas de operación crearían un estado general de desconcierto, sobre todo en los sectores populares, ya que no sabrían, sino hasta el final de la acción, su valor a pagar. En pocas palabras, lo único que se pretendía era generar confianza entre la población ofreciéndole explícitamente un subsidio y un plazo de 20 años para pagar su vivienda.

6. El documento reconocía además que no había avances en la construcción de vivienda campesina, debido a que los campesinos no se adecuan a los modelos y mecanismos de los organismos de vivienda. No se dice que tienen varios años tratando de incidir en este rubro sólo con buenas intenciones que a la fecha no hay nada en concreto.

7. Acerca de la vivienda se reconoció que a pesar de todas las facilidades que se han brindado a los inversionistas al sector privado, persisten una serie de barreras administrativas que impiden su desarrollo. Lo que no se reconoce es que parte de lo que se consideran "barreras administrativas" tiene que ver actualmente con las modificaciones al Código de Procedimientos Civiles en materia de arrendamiento, que, en general, benefician a los propietarios, no así a los inquilinos.

Además, se anunciaba que se ampliarían los estímulos fiscales vigentes, destacando que las autoridades hacendarias desgravarían hasta un 90% las ganancias derivadas de la enajenación de las viviendas construidas entre 1987 y 1988. Lo nuevo, lo que no se señalaba era que no se extienden todas estas ventajas para facilitar la adquisición de inmuebles arrendados por sus inquilinos.

8. Con respecto al suelo para la vivienda, el documento reconocía que se ha generado especulación por parte del sector inmobiliario y que para corregir esta situación se preveía accionar en tres líneas:

Primera. De carácter preventivo y prioritario, con el fin de constituir reservas territoriales.

Segunda. De carácter correctivo, para el mejoramiento urbano integral, es decir, para articular la regularización de tenencia de la tierra con la dotación de infraestructura y equipamiento básico.

Tercera. Tendiente a aprovechar al máximo la infraestructura urbana existente.

Desde luego no se reconocía lo restringido de los alcances de este programa comparado con la magnitud de la problemática.

De las reservas territoriales programadas el 89.79% corresponde a terrenos ejidales, para la adquisición ellas la federación aporta el 70% de los recursos y los gobiernos estatales y municipales el 30% restante. Estos recursos no son recuperables por el gobierno federal, ya que son transferidos como capital semilla y tampoco generan empleo, ni impulso a la planta productiva.

9. El documento de SEDUE aseguraba además que se establecería un programa de normatividad de insumos para vivienda; es decir, se promovería el uso de tecnologías que incidan en la reducción de tiempos y costos de la construcción, dentro del cual se contemplaría el caso de la autoconstrucción planteándose que se adquirieran estas tecnologías paulatinamente. No se aclaraba que a la fecha las tecnologías alternativas han dejado mucho que desear sobre todo en términos de durabilidad de sus productos y de la repercusión económica que tiene en el tiempo para sus adquirientes. Lo que si dejaba claro el Programa 1987 era que se pretendía apoyar a otra rama de la industria de la construcción y que esto no significaría la industrialización de la vivienda.

10. Se reconocía el exceso de normas y trámites necesarios para la edificación y adjudicación, y no se diga para conseguir un crédito, lo cual repercute sustancialmente en el costo final de la vivienda, señalando que el tiempo promedio de tramitación desde el inicio de la solicitud de permisos hasta la adjudicación de la vivienda representa 18 meses en promedio, cuando debería ser de 8 meses como máximo.

Lo que no se mencionaba es que son los propios organismos de vivienda quienes también ayudan a que esta situación se de. Por ejemplo, hasta 1986 dentro de FONHAPO existían 27 diferentes requisitos para poder autorizar un crédito, y si a esto le sumamos los requisitos que hay que demandarle a otras oficinas gubernamentales (como son las licencias de construcción) y el costo de cada trámite, podemos darnos cuenta entonces de la magnitud del problema.

11. Se planteaba una simplificación administrativa en el caso de la relación con otras oficinas, descansando en el establecimiento de una oficina única en materia de trámites y permisos para la edificación de vivienda.

Esta medida es un punto más a favor del Estado ya que le permitirá eficiencia para una pronta recuperación de los recursos. Esta es otra condición que establece el Banco Mundial para trabajar.

12. Para 1987 se preveía una inversión de 2.4 billones de pesos, de cuya suma se otorgarían 350 mil créditos de vivienda: 180 mil para viviendas terminadas (51.4%); 40 mil para vivienda progresiva (11.4%); 80 mil para lotes con servicios y pies de casa (22.9%); y, 50 mil para acciones de mejoramiento (14.3%); incluyéndose 150 mil viviendas que serían terminadas durante 1988 las cuales fueron iniciadas en 1987.

Los tan publicitados 2.4 billones de pesos representan el 1.5% del Producto Interno Bruto (PIB), en tanto que la ONU recomienda como mínima inversión el 6% para edificar vivienda, o sea, que se está invirtiendo sólo una cuarta parte de lo que se recomienda. Además, como en años anteriores más del 50% de las acciones es canalizado para la vivienda terminada, que es la que puede y le interesa construir a la industria de la construcción.

Para poder construir 180 mil acciones de vivienda terminada será necesario destinar por lo menos el 77.97% de la inversión y, si somos estrictos; es decir, si consideramos que organismos como PEMEX, CFE, y FOVIMI sólo hacen vivienda terminada, la inversión deberá ser de 87.1%. Con respecto a FONHAPO, organismo al que se reconoce como benefactor de la población no asalariada, se le "triplicó el presupuesto" sin embargo, no se dice que la mitad de ese presupuesto (6% del presupuesto general) sería destinado para terminar la reconstrucción de Tlatelolco y para instrumentar el Programa Fase II, y que con el 6% restante más el .55% de FIVIDESU se debería atender y responder a los demás programas, en otras palabras, con el 6.66% del presupuesto del Programa Nacional de Vivienda de 1987 se deberían realizar 170 mil acciones de vivienda progresiva, lotes y servicios, pies de casa y vivienda mejorada (ver cuadros correspondientes).

Las condiciones que establece el Banco Mundial son: canalización de recursos a través de un programa especial que funcione paralelamente a los programas normales, el cual maneja un subsidio del 50%, pretende fortalecer a la iniciativa privada, implicando que desde aquí no se canalizarán recursos para la vivienda rural, vivienda mejorada, autoconstrucción. El 70% de los recursos son para vivienda progresiva, lotes y servicios, dándole particular atención a la descentralización, y apoyando solamente a ciudades prioritarias para lo cual deben ajustarse las reglas de operación.

2. ORGANISMOS QUE CONSTRUYEN VIVIENDA A NIVEL NACIONAL

| | % |
|--------------------|-------|
| INFONAVIT | 30.08 |
| FOVISSSTE | 2.75 |
| FOVIMI | 1.70 |
| PEMEX | 1.65 |
| CFE | .37 |
| BANCA | 33.65 |
| FOVI | 8.34 |
| ESPECIALES DE FOVI | 5.90 |
| T O T A L | 84.44 |

3. ORGANISMOS DE VIVIENDA QUE OBTIENEN LOS MAYORES RECURSOS

| | % |
|------------------------|-------|
| INFONAVIT | 30.08 |
| BANCA | 33.65 |
| PROGRAMA ESPECIAL FOVI | 8.34 |
| FOVI | 5.90 |
| T O T A L | 77.97 |

4. DISTRIBUCION DE RECURSOS FONHAPO

| | % |
|-------------------|-------|
| PROGRAMA NORMAL | 3.47 |
| PROGRAMA ESPECIAL | 2.64 |
| R. H. P. | 3.05 |
| FASE II | 1.85 |
| TLATELOLCO | 1.23 |
| T O T A L | 12.24 |

5. RECURSOS DESTINADOS A LA POBLACION DE ESCASOS RECURSOS

| | % |
|---------------------------|-------|
| FONHAPO | 3.47 |
| FIVIDESU (D.F.) | .55 |
| PROGRAMA ESPECIAL FONHAPO | 2.64 |
| T O T A L | 6.66* |

* Para atender al 70% de la población del país.

13. Se mencionaba igualmente que, siendo congruentes con la descentralización el 50% de las unidades se realizarían en las 59 ciudades medias estratégicas, con especial énfasis en 32 determinadas como prioritarias; 35% en las localidades urbanas de menor tamaño y en el medio rural, y el restante 15% a las áreas metropolitanas de las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey.

Lo que no se mencionó es que el 15% para las tres ciudades más importantes del país significa 52 mil 500 acciones que, divididas entre tres, tocará a 17 mil 500 viviendas por ciudad.

Sobre los dos puntos anteriores, las declaraciones a los diarios por parte del señor secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Camacho Solís fueron: "se reforzará el papel de la vivienda como instrumento de redistribución del ingreso, el ordenamiento de las ciudades, la formación y movilización del capital y el estímulo a la actividad económica" (8), sin comentarios.

Tampoco se explicaba la procedencia de los recursos: un billón será una erogación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (4.3% del total), la Banca aportaría el 42%, el 9.6% vendría del Banco Mundial y el restante 7.10% también lo pondría el gobierno federal como parte de los requisitos del Banco Mundial para los programas especiales y la terminación de la reconstrucción, ver cuadro siguiente:

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS

| | miles de millones de pesos | % |
|---|-------------------------------|------------|
| 1. Organismos de Vivienda (erogados por SHyCP) | 983.3 | 41.3 |
| 2. Banca Privada | 1 017 | 42.0 |
| 3. Recursos Externos (Banca Mundial) | 231.5 | 9.0 |
| 4. Recursos exigidos por el Banco Mundial, complementarios (Gobierno Federal) | 189.6 | 7.7 |
| T O T A L | 2 421.42 | 100 |

14. Se comentaba que el programa daría lugar a 700 mil fuentes de trabajo en la construcción y contribuiría a mantener 2 millones de empleos indirectos o complementarios, para esto el mismo Petricioli, secretario de Hacienda y Crédito Público, declaró que "con el programa se alentaría el crecimiento de la economía, disminuirá el ritmo de inflación, lo que se traduciría en un detonador más de la reactivación económica, constituyendo un singular esfuerzo de concertación entre los sectores público, privado y social". (9)

Lo que nunca se dice es que, más que ofrecer vivienda se ofrecen contratos para la industria de la construcción. Es evidente que hasta la fecha todo el dinero canalizado no ha servido para poder hacer organismos de vivienda autosuficientes que puedan operar con recursos propios (tener su propio fondo revolvente).

15. Por último, el documento señalaba que el gobierno federal ha llevado a cabo importantes procesos de coordinación entre diversas dependencias y entidades públicas y de concertación de compromisos con diferentes sectores sociales:

- Los principales fabricantes se comprometieron a fijar precios preferenciales; las reducciones se reflejarán en el costo final de la vivienda.
- Los promotores privados que hagan uso de los recursos financieros del programa aplicarán un descuento del 5% sobre el valor final de la vivienda que se reducirá, para mayor accesibilidad de los adquirentes.
- El notario nacional cobrará reducidos honorarios correspondientes a vivienda de interés social, además colaborará para que se simplifiquen los trámites.
- Los colegios o asociaciones de profesionistas se han comprometido a asesorar a los agentes públicos, privados y sociales que participen en el programa.
- Las agrupaciones campesinas se proponen organizar y capacitar a sus agremiados para poder participar en los programas de vivienda rural.
- El movimiento obrero organizado ha mostrado interés por impulsar las medidas necesarias para ampliar su capacidad económica y poder atender un mayor número de trabajadores.

Para el movimiento urbano popular la vivienda es una de las principales demandas; en particular la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular (CONAMUP) señala que la lucha por la vivienda no es de carácter reivindicativo, sino una lucha política de carácter histórico. Sin embargo, hasta el momento el MUP ha sido incapaz de aprovechar pequeños es-

acios de participación que se han abierto en organismos como FONHAPO y de convertir las demandas particulares de vivienda en una demanda capaz de aglutinar a amplios sectores

sto se debe, entre otras cosas al desconocimiento por parte de la población de los organismos de vivienda existentes (en especial FONHAPO) y sobre todo de sus mecanismos de operación, debido a que:

) No hay material de difusión porque al Estado no le interesa realmente dar a conocer estos espacios.

) La poca información que hay no llega a los sectores populares.

) Son tan complejos los mecanismos de operación que están fuera del entendimiento general.

1. El segundo elemento importante que interviene es que, dentro del Movimiento Urbano Popular (incluyendo la CONAMUP) no existe un programa o plan de acción conjunto. Esto se debe a que:

) Existen diferencias político-ideológicas dentro de los grupos u organizaciones que participan dentro del MUP e incluso, dentro de la CONAMUP y de la CUD, y cada grupo actúa presionando al Estado de diferente manera y bajo circunstancias diferentes.

) Intervienen otros factores: potencial organizativo, la práctica o estrategia a seguir, la respuesta estatal en cada lugar y cada organización.

El tercer elemento que se presenta en el caso de que un grupo u organización popular decida incursionar en algún programa oficial de vivienda se encuentra con:

. La organización no va a poder pasar de ser gestor.

2. Es tal el burocratismo que, caen en un proceso de desgaste que en ocasiones llega a deshacer al grupo solicitante.

3. Durante el proceso para conseguir el crédito, la organización se va dando cuenta de que los organismos de vivienda sólo atienden la demanda solvente o que por 'x' o 'y' circunstancias no pueden ser atendidos.

4. La mayoría de las veces cuesta mucho trabajo o simplemente no consiguen obtener la asistencia técnica necesaria.

En caso de que algún grupo lograra colarse (que los podemos contar con los dedos de la mano) y siguiendo los lineamientos del programa, en donde se "convoca al pueblo a participar en la construcción de vivienda" sucede que por una parte ante la dinámica que implica el trabajo de un proyecto de autoconstrucción las organizaciones pierden el rumbo político, y por otra, existe inercia de grandes sectores de la población, no sólo frente a las propuestas del Estado, sino incluso a los intentos aislados de los sectores del MUP, por lo tanto mucha gente en cuanto logra obtener su vivienda deja de participar en la organización.

Los proyectos de reconstrucción independientes, al estar financiados por organismos no gubernamentales, significan, a pesar de sus limitaciones en términos de alcances, una experiencia importante en la búsqueda de una alternativa popular. Además de que demuestran, gota a gota, que existen alternativas que van acordes con las necesidades económicas, espaciales y sociales de la población, y que a partir de esta organización se cuestiona el actuar del Estado.

Desde nuestro punto de vista a las organizaciones que participan dentro del MUP les corresponde: buscar un plan de acción unitario que a nivel nacional les permita pasar a la ofensiva, en este caso en materia de vivienda, y no sólo estar a la defensiva, ya que hasta ahora ha sido el Estado quien marca cuánto va a dar a las organizaciones, qué es lo que alcanza a hacer y cuáles las acciones que va a implementar, etc.

La propuesta anterior no descarta la experimentación y sistematización de situaciones o programas concretos, de tal forma que se conviertan en un serio cuestionamiento al actuar del Estado. La sistematización no sólo debe ser en lo operativo, debe dar los elementos necesarios para la búsqueda de alternativas populares, que incluso no dependa de los programas planteados por el Estado y que tampoco pierda de vista la politización de las masas; contemplando con las bases, desde el trabajo cotidiano lo político y lo organizativo.

NOTAS

- (1) El Sol de México. 1o de enero de 1987.
- (2) De acuerdo a la Comisión de Estudios para América Latina, la industria de la construcción tuvo un incremento global de 14.4% durante 1986, creando empleo para 303 mil personas.
- (3) Información de la Dirección de Catastro Estatal de Jalisco. Excelsior 18 de enero de 1986.
- (4) "División Hipotecaria de la Banca Regional" en Exámen de la Situación Económica en México. Marzo de 1987.
- (5) Idem.
- (6) BANAMEX. Exámen de la Situación Económica. Ibid.
- (7) La Jornada 7 de mayo de 1987, p. 8.
- (8) Uno Más Uno 7 de mayo de 1987.
- (9) Excelsior 7 de mayo de 1987.

ABASOLO 2 COLONIA GUERRERO: CRONICA DE UNA AGRESION ANUNCIADA

Guillermo Martín

Introducción

Pese a los síntomas de preocupación gubernamental por el problema de vivienda, hoy resulta innegable la responsabilidad de la conducción económica gubernamental y del PRI-Gobierno capitalino en la configuración de una situación altamente conflictiva en torno a la cuestión inquilinaria en la ciudad de México.

Las principales líneas de acción gubernamental que han venido configurando esta situación, en el contexto del Año Internacional de los Sin Techo (1987) y la sucesión presidencial son:

- Reducción sistemática del ingreso real de la población, resultado de una política económica antinacional y antipopular.
- Negativa de ampliar la expropiación de predios en vivienda de alquiler en el centro, principal instrumento para moderar la voracidad de los caseros.
- Estímulo a las tendencias especulativas en el mercado inmobiliario del centro. Desmovilización social, nuevo impulso al Programa de Reordenación Urbana y Protección Ecológica (PRUPE), liquidación del régimen de rentas congeladas, recatastración de predios, régimen de propiedad en condominio vecinal, contexto inflacionario, entre otros.
- Insuficiencia crónica de los programas de vivienda de interés social, sobre todo para los sectores no asalariado de la población.
- Concesiones crecientes a propietarios del suelo y arrendatarios sobre todo desde finales de 1986.

- Reformas al Código de Procedimientos Civiles en materia inquilinaria.
- Creciente insensibilidad y autoritarismo en la solución de los conflictos sociales abonados por la propia política gubernamental.

PRONADEVI 1987: Mucho Ruido y pocas nueces

El déficit de vivienda oficialmente reconocido en la República y en la capital del país es de 7 y 1.9 millones de unidades, respectivamente. El Programa Nacional de Vivienda, anunciado (nuevamente) como el más ambicioso en la historia del país, absorberá un total del 1.5% del gasto público programado para producir 350 mil unidades de vivienda de las cuales, 15% se asignarán a Monterrey, Guadalajara y Distrito Federal. Suponiendo que se llegara a cumplir esta meta, a lo sumo se construirían 20 mil viviendas en la ciudad de México, de las cuales, poco menos de la mitad, se destinarían a no derechohabientes de FOVISSSTE o INFONAVIT.

Por su parte, el PRONADEVI 1984 señalaba que el incremento anual en el déficit de vivienda en el país ascendía entonces a medio millón de unidades al año, de manera que el Programa de Vivienda más ambicioso de la historia, no logra cubrir siquiera el déficit adicional generado durante ese año.

Por otra parte, la euforia gubernamental en torno a los logros del programa de Renovación Habitacional Popular con sus 4 mil acciones de vivienda en 18 meses, ha puesto en tela de juicio la mecánica de los programas tradicionales de vivienda, generando en la población capitalina una creciente expectativa en torno a las posibilidades de masificar un programa similar.

Se ve luego, cómo más allá de presiones sociales muy focalizadas, el PRI-Gobierno es incapaz de resolver una creciente demanda social constitucionalmente legitimada, por la vía de la producción de nuevas viviendas.

Compresión de salarios, liberación de rentas

Desde el ángulo del alquiler de vivienda, la situación se ha venido agravando aceleradamente para los inquilinos. En la actualidad, más del 60% de viviendas en la capital del país se encuentran bajo alguna forma de arrendamiento, proporción más alta en el centro de la ciudad. Ahí las familias con ingresos inferiores al salario mínimo son más del 60% del total. La proporción del ingreso familiar que se dedica a pago de renta es de más del 40% en promedio.

Según un estudio reciente del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, en los últimos 10 años mientras las rentas han subido 60.6 veces, los salarios sólo han aumentado 22 veces. En 1984 el promedio de renta mensual en la ciudad era de 37 mil 500 pesos, 53% más que en 1983. En 1986 el promedio de renta mensual era ya de 138 mil pesos, 124% más que en 1985. (1)

Según el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en 1986 se realizaron 61 mil procesos en juzgados de arrendamiento inmobiliario, 10 mil de ellos por desahucio. Para 1987 se esperaban por lo menos 109 mil casos. La Procuraduría Federal del Consumidor, recibe un promedio de 5 mil casos mensuales relacionados con vivienda de alquiler, los aumentos de las rentas reportados llegan hasta 500%.

Al menos, en interés promedio, sería esperar una respuesta gubernamental clara en torno a este bochornoso aspecto de la crisis social que afecta a la mayoría de los capitalinos.

La ley del gandalla, el mejor de los mundos

Después de que durante los últimos quince años la producción de vivienda para alquiler por parte del sector privado ha sido nula, la Cámara Nacional de Comercio en representación de los propietarios de inmuebles, constructoras y promotores, propone una novedosa solución.

Resumen de declaración del 21 de diciembre de 1986. Para resolver el problema de la vivienda, en 20 años se requiere construir 25 millones de casas habitación. La Iniciativa Privada se interesa, pero condiciona la aplicación de recursos a que se tomen las siguientes medidas:

- 1) Que la inversión destinada a vivienda transitoria de arrendamiento esté exenta de impuestos,
- 2) Que se creen incentivos fiscales,
- 3) Que las rentas aumenten por lo menos las mismas veces y en el mismo porcentaje que el salario mínimo,
- 4) Que los alquileres se determinen por la oferta y la demanda y no por la ley,
- 5) Que se descongelen las rentas en edificios y viviendas y,
- 6) Que se modifiquen las legislaciones y disposiciones jurídicas, hacendarias y financieras sobre la materia para que se facilite la inversión y las ganancias sean redituables.(2)

Extracto de la declaración del 10 de febrero de 1987 del Subsecretario de Vivienda, Gabino Fraga: "...se busca que los inmuebles en renta sean una inversión segura para lo cual los propietarios estarán exentos de pagar impuestos hasta por 90% de sus ganancias" (3).

Algunos conceptos vertidos por el Presidente de la Asociación de Industriales de Azcapotzalco el 2 de junio del mismo año, en torno al aumento del valor de los Certificados de Promoción Fiscal (CEPROFIS) del 15% al 22.5% para estimular la edificación de vivienda en alquiler:

Calificando el programa de edificación de viviendas destinadas al alquiler por medio del cual los particulares reciben estímulos fiscales como un éxito, indicó que del total de la inversión los participantes reciben el 75% de la depreciación acelerada y hasta el 22.5% en CEPROFIS. Como ejemplo, mencionó que en la construcción de un departamento de 10 millones de pesos, por el mecanismo mencionado, los particula-

res sólo invierten 200 mil pesos. Para favorecer aún más esta situación, los empresarios interesados pueden solicitar créditos del FOVI con lo cual resultan beneficiados.

De cómo el PRI - Gobierno defiende a los inquilinos

Resumen de las modificaciones al Código de Procedimientos Civiles en el Distrito Federal en materia inquilinaria, aprobados en el Diario Oficial el 14 de enero de 1986 y puestos en vigor a partir del 15 de abril del mismo: 1) se reducen los plazos y requisitos en juicios inquilinarios para que estos sean más breves y ágiles; 2) se aumenta el pago de fianza para que proceda la suspensión; 3) las audiencias se suspenden como antes, cuando el inquilino no presente asesor; 4) se permite la utilización de la fuerza pública para la solicitud del juez; 5) se refuerza la posición de los actores en los lanzamientos.

Con el fin de agilizar los juicios inquilinarios, se aumentan de 15 a 30 los juzgados de arrendamiento inmobiliario en el D.F. durante los primeros meses de 1987.

Resumen de declaraciones de la CANACO del 18 de abril: "las disposiciones en materia de arrendamiento, imponen obligaciones desiguales a las partes contratantes y sobreprotegen al inquilino; esto aunado a la política de insuficiente estímulo, incremento de carga fiscal y congelación de rentas han provocado el déficit de viviendas.

Conforme al derecho, se golpea a niños, mujeres y ancianos

Aunque el uso de la fuerza pública en los lanzamientos resulta un hecho aislado, como se ha registrado en los últimos meses de 1987 en las colonias Narvarte, Roma, Santa Rita la Rivera, Martín Carrera, Pensil y Guerrero, la desproporción de la agresión sufrida por el movimiento inquilino en el caso de Abasolo 2, marca una nueva situación en la lucha por la vivienda.

Aproximadamente a las 8 de la mañana del miércoles 17 de junio de 87, cerca de 300 elementos entre policías y granaderos a bordo de tres camiones "chimecos", 9 patrullas, 3 paneles y un helicóptero, acordonaron la zona inmediata a Plaza de Abasolo 2 en la colonia Guerrero, para efectuar el desalojo de la familia López Cisneros, según orden girada por la Juez Bertha Chávez Calzada del Juzgado IX de arrendamiento Inmobiliario.

El lanzamiento promovido por la dueña del inmueble, Elodia García Viuda de Cruz y conducido por el actuario Pablo Flores, había sido intentado sin éxito en dos ocasiones anteriores.

En la tradición de resistencia forjada durante más de 10 años de lucha, pese a lo inusual del despliegue policial, los vecinos acudieron de inmediato al lugar del lanzamiento, buscando dialogar con el actuario y el responsable del operativo, como es costumbre en estos casos.

La comisión negociadora, formada por mujeres, intentó penetrar para negociar con el actuario fue agredida por la valla de granaderos, a empujones, macanazos y patadas. La agresión comenzó a extenderse a los vecinos presentes, lo cual encendió la indignación de los más de 500 vecinos ya congregados para negociar un alto al lanzamiento. Frente al tamaño de la agresión montada para consumir la injusticia social, la gente comenzó a defenderse de los golpes como pudo. Los vecinos repelieron durante un cuarto de hora la golpiza, obligando a un repliegue de la policía.

El saldo fue de más de 30 heridos, entre ellos niños, ancianos y mujeres. La señora Guadalupe Rojas tuvo que ser intervenida quirúrgicamente por ruptura de tendón de aquiles, y la joven de 14 años Laura Ortega, hospitalizada por varios días. Vecinos y transeúntes tuvieron que recuperarse de los efectos de gases arrojados contra ellos durante el repliegue de la policía.

Para las 10 de la mañana, ya se habían congregado cerca de mil vecinos en Abasolo 2, de uniones inquilinarias como la Martín Carrera, Santa María la Redonda, Pensil, 20 de Noviembre, Morelos y estudiantes de la Prepa Popular Fresno. Se presentaron incluso, miembros de otras organizaciones de

la Guerrero, tradicionalmente distanciadas de la Unión Vecinos de la Colonia Guerrero (UVCG). La digna actitud resistencia de los que repelieron la agresión, generó amplio sentimiento de solidaridad entre los presentes.

Con la participación de representantes de la Asamblea de Barrios y Organizaciones Vecinales (ABOV), la CUD y CONAMUP, se emprendió de inmediato una marcha al Tribunal Justicia del Distrito Federal. Después de casi dos horas, logró una entrevista con la presidenta del Tribunal, Clementina Gil de Lester. Ante la solicitud de una explicación de los hechos, y el repudio al uso de la fuerza pública en los lanzamientos, la Presidenta del Tribunal respondió que se había procedido conforme al derecho.

En la Secretaría de Gobernación, el contingente logró una entrevista con el Jefe de Asesores del Subsecretario de Gobernación, Jaime Muñoz, quien indicó que el asunto era competencia de la Delegación Cuauhtémoc, comprometiéndose a concertar una entrevista con el titular.

El viernes 19 de junio, se logró la entrevista con el delegado Enrique Jackson, donde se exigió un alto al uso de fuerza pública en los lanzamientos, repudiándose la agresión sufrida. Se manifestó que a raíz de los acontecimientos había un cambio en la política hacia el movimiento inquilinario, y que, los motivos de este cambio debían ser aclarados.

Esta casa... que quieran resolver el problema de vivienda a macanazos

Al cierre de la edición, la respuesta de las autoridades no había sido hasta ahora elusiva. El movimiento inquilinario exige una respuesta clara y satisfactoria a la situación.

Con la inminencia de más de 100 lanzamientos en puerta en el centro de la Ciudad de México, el gobierno se ve ante la alternativa de profundizar un conflicto de hondas raíces sociales, generado en buena medida por su propia política de abrir los canales para una solución política al conflicto

En el Año Internacional de los Sin Techo, en medio de un sentimiento de profunda indignación y solidaridad por la digna actitud de resistencia de los vecinos de la colonia Guerrero, los propios vecinos, la Asamblea de Barrios, la CUD y la COMAMUP programan actividades para repudiar este golpe al movimiento inquilinario y seguir resistiendo, por la permanencia en los barrios y una vivienda digna.

N O T A S

- (1) Méndez Rodríguez, Alejandro. IIE UNAM en revista PROCESO 2 febrero de 1987, pag. 24.
- (2) UNO MAS UNO 21 de diciembre de 1986.
- (3) JORNADA 10 de febrero de 1987.
- (4) UNIVERSAL 2 de junio de 1987 pag. 1-F.

ANEX

EXPERIENCIA DE LA RECONSTRUCCION EN CIUDAD GUZMAN, JALISCO

EDNA ELENA VEGA RANGEL

Introducción

Al igual que en la Ciudad de México, los sismos del 19 y 20 de septiembre de 1985 tuvieron efectos desastrosos -aunque no tan difundidos- en varios lugares de provincia, éste es el caso del Estado de Jalisco donde 18 municipios y 79 localidades resultaron afectadas, así como 50 escuelas y 16 templos; 180 mil personas damnificadas, 38 muertos y 700 heridos.

Ciudad Guzmán fue uno de los municipios del Estado donde los sismos tuvieron mayores efectos; el 38% de las viviendas resultaron dañadas. De acuerdo con la investigación hecha por los miembros de Comunidades Eclesiales de Base, lo efectos de los sismos sobre la vivienda fueron los siguientes:

- 1,600 casas totalmente destruidas
- 1,300 viviendas con daños menores
- 3,000 casas con daños leves
- 21,000 personas damnificadas

Si tomamos en cuenta que antes de los sismos existían 11 mil 108 viviendas con una población calculada en casi 70 mil habitantes, podemos darnos cuenta de la magnitud de los daños.

I. La respuesta oficial hacia los damnificados

Para atender a la población damnificada se creó la Comisión Estatal de Reconstrucción de la Zona Sur de Jalisco, la cual el 3 de octubre de 1985 señaló que se necesitarían 4 mil millones de pesos para reconstruir sólo 580 casas y 22 templos, mientras que, el cálculo para la reconstrucción total era de 7 mil millones de pesos. Ya desde finales del septiembre del mismo año, el alcalde de Ciudad Guzmán anunciaba la conclusión de la labor de desescombros y el inicio de las obras de reconstrucción, señalando que existían 1363 damnificados en albergues. (1)

La Comisión Estatal de Reconstrucción construyó 3 mil 82 viviendas (47% del total de viviendas dañadas), sin embargo, señaló que el 42% de las familias damnificadas -2 mil 724- contaron con recursos para reparar sus propias viviendas, ya que dicha Comisión apoyó a los damnificados (de acuerdo a información oficial) con la exención de impuestos y con subsidios del 20% al material de reconstrucción.

A principios del mes de julio de 1986, esta Comisión entregó 200 casas reconstruidas, informando que con ello se cumplía más del 50% del Programa General de Reconstrucción de la zona sur de Jalisco. Cabe destacar que en estas declaraciones se habla de que es el 50% de avance, mientras que anteriormente señalamos que sólo en Ciudad Guzmán mil 600 viviendas fueron totalmente destruidas.

Los costos de la reconstrucción corrieron a cargo del gobierno estatal, vía FONHAPO, y del gobierno federal que aportó inicialmente mil millones de pesos. Además el primero de agosto de 1986, la Comisión de Reconstrucción informó que recibió donativos por 119 millones de pesos de organismos privados y 3 mil millones de pesos para el programa de vivienda de aportaciones oficiales (2). Esta información se complementa con la publicada el 5 de octubre de ese mismo

año, donde se señaló que el 31 de agosto de 1986 la Comisión tuvo ingresos por un total de tres mil 430 millones de pesos, que provenían de las siguientes fuentes:

| FUENTE | CANTIDAD APORTADA |
|-----------------------|-------------------------|
| Gobierno Federal | 1 626 millones de pesos |
| Comunidad Jalisciense | 133 millones de pesos |
| Gobierno Estatal | 1 671 millones de pesos |
| T O T A L | 3 430 millones de pesos |

En esta misma fecha, dichos ingresos se habían gastado íntegramente, en anticipos a constructoras, estimaciones de honorarios, viáticos, etc. planteándose que el faltante tendría que aportarlo FONHAPO con un crédito convenido con Banco Mundial.

II. Experiencia de las Comunidades Eclesiales de Base durante la reconstrucción

Con relación a las organizaciones de damnificados presentamos el testimonio dado por las Comunidades Eclesiales de Base (3), que manifiestan su experiencia de la siguiente manera:

NACIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES.

Junto con la ayuda emergente que se estuvo prestando en días inmediatos al sismo, empezaron a surgir pequeñas organizaciones orientadas a la reconstrucción de las viviendas

, es hasta el día 4 de octubre cuando quedaron formalmente constituidos los comités PRO-RECONSTRUCCION. Estos comités funcionaron en tres niveles diferentes:

COMITES DE BARRIO:

arias familias que perdieron sus hogares, empezaron a unirse espontáneamente con sus vecinos o parientes de la misma calle y de otras calles cercanas. Iniciaron este trabajo ayudándose entre sí, con ropa, comida, dinero, etc. Posteriormente, se organizaron para realizar faenas de desescombrar, nombraron a sus representantes, se reunían cada ocho días y programaban el trabajo de la semana. Iniciaron 35 comités.

COMITES DE ZONA:

Estos los formaron representantes de los comités de barrio y un asesor, con reuniones semanales para revisar el trabajo, programar e informar al Comité Central, abarcando cada uno de ellos una determinada zona de la ciudad.

COMITE CENTRAL DE DAMNIFICADOS:

Compuesto por asesores y representantes de las zonas, se convirtió en el núcleo representativo de la Ciudad. Se reunía cada ocho días para revisar el trabajo, detectaban urgencias, programaban y tomaban acuerdos. Para garantizar el mejor funcionamiento del COMITE CENTRAL, se crearon diferentes servicios: información, análisis, asesoría técnico-jurídica, solidaridad, inquilinos, material de construcción, finanzas, secretaría.

COMITES DE BARRIO:

Elaboraron sus proyectos de trabajo, solicitando asesoría técnica a diversas organizaciones y tomaron en cuenta los materiales que se producen en la región, la economía familiar, la consistencia de la vivienda y la organización comunitaria.

Las faenas dominicales fueron realizadas por miembros de Comités de Barrio y miembros de los Comités de Solidaridad, su trabajo consistió en: rescatar material en buenas condiciones de entre los escombros, acarreo de arena de los arroyos, acarreo de grava y de piedra. La distribución de estos materiales hizo en forma equitativa o por medio de sorteos.

Los COMITES DE BARRIO, DE ZONA Y EL COMITE CENTRAL, además de organizarse para construir sus viviendas, siguieron un proceso educativo, mismo que les ayudó a conocer y analizar la realidad más objetivamente. Se realizaron varios talleres de análisis en los que se vio, en forma global, la problemática que enfrentaban los grupos en lo referente a la reconstrucción. Con base en el conocimiento de esa realidad, decidieron presentar algunas demandas concretas a las autoridades oficiales: 1) No al alineamiento arbitrario de las calles; 2) Créditos con facilidades de pago a grupos organizados; 3) Terreno para inquilinos; 4) Creación de fuentes de trabajo para damnificados; 5) Ayuda a ancianos e incapacitados; 6) Supresión del pago del Seguro Social; y 7) Asesoría técnica con atención especial en ingeniería y sismos.

Estas demandas fueron presentadas en una marcha-mitin que se realizó el 18 de diciembre del mismo 85. EL COMITE CENTRAL DE DAMNIFICADOS nombró una COMISION NEGOCIADORA para que representara ante las autoridades oficiales los intereses de los grupos de damnificados. Después de dos meses de negociaciones, no todas las demandas fueron aceptadas y sólo se dieron respuestas parciales.

En el COMITE CENTRAL DE DAMNIFICADOS (CCD) se estuvieron elaborando boletines de información y estudio que se hacían llegar a todos los miembros.

Debido a la actitud indiferente de las autoridades, a los ofrecimientos de ayuda para varias organizaciones e instituciones extranjeras (Caritas Alemania, Catholic Relief Services, Caritas Bélgica, Caritas Dinamarca, Caritas España, Caritas Suiza, Cruz Roja Suiza, Desarrollo y Paz, etc) y las necesidades presentadas, los grupos organizados elaboraron un proyecto global de reconstrucción que fue enviado a Europa para solicitar ayuda económica.

Durante el tiempo de espera (de noviembre de 85 a febrero de 86) los comités continuaron con el proceso de trabajo ya indicado, algunas familias se desesperaron por la tardanza de una respuesta concreta y abandonaron la organización para recibir créditos del Gobierno. Además, hubo interferencia de partidos políticos en el trabajo de los comités.

Con la llegada de la ayuda económica (a partir de marzo de 86), la dinámica de vida de los Comités cambió notoriamente y fue necesario redoblar esfuerzos, puesto que aumentó la actividad. En esta etapa se dieron los siguientes pasos:

- 1) Presencia de ingenieros y arquitectos en algunas zonas damnificadas: Divina Providencia, Montenegro y el Rodeo.
- 2) Información sobre el tipo de construcción y materiales, estudio de la mecánica del suelo y elaboración de diseños.
- 3) Inicio de la construcción en las zonas antes mencionadas.
- 4) Nacimiento de la Asociación Civil "VIVIENDA Y PROMOCION CULTURAL" (febrero de 1986).
- 5) Contratación de promotores de vivienda. (marzo de 1986).
- 6) Generalización de la construcción en toda la ciudad y en los pueblos de San Andrés, Gómez Farías y el Fresno.
- 7) Asesoría legal, jurídica y educativa, tanto para los damnificados como para los promotores.

Al iniciar la construcción de las viviendas, fue necesario crear nuevos servicios: bodegas, elaboración de comida, administración, controladores de faenas, maestros de obra, etc.

El proceso de reconstrucción nos permitió crecer en organización. Sin embargo, fue necesario enfrentar diversos conflictos: puntos de vista diferentes entre ingenieros y damnificados, exigencias de materiales tradicionales en la construcción, los materiales eran trasladados en poca cantidad y con lentitud a los lugares de la construcción, desesperación en algunas zonas por la lentitud del trabajo y la

cercanía del temporal de lluvias, desconfianza por la nueva forma de construcción y el incumplimiento en algunas comisiones a lo interno de los grupos. Estas dificultades fortalecieron el trabajo de grupo y abrieron nuevas perspectivas para el futuro de la organización.

Se planteó la forma de regresar el dinero al grupo por parte de los damnificados, considerando los beneficios que se obtendrían si este se llevara con responsabilidad. Se estudió el tema, se discutió y se concluyó que EL FONDO REVOLVENT era lo más conveniente, quedando aceptado por unanimidad (julio de 1986).

Se hizo un estudio socioeconómico de cada uno de los miembros de la organización, para determinar la capacidad real de pago de cada una de las familias.

Ante la posibilidad de cobro del Seguro Social en la construcción, fue creada una comisión representativa de todos los comités, con el fin de que analizara el problema y estableceran un diálogo con las autoridades correspondientes, consiguiendo resultados positivos en favor de los damnificados a quienes se les exentó de este impuesto. (julio de 1986).

Desde el principio la organización contó con familias damnificadas que no tenían terreno para sus viviendas, ante esto se dio una respuesta consiguiendo cuatro terrenos para 22 familias: Inquilinos Guzmanenses (100 familias), Inquilinos San Antonio (80 familias), Poblado San Andrés Ixtlán (20 familias), Poblado El Fresno (20 familias).

Las casas construidas tuvieron una extensión de 49 m² y 30 m² las que fueron reparadas. La reconstrucción se inició desde el mes de junio de 1986 en las zonas de: Cristo Rey, Ma. Auxiliadora, San Pedro y Santuario-San Isidro. Sin embargo, aún existe un gran número de familias (700 aproximadamente) a quienes no se les ha dado ninguna respuesta.

Para mediados de 1987, se calculaba que había ya 14 ZONAS DE TRABAJO Y 64 COMITES DE BARRIO, unidos y articulados a través del COMITE CENTRAL DE DAMNIFICADOS.

El caminar y el crecimiento del proceso de trabajo llevó a la organización a plantearse nuevos retos y perspectivas:

-Continuar con la reconstrucción.

- Fortalecer las acciones de tipo educativa como: Talleres de block, ladrillo y herrería para promover el desarrollo de los comités y combatir el desempleo.

- Hacer proyectos de trabajo concreto que respondan a necesidades sentidas. Ejemplo: Salud, alfabetización, desnutrición, etc.

- Utilizar los fondos revolventes para implementar programas de desarrollo y solidaridad con otras comunidades económicamente más marginadas.

- Retomar constantemente la historia de los comités para iluminar el presente y fortalecer el camino que se va dando. Celebrar los principales momentos de la organización: 19 de Septiembre, entrega de viviendas, término de una etapa, etc.

Estudio y capacitación a promotores y a damnificados, para que en un futuro ellos sean agentes del trabajo comunitarios donde viven.

Lograr una organización del pueblo, que defienda y promueva sus derechos.

1. Se dice que ha concluido la reconstrucción

A pesar de que las autoridades estatales se comprometieron a entregar las obras a finales de diciembre de 1986, no es sino hasta marzo de 1987 cuando se anunciaba la conclusión de programa de reconstrucción en Jalisco.

En la entrega de las obras se presentaron el Presidente Miguel de la Madrid, Camacho Solís, secretario de Desarrollo Urbano y Ecología y al Gobernador del Estado de Jalisco, Enrique Álvarez del Castillo, donde después de los consabidos discursos oficiales, el responsable de la Comisión de reconstrucción, Julio Zamora Batiz, informó que el programa abarcó 18 municipios, atendiendo a un total de 25 mil personas damnificadas, construyéndose 2 mil 76 casas nuevas y reparando mil 105, así como 14 planteles educativos. La inversión total fue de 9 mil millones de pesos, para lo cual el gobierno federal aportó 8 mil 394.8 millones de pesos, la ciudadanía jalisciense donó 329 mil millones y el gobierno local mil 100 millones de pesos.

Del total de recursos aportados, se invirtieron cerca de 10 mil millones de pesos en el renglón educativo y en vivienda por mil millones.

Como se señaló al inicio de este artículo, fuera de la formación que se menciona aquí, tanto los efectos de los sismos de 1985, como los problemas que se enfrentaron en la reconstrucción tuvieron muy poca difusión, por lo tanto es difícil poder hacer un balance y análisis profundo sobre este proceso, sin embargo la intención de este artículo fue más que presentar de manera sintética la experiencia que se dio. Será tarea a futuro, ampliar esta información y ahí brindar elementos de análisis que al igual que el proceso de reconstrucción rescaten las posibilidades de acción de los sectores populares, en su toma de decisiones de acción alternativa.

NOTAS

- (1) Excelsior, 27 de septiembre de 1985, p. 1 E.
- (2) El Herald, 1 agosto 1986, p. 4).
- (3) Comunidades Eclesiales de Base. Documento Interno. de septiembre de 1986. Ciudad Guzmán, Jalisco, Mex.



casa y ciudad a.c.- centro de asesoría, capacitación e investigación